

OLIVIER ZAJEC GILBERT ACHCAR VLADIMIR PAWLOTSKY SERGEI MARKEDONOV
JOSÉ BENGUA QUENTIN GUILLON FRÉDÉRIC OJARDIAS IAN URBINA SERGE HALIMI

LE MONDE

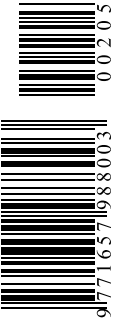
diplomatie

el dipló, una voz clara en medio del ruido
noviembre 2020

De venta en librerías

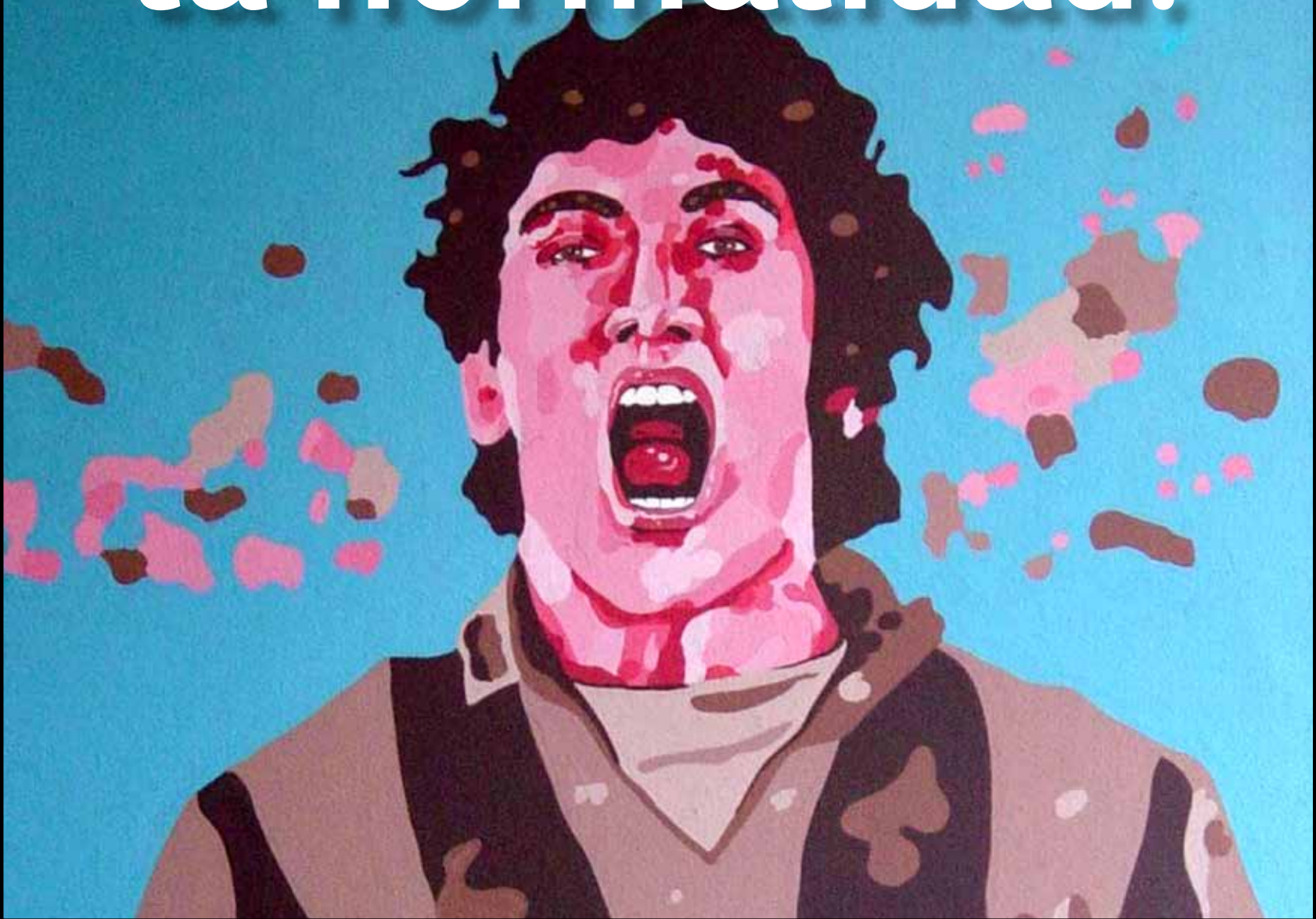


ISSN 1657988-7



Edición Colombia • Versión digital • Año XVIII • N°205 • \$ 10.000

¡Transformemos la normalidad!



Hernando Vergara, detalle, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

“Nada será como fue”, es un decir común por estos días de crisis pandémica. Que así sea: que los ricos de nuestro país reintegren e inviertan en investigación de punta e industria los cien mil millones de dólares fugados a paraísos fiscales; que el derecho a vivir no quede en vilo por la ausencia de una

UCI; que las aulas universitarias no estén cerradas para nadie; que el gobierno acate las demandas ciudadanas; que los derechos fundamentales, todos, sean más que letra muerta. Enterremos la resignación para que la felicidad sea nuestro puerto de llegada (Ver informe especial, pp. 7-21)

¿Nueva? normalidad: “Cambiar para que nada cambie”

por Carlos Gutiérrez M.

Vivimos un tiempo de crisis y ruptura; un tiempo de especial significación para la especie humana y cuyas consecuencias se extenderán sobre el conjunto de la naturaleza que habitamos. La humanidad ha transitado otros momentos similares, como consecuencia, por ejemplo, de las anteriores revoluciones industriales, la tercera de las cuales implicó la renovación de los procesos productivos, la consiguiente transformación del mundo del trabajo, la aceleración del comercio entre regiones –producto de la incorporación de las vías férreas o de una navegación de mayor rendimiento–, la consolidación misma de los Estados-nación y el desplazamiento de millones de personas que, como mano de obra barata, migraron entre países, en especial hacia Estados Unidos.

Con origen en la cuarta revolución industrial, la actual crisis y las rupturas a que asistimos están potenciadas por la particularidad de la transformación del planeta en una aldea con lo cual *el aleteo de una mariposa en algún lugar del mundo alcanza a sentirse, incluso, en su opuesto geográfico*.

Es una realidad que, además, está marcada, y de manera especial, por la disputa entre imperios, entre uno en declive y otro en ascenso, y que, poco a poco, con el riesgo de “un ascenso a los extremos” (1), va llevando al sistema mundo a la configuración de bloques que tendrán en pocos años un alinderamiento claro, por ejemplo, en los sistemas de comunicación que adopten (2).

En medio de esta crisis/ruptura, acumulada desde años atrás pero acelerada por el efecto covid-19, nada va quedando indemne. Por ejemplo, el mundo del trabajo verá reducida la jornada laboral y la patronal pugnará por quebrar aún más el salario, así como la estabilidad laboral. Son transformaciones posibles en los próximos años a lo ancho del planeta, presionando hacia la ‘modernización’ de los códigos laborales para incorporar las particularidades de las cambiantes relaciones patrón-trabajador que ya están en curso, de las cuales podrán salir lastrados si no construyen modelos organizativos de nuevo tipo y con proyección global quienes venden su fuerza de trabajo, ahora más deslocalizados hasta poder desplegar sus labores en buena proporción desde sus sitios de habitación. Pero también más marginados, hasta padecer los efectos del desempleo ya no coyuntural sino estructural, producto de la digitalización/robotización de variedad de líneas de labor. En este marco, es fundamental denunciar y combatir el *outsourcing* o subcontratación, violatorio de todos los derechos y garantías laborales, con involución de nuestras sociedades a formas de control y sometimiento características del Medioevo.

Será un cambio, es predecible, que detonará protestas y resistencias de distinto alcance, también por todo el mundo, recordando las vividas en el siglo XIX como consecuencia de la maquinización del proceso fabril. Las protestas también alcanzarán a todos los sectores adonde llegue y afecte el capitalismo informacional, que con el paso de los días coloniza mayores espacios, afectando la vida cotidiana de millones de seres humanos al tratar de controlarlos y disciplinarlos, y de predecir sus gustos por medio del despliegue cada vez más alucinante de sistemas inteligentes que permiten regular y motivar el comportamiento humano.

Son unos sistemas inteligentes que también materializan la rápida transformación del comercio, en los sistemas de compra-venta, obligando a la bancarización de sectores cada vez más amplios de la sociedad, y por su conducto haciendo más sencillo el control que se pueda desplegar sobre sus vidas. Todo un giro que también tiene consecuencias en la monopolización de amplios y estratégicos sectores de la

investigación, la producción, el mercadeo, abriendo como consecuencia de ello una disputa cada vez menos disimulada entre “globalistas” y “nacionalistas”, entre multinacionales y empresas nacionales y/o locales, lo que dará una nueva oportunidad al fortalecimiento de los Estados nacionales, esta vez de manera contradictoria, aferrados a un discurso aún más conservador en tanto actuarán en defensa de los capitales nacionales, izados como bandera por los residuos de una burguesía local enganchada a sus intereses particulares, aunque justificados desde el supuesto bienestar general y valiéndose para ello de preceptos liberales como nación, pueblo y similares.

Les corresponde, por tanto, a quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo, cada vez más tendientes a ser trabajadores ilustrados, diseñar una propuesta global que enfrente al capital, en su nueva fase –informativa, que es una de las características que hoy ganan mayor espacio. La propuesta no puede restringirse a la defensa de sus derechos sino que además debe englobar a la sociedad como un todo, reivindicando el derecho al trabajo, a salarios dignos, a la libre asociación sindical y la acción colectiva, así como al goce del conjunto de derechos humanos ahora amenazados por su efectiva mercantilización. Se trata, al mismo tiempo, de sintetizar una posibilidad de nueva sociedad donde los miles de millones que habitamos este planeta podamos beneficiarnos de las nuevas tecnologías y no ser sus víctimas, haciendo real, por ejemplo, el trabajo libre y creativo, así como la implementación de la renta básica universal (3).

Es esta una proyección de vida y sociedad posibles con la cual los sectores subalternos actúen, con los primeros avances de su elaboración, de acuerdo a los retos interpuestos por la realidad en curso, para salirle adelante al statu quo que hoy experimentamos en países como el nuestro, donde la llamada “nueva normalidad” nada tiene de nueva y sí mucho de anormalidad. Vivimos más de lo mismo pero bajo renovadas circunstancias tecnológicas, de control y dominio social, con un despliegue amplio de discursos oficiales que insisten en supuestas y extraordinarias partidas económicas para democratizar la economía y facilitar la vida de las mayorías. Un discurso sin soporte real, más allá de los conocidos subsidios de diverso tipo que desde tiempo atrás, y de acuerdo a la agenda de la banca multilateral, estaban en ejecución.

Como es sabido, estudiosos de la economía nacional, así como una amplia coalición de congresistas, intentaron que el gobierno flexibilizara su modelo económico aprobando medidas en procura de aliviar la evidente reducción en sus ingresos que golpea a millones, al tiempo que mitigar el déficit fiscal que afecta las finanzas públicas, tras dinero fresco para financiar, al menos, una renta básica extraordinaria, equivalente a un salario mínimo y con duración de tres meses, con cobertura para nueve millones de familias o su equivalente, treinta millones de personas. A pesar de la sustentación en cifras concretas, y su soporte por medio de un impuesto pagable por los más ricos y por una sola vez, así como la implementación de una reforma tributaria que elimine la multiplicidad de beneficios en que se amparan para no tributar en justicia –propuestas ahora recomendadas incluso por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–, no fue posible que el gobierno dejara a un lado la ortodoxia en el manejo de la economía.

Una senda de continuidad, de neoliberalismo prolongado y renovado a través de formas culturales y de nuevos mecanismos de control y dominio, por medio de los cuales quienes administran la cosa pública se resisten a reconocer lo evidenciado en cada uno de los sectores sociales por la crisis pandémica desatada por el covid-19, en su inmensa mayoría realidades sobre-diagnosticadas pero ahora restregadas en la humani-

dad de la totalidad social, no solo percibidas, como en otros momentos, por los especialistas.

Por ejemplo, en nuestro país, en el campo de la tributación existe un amplio segmento de medidas por tomar para garantizarle al erario un flujo fresco de dinero que, sin espantar ni ahogar a quienes más tienen, sí le permitiría acercarse a cánones internacionales y, por esa vía, reducir la histórica desigualdad social que impera entre nosotros.

Unos pocos ejemplos traídos a cuenta en el artículo “Hacia un sistema tributario progresivo y eficiente para el desarrollo” –pág. 14– resaltan que el país podría captar, con unos mínimos ajustes de normas, por lo menos treinta y más billones de pesos por año, que facilitarían necesarios recursos para una justa inyección a la inversión social y, con ello, la creación de oportunidades para que los pobres sean menos pobres y puedan gozar una vida con menos afugias, abriendo espacio para que en un futuro no lejano las mismas sean un mal recuerdo de tiempos vividos.

Sería este un giro por dar en la bicentenario forma de gobernar que nos caracteriza como país y que ha terminado por mercantilizar los derechos humanos, por ejemplo, negando el derecho universal a la educación pública y universitaria, a tal punto que los procesos del conocimiento terminaron por ser un excelente negocio para unos pocos, disfrazados en muchas ocasiones de corporaciones y fundaciones, y una bofetada para cientos de miles de jóvenes que, al terminar el bachillerato, sienten la patada de la exclusión que les propina el Estado a través del gobierno de turno, teniendo que postergar sus aspiraciones formativas para cuando el dinero lo permita, ocasión que difícilmente llega.

Por ahora, y como una lección de estos tiempos de virtualidad, el acceso gratuito y permanente a internet, como derecho fundamental, así como a una computadora (ver: “Replantear la educación superior”, pág. 10), realza como posibilidad para que quienes cursan cualquier grado de educación no queden excluidos del proceso formativo o relegados en el mismo por no poder asistir a clase de manera oportuna.

Paralelo a ello, la enseñanza abierta de lenguajes de programación, como requisito para no quedar por fuera de los retos y posibilidades abiertas por la revolución industrial en curso, emana como un propósito para quienes administran la cosa pública y como un nuevo grado formativo para toda la sociedad, cursen o no estudios superiores y/o universitarios, para abonar a un necesario proceso de cambio en la mentalidad de estudio e investigación del conjunto social, para ir quebrando el desinterés estatal por una necesaria política de punta en ciencia y tecnología que no puede quedar relegada a los relativamente pocos que han accedido a una formación científica integral y se desempeñan en forma acorde con esta realidad. Se trata de un proceso en el cual el país debe dar un salto, más que un paso: romper con el uso de software privativo e inclinarse por el de licencia abierta, condición primera para incursionar en la construcción de un camino propio, soberano en una materia en que un paso sustancial es desarrollar, ojalá en alianza con otros países de la región, un internet soberano.

Sería un camino propio que también está por labrarse en el campo de la salud, expuesta con todas sus llagas a la mirada aterrada del conjunto social, laceraciones producidas por un sistema administrado como negocio por una red de intermediarios que, como malabaristas, acuden a todos los recursos que les permite la normatividad vigente para quedarse con la mayor cantidad de dinero posible. La materialización plena del derecho en cuestión..., que espere. La lección es franca: la sociedad no puede padecer de nuevo la pelea por el acceso a una cama, a una UCI, para salvar la vida de uno de los suyos. Otro modelo de

Editorial

salud es necesario y, en esa dirección, la reforma en curso de la Ley 100 en el Congreso no es la solución (ver: *Otro sistema de salud es necesario y posible*, pág. 8).

Son múltiples los giros por dar para encaminar al país por el sendero de la justicia y la necesaria superación de la amplia brecha y la deuda social que se tiene con las mayorías, propósito en el cual no puede quedar aplazada la superación del modelo extractivista y la economía de enclave como núcleo de la economía nacional. IncurSIONAR en una política industrial y agraria verde (ver: “Los retos para el cambio climático después de la crisis”, pág. 18) es algo inaplazable, más tratándose de un país de regiones, biodiverso, multicultural, gozoso de agua y de climas, con todo lo cual puede construir un modelo de vida propio para su beneficio y el de la humanidad.

Con la vista siempre proyectada en procurar que la felicidad de vivir sea real para los cincuenta millones que habitamos esta parte del mundo, y para no seguir aplazando una de las condiciones básicas para materializar tal propósito, que consiste precisamente en que cada uno de nosotros trabaje en el área del conocimiento que lo hace sentirse pleno, hay que diseñar e implementar una política masiva de empleo que le garantice a cada quien los ingresos suficientes para que, llegado el caso de nuevos confinamientos, ni él ni los suyos queden expuestos a la intranquilidad por saber que no tienen ingresos ni, por tanto, las condiciones objetivas para cubrir los gastos diarios que exige un modelo de vida individualizante como el que impera. Es una política de empleo que debe garantizar el derecho a una pensión digna, soportada en un sistema público preocupado por el bienestar de quien cotiza a lo largo de su vida laboral y que, una vez salido del circuito laboral, debe sentirse seguro porque esos dineros no fueron asumidos como capital para la especulación ni como mecanismo por medio del cual unos terceros se lucran del trabajo ajeno, por lo cual terminan entregándole mes a mes, hasta que lo ahorrado se agote, mucho menos del salario que devengaba y, como consecuencia, dejándolo en serios aprietos para vivir en dignidad (ver: “Mejorar la protección social para la vejez pasa por marchitar el ahorro individual”, pág. 16).

Son propuestas, estas y otras muchas que podrían retomarse, izadas ante la oportunidad abierta por la crisis potenciada por el covid-19, oportunidad que no se debe desaprovechar, precisamente para avanzar hacia una verdadera y nueva normalidad, no para retomar la ya conocida y padecida. Es un reto inmenso que, lo sabemos, no será concretado por quienes detentan el poder en el país, con sus cuentas de muchos ceros protegidas en paraísos fiscales, felices con la especulación con la tierra y urbanística, con un sistema tributario que los exonera, lucrándose de modelos en salud y educativos que se diseñaron para el negocio y no para la satisfacción de derechos, así como vividores de un modelo económico que devasta las potencialidades humanas con que contamos, sin exigirse ni preocuparse por el bienestar general y la protección de la naturaleza que habitamos.

Ante todo ello, sin duda, un nuevo pacto social debe asomar en el horizonte como condición indispensable para dar el giro necesario que evite “cambiar para que nada cambie”. Un pacto que “debe surgir de un poder comunitario con capacidad de autodeterminación que oriente la política pública en sintonía con la reproducción de la vida y viabilice la configuración de una democracia radical” (ver: “Un nuevo contrato para la reproducción social de la vida”, pág. 12), dando paso a otra democracia, más allá de la formal, que, al tiempo que propicia una amplia y constante participación del conjunto social en control de la llamada cosa pública, se atreva a diseñar, evaluar y reajustar cada vez que sea necesario el cuerpo normativo por medio del cual regulemos nuestra vida y la convivencia. Un modelo social para el presente y para el futuro, acorde con los cambios que vivimos y con las tendencias de todo orden que han de llegar. ■

1. Clausewitz, Carl, *De la guerra*, Editorial Labor/.omega, 1984, España.
2. Zibechi, Raúl, “Hacia una muralla tecnológica (digital) global”, <https://www.desdeabajo.info/mundo/item/40772-hacia-una-muralla-tecnologica-digital-global.html>.
3. Dávalos, Pablo, *Un Manifiesto para el siglo XXI. De la Renta básica universal y otras utopías*, Ediciones Desde Abajo, mayo de 2020.

Consejos de redacción y administrativos

Dirección: Carlos Gutiérrez M.

Consejo de redacción

Libardo Sarmiento Anzola
Héctor-León Moncayo
Álvaro Sanabria Duque
Carlos Maldonado
Philip Potdevin
Héctor Arenas Amoroch

Colaboradores/as

Mario Hernández Álvarez
Jorge Iván Bula Escobar
Andrés Santiago León Pineda
Yenny Ramírez
Luisa Tovar
César Giraldo
Jairo Orlando Villabona Robayo
Decsi Arévalo H. y Oscar Rodríguez
Diego Guevara Castañeda
Santiago Castaño Salas
Leonardo Rojas Rodríguez
Darío I. Restrepo Botero
Camilo A. Peña Galeano
Alejandro Santillán Magaldi
Nancy Medina Carranco

Le Monde diplomatique, edición Colombia es una publicación mensual de Tebeo Comunicaciones. Bogotá, D.C.: Cra. 20 N°45A-85
Teléfono: 345 18 08
www.eldiplo.info
director@eldiplo.info

Diseño: Difundir Ltda.

Distribución - Colombia

Bogotá
Tebeo Comunicaciones.
Telf.: 345 18 08

Medellín
Carrera 48 N° 59-52 Of. 105.
Telf.: 479 86 33
eldiplomed@yahoo.es

Cali
Librería Atenas • Puestos de revistas

Edición Cono Sur
Director: José Natanson

Secretaría: Patricia Orfila
secretaria@eldiplo.org

Traducciones:
Julia Bucci, Teresa Garuñ, Aldo Giacometti, Florencia Giménez Zapiola, Patricia Minarrieta, Bárbara Poey Sowerby, Gustavo Recalde, Gabriela Villalba, Carlos Alberto Zito

Corrección: Alfredo Cortés
Diseño original: Javier Vera Ocampo

Le Monde diplomatique (París)

Fundador: Hubert Beuve-Méry
Presidente del Directorio y Director de la Redacción: Serge Halimi
Director adjunto: Benoît Bréville
Otros integrantes: Vicent Caron, Pierre Rimbart, Anne-Cécile Robert
Directora ediciones y relaciones internacionales: Anne-Cécile Robert
1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París
Tel.: (33) 1 53 94 96 21
Fax: (33) 1 53 94 96 26
secretariat@monde-diplomatique.fr
Internet: www.monde-diplomatique.fr

¿Cómo reconstruir a Colombia en la pospandemia?

por Darío I. Restrepo

Ya está claro que el objetivo por lograr, superada la pandemia del coronavirus, no es el retorno a una tranquilizante normalidad. Según la Cepal, los resultados de al menos 15 años de lucha contra la pobreza y la miseria en América Latina ya son cenizas. En la región, la masacre de pequeñas y medianas empresas se calcula en más de dos millones y medio. El desempleo bordea un quinto de la población potencialmente asalariada, mientras el sector informal abraza a más de la mitad de los trabajadores y sus familias, resumen pandémico de una tragedia social en todas sus variables.

Todo empezó por los barrios de clase alta, por donde el covid-19 entró al país y rápido se trasladó hasta instalar su mayor letalidad en los sectores populares, aquellos con mayor pobreza e informalidad laboral, con sus enfermedades conexas: hipertensión, problemas cardiorrespiratorios, diabetes, obesidad y los peores sistemas de salud. Las grandes ciudades, con sus clases adineradas, rápido ajustaron su red de atención para responder a la pandemia, pero los pueblos intermedios y periféricos se encontraron sin condiciones mínimas para atender a los infectados: camas, especialistas, medicamentos, dotaciones médicas básicas. Para los demás, dependientes de la atención pública, la crisis de las UCI alertó en rojo desde los primeros meses de la alerta.

Es esta la imagen de una injusta realidad, pese a la cual no hay retorno posible a un pasado indeseable en el que se construyeron las vulnerabilidades que explican por qué los sectores populares aportan la mayor cantidad de víctimas. Además, las consecuencias de la pandemia profundizan todas las inequidades sociales derivadas de clase, género, etnia y territorio donde se vive. Superar estas vulnerabilidades creadas supone una agenda alternativa con múltiples temáticas que se retroalimentan.

Llamo la atención aquí sobre algunas de ellas, que aparecen ante la conciencia ciudadana con mucha fuerza emergente y el giro social al que invitan. Debemos articular la sociedad con base en la codependencia, el cuidado y la solidaridad, y no con base en el lucro, la acumulación y la mercantilización de la vida, la naturaleza y los cuerpos. La salud, en particular, se convirtió en un negocio que niega el derecho universal a su goce y lo hace depender de una sociedad que discrimina los derechos de las personas según los ingresos y las propiedades que se tengan. Por otra parte, las sociedades más equitativas del mundo, con mayor bienestar y seguridad, son aquellas que cuentan con sistemas públicos de salud y educación de calidad para todos. En cambio, la nuestra es un embudo que reproduce una de las sociedades más desiguales del mundo.

Son más los retos. Terminado el ciclo de la vida laboral, pocos pueden gozar de una pensión, con lo que abandonamos a las personas mayores a la miseria y la carga para las familias. “Qué le vamos a hacer si somos una sociedad sin recursos para el bienestar de todos”, nos dicen los gobernantes. Lo que tratan de ocultar es que, entre más riqueza y fortuna posee alguien, menos contribuye con los impuestos que financian la salud, la educación y las pensiones para todos, de tal manera que el sistema tributario es un dispositivo central de la “sociedad de privilegios”, interpuesto contra la “sociedad de los derechos y las oportunidades”. Finalmente, pero no de poca monta, mientras reproducimos las discriminaciones hipotecamos el futuro de nuestro país, de América y del planeta, entregados a la orgía de la devastación de la naturaleza para su exportación, manifestación culmen de un modelo de acumulación y de poder dispuesto al sacrificio colectivo ante el altar del lucro y de la comercialización de la vida, la naturaleza y el trabajo.

Las desigualdades mencionadas no son, por una parte, sociales, y, por otra, territoriales. No. Son socio-territoriales. Es decir, las oportunidades para generar ingresos, acceder a bienes públicos en cantidad y calidad suficiente; gozar de infraestructuras, buenos servicios de salud y educación, agua potable y saneamiento básico, dependen del lugar donde se vive. De ahí que un país más incluyente, equitativo y sostenible requiere extender socio-territorialmente las oportunidades de desarrollo económico, bienestar social y democracia política. De lo contrario, la segregación territorial seguirá alimentando la pobreza, la ilegalidad y la violencia, o sea, las condiciones que profundizan los impactos inmediatos y duraderos de la pandemia. ■

La mayoría de los grandes Estados europeos desean la elección de Joseph Biden. Imaginan que facilitará la restauración de un orden mundial menos caótico. Pero la identidad del ocupante de la Casa Blanca, así como las decisiones diplomáticas de Estados Unidos ya no determinan todos los equilibrios estratégicos.

¿Qué lugar ocupará Estados Unidos?

El orden internacional que viene

por Olivier Zajec*



Hernando Vergara, sin título, acrílicos sobre lienzo (Cortesía del autor)

“Guiar al mundo democrático”. Este es el eslogan que resume el programa de política exterior de Joseph Biden. Para precisar el contenido de esta ambición, el candidato demócrata a la elección presidencial estadounidense firmó, en marzo de 2020, una columna titulada “Por qué Estados Unidos debe dirigir de nuevo”. Allí constataba que “el sistema internacional que Estados Unidos construyó con tanta precaución se está

resquebrajando”. Y oponía este declive a los triunfos conseguidos por su país –victoria en la Segunda Guerra Mundial, caída de la Cortina de Hierro– que definieron el orden internacional liberal en sus versiones bipolar (1947-1991), y luego unipolar (1991-2008). Ciertamente, el ex vicepresidente de Barack Obama admite que los peores males estadounidenses –desde el fracaso generalizado del sistema educativo hasta la desigualdad en el acceso

a la salud pasando por las fallas de la política penitenciaria– son hoy de naturaleza interna. Pero afirma insistentemente que la diplomacia sigue siendo una de las fuentes principales de la influencia de Washington y que la relación entre Estados Unidos y el mundo, dañada por la administración Trump, debe ser restaurada con prioridad, “no sólo por el ejemplo de nuestra potencia, escribe, sino también por la potencia de nuestro ejemplo” (1).

Este concepto de restauración y de ejemplaridad impregna toda la plataforma demócrata en materia de política exterior. Sus redactores –en su inmensa mayoría editorialistas estadounidenses *mainstream*, cuyas contribuciones pasan por el filtro de los expertos Ely Ratner y Daniel Benaim– consideran que el mundo no sabría “organizarse por sí solo”. No habría otra solución que la reconstrucción de un orden en el seno del cual la administración Trump sólo habría constituido un paréntesis destructivo. Entonces, este orden debería ser reconstruido, y no repensado. Estados Unidos, que detenta los planos del inmueble original, cuyas bases se mantienen, retomaría lógicamente el triple rol de promotor, maestro mayor de obras y administrador de copropiedad. En caso contrario, advierten Biden y sus consejeros, “alguien más tomará el lugar de Estados Unidos, pero de un modo que no será beneficioso para nuestros intereses y valores; o nadie lo hará, y esto llevará al caos” (2).

El mejor argumento de esta tesis paternalista es, por supuesto, la brutalidad que demostró la administración Trump en una gran cantidad de asuntos, desde el retiro unilateral del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de Irán, hasta la orientación completamente partidaria que le dio a la cuestión palestino-israelí. Sin embargo, por más convincente que resulte para algunos el contraste buscado con la política de Trump, la “restauración” diplomática demócrata descansa sobre tres errores de perspectiva.

En primer lugar, se equivoca en la definición misma de un “orden” internacional, concepto que trata con demasiada frecuencia en términos exclusivamente jerárquicos. Además, no acepta la evidencia de la evolución multipolar contemporánea. Finalmente, este proyecto demócrata deja entender que el conjunto de las acciones de la presidencia de Trump respondería al fracaso o a una lectura errónea de las relaciones internacionales. Este análisis parecería tener todo para triunfar. Pero estaría condenado de entrada por el rápido fracaso de las políticas de “restauración” que pretende.

Un “orden” internacional nunca es un bloque, sino un entramado de varios niveles. El primero (“macro político”) se basa en el efecto de polarización de las relaciones entre los Estados más potentes, en la medida en que los demás actores van a orientar una parte de su estrategia en función de estos antagonismos entre grandes potencias. Las relaciones actuales entre China, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia ilustran los efectos de atracción y repulsión de este primer nivel.

El segundo (“mesopolítico”), concierne la existencia de configuraciones regionales político-estratégicas, que presentan regímenes de cooperación y de competición diferentes en función de la identidad y de los intereses de los Estados que los constituyen. Estas configuraciones regionales pueden tener un efecto de filtro que atenúa los efectos de los enfrentamientos entre grandes potencias. Este es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, en inglés), cuyo foro permite en algunos casos que sus miembros conserven sus “opciones abiertas” a pesar de las presiones opuestas ejercidas por Pekín y Washington. Algunas potencias medias encuentran allí la posibilidad de preservar una libertad de acción estratégica defendiendo intereses concretos en su región.

Por último, el tercer elemento de un orden internacional descansa sobre la existencia, entre los diversos Estados, de una convergencia de intereses independiente de la geografía. Esto se traduce en acuerdos internacionales relativos a temáticas de interés universal en los planos sanitario, cultural, comercial, tecnológico, securitario, etc. La lista no es exhaustiva.

Un enfoque del "todo o nada"

Como conlleva varios niveles distintos, un orden internacional no está entonces tan fundado en la sola noción de jerarquía, sino más bien en el ajuste perpetuo de equilibrios inestables, sujetos a sutiles efectos de cambio, en particular a nivel regional. Ya en 1942, el teórico realista de las relaciones internacionales Nicholas Spykman brindaba una impactante traducción de esta efervescencia: "En un mundo dinámico en cuyo seno las fuerzas evolucionan y las ideas cambian, ninguna estructura legal puede ser aceptada indefinidamente. Preservar el orden de un Estado no consiste en designar de una vez por todas la supuesta solución a todos los problemas, sino en tomar las decisiones que, cotidianamente, allanarán las fricciones humanas, equilibrarán las fuerzas sociales y favorecerán los compromisos políticos. Esto implica decidir, en circunstancias cambiantes, qué es lo que merece ser preservado y lo que debe ser modificado. Preservar el orden de la sociedad internacional es un problema de la misma naturaleza" (3), escribía este crítico del mesianismo estadounidense. La evolución de la sociedad internacional actual ilustra la pertinencia de esta visión que, en lugar de oponer inercias geopolíticas y dinámicas sociales, las reconcilia en el marco de un análisis en movimiento.

Treinta años después del final de la Guerra Fría, la configuración de los equilibrios mundiales y regionales cambió de manera fundamental. Estados Unidos, que mantiene una considerable ventaja militar sobre el resto del mundo, debe tener cuenta de la evidente progresión de una China que procede metódicamente y a largo plazo. Junto a los eventuales socios que deseen "subirse al tren exprés del desarrollo chino" -para retomar la fórmula de Xi Jinping, calurosamente aplaudida en 2017 por los participantes del Foro Económico de Davos-, es ahora lo suficientemente fuerte para proponer marcos de socialización geopolíticos y geoeconómicos alternativos a los de Estados Unidos. China, bajo vigilancia desde la administración Clinton y ahora plenamente "emergida", fue el blanco evidente de las fuerzas terrestres estadounidenses cuando, en 2018, establecieron un nuevo mandamiento de la prospectiva (Futures Command). Esta vez, su misión no era disertar sobre la manera de "conquistar los corazones y los espíritus" en la "guerra global contra el terrorismo", sino preparar un conflicto armado con un adversario militar de nivel equivalente, en campos de confrontación inéditos como el espacio extra-atmosférico. El aumento de las tensiones es real: Michael O'Hanlon, experto de la Brookings Institution, llama la atención sobre el riesgo ahora plausible de guerras mayores que impliquen a Pekín, que podrían nacer en el marco de crisis localizadas, incluso con objetivos limitados (4). Este ascenso a los extremos puede parecer una fatalidad para quienes se quedan en el primer nivel de análisis del orden internacional.

En efecto, si nos atenemos a los conceptos clásicos que generalmente se uti-

lizan para pensar el futuro en este campo, existen principalmente dos posibilidades: el advenimiento de un nuevo equilibrio de bloques entre Washington y Pekín; o el reemplazo de Estados Unidos por China en la cima de la jerarquía de las potencias mundiales en el horizonte de 2050. La primera opción le daría la razón de manera póstuma a Kenneth Waltz, teórico del equilibrio bipolar de la Guerra Fría. La segunda, obligaría a confrontarnos -entre otros- a los análisis pesimistas de Robert Gilpin, teórico de la estabilidad hegemónica, o de Charles Doran, pensador de los ciclos de potencia, que sugieren que el bipolarismo es sólo un unipolarismo retrasado, y que el relevo hegemónico casi nunca se efectúa sin una guerra general.

Ambos escenarios resultan bastante convenientes para los partidarios del "liberalismo hegemónico" (5). Entre los numerosos think tanks que apoyan el "ticket" Joseph Biden-Kamala Harris, el Council of Foreign Relations (CFR) es sin dudas el representante histórico más emblemático de este enfoque. En una obra reciente, cuyo título denota ambiciones analíticas medidas (*El mundo: una breve introducción*), su actual presidente, Richard Haass, propone responder a los nuevos desafíos con recetas que remiten más o menos a las que Henry Luce preconizaba en 1941 en un artículo emblemático que definía la misión del "siglo estadounidense". "Los países del mundo desean encontrar socios. Evidentemente, los socios tienen que compartir los mismos valores. [...] Esto puede no corresponder a la imagen que la gente tiene del mundo y de la acción colectiva -el enfoque del "todo o nada" sugerido por las Naciones Unidas-. Tenemos que pensar cada vez más en la manera de forjar lo que llamo coaliciones de actores voluntarios, capaces y pertinentes, para hacer frente a desafíos particulares" (6), diagnostica Haass, autor asimismo de libros de gestión de empresas.

Al sugerir que el orden internacional liberal que desea ver retornar es mejor que los enfoques de la ONU condenados al fracaso, Haass, ferviente defensor de la candidatura de Biden, cree sin dudas demostrar su pragmatismo y su realismo. Sin embargo, el resultado es problemático. En sentido estricto, y contrariamente a lo que sostiene, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tiene un enfoque "todo o nada", sino un enfoque todos o nada. Como fue construida -al menos teóricamente- sobre el principio de la igualdad soberana de los Estados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa el único foro interestatal internacionalmente legítimo, contrariamente a las alianzas de defensa colectiva geográficamente limitadas como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), o las "coaliciones voluntarias" (coalition of the willing) cuya eficacia instrumental produjo los resultados que conocemos durante estos últimos veinte años en Irak, Afganistán o Libia.

Esta legitimidad de la ONU es aun menos sustituible si se piensa que el escenario mundial actual se ve afectado por un doble movimiento multipolar y poliárquico, algo que el autor parece no advertir. Sin contar el hecho de que no duda en resucitar algunos conceptos tan caducos como controvertidos, como el eslogan de una "coalición de voluntarios", tanpreciado por la segunda administración Bush, la lógica del "club de socios" defendida por Haass ilustra principalmente la esclerosis que afecta al concepto de orden liberal democrático, siempre a la espera de una renovación real. Michel Williams, entre otros, expuso muy bien el problema principal de este enfoque: su incapacidad de pensar el concepto de cambio social en el orden internacional (7).

¿América "primero" o "adelante"?

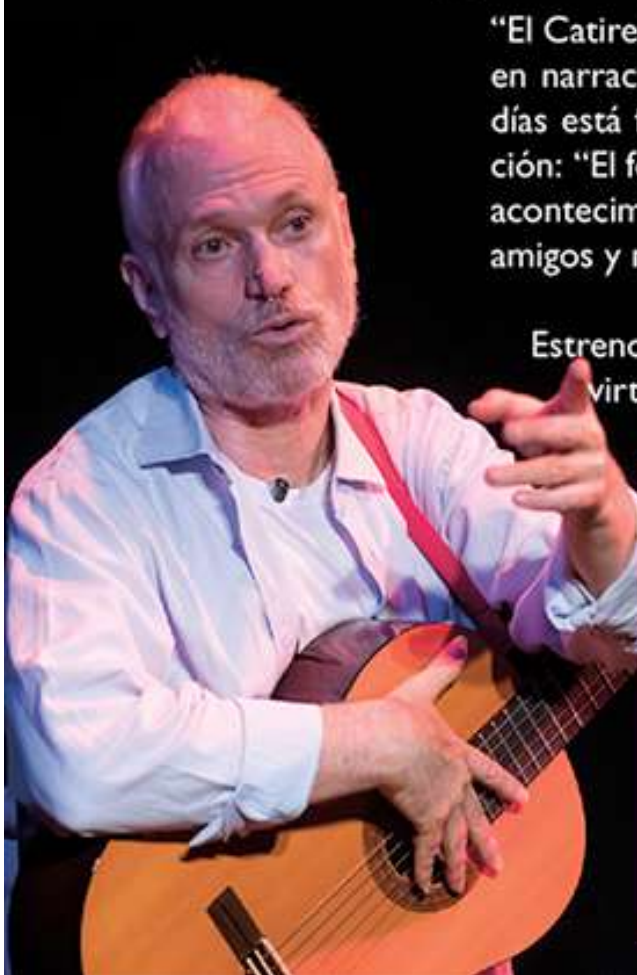
¿El concepto de multilateralismo, utilizado de manera insistente por los defensores de un orden liberal democrático más

representativo, podría constituir una respuesta a las limitaciones de esta tesis en la era multipolar? Emmanuel Macron lo sugiere cuando denuncia el estado de "muerte cerebral" de la Otan, donde todo debate se ve sofocado por algunos Estados miembro, o cuando intenta, descartando todo juicio de ingenuidad, defender un enfoque más interaccional con Rusia. Pero el multilateralismo invocado por el presidente francés posee una naturaleza doble. Por una parte, expresa una diplomacia inclusiva y participativa, respetuosa de las soberanías y de sus declinaciones culturales. Pero traduce también, para algunos, una orientación general que postula una creciente superación de las prerrogativas estatales en beneficio de un ideal de gobernanza global.

La primera dimensión del multilateralismo se impone en el nivel internacional de manera relativamente consensual porque, lejos de cuestionar el principio de soberanía, se apoya en él para funcionar. La segunda dimensión es, al contrario, objetada por un número creciente de Estados para los que la gobernanza debe quedar reservada al tercer nivel del orden internacional (las temáticas de alcance universal), mientras que los gobiernos deben ser libres, sobre la base de un proceso de deliberación nacional legítima, de poder elegir su destino geopolítico en el primer y segundo nivel (relaciones con las grandes potencias, configuraciones regionales), en acuerdo con la diversidad de los valores y la organización del diálogo que la ONU -y ninguna otra organización- tiene el deber de reflejar.

Este es uno de los principales problemas del discurso liberal-hegemónico que estructura el fondo del orden internacional que Biden se propone restaurar. Aunque el eslogan "Estados Unidos primero" sea en apariencia patrimonio de su adversario republicano, los autores de su programa lo hicieron propio sin advertirlo. Este "primero" demócrata no se expresa en tér-→

Luis Fernando Aguilar "El Catire - Encantacuentos"



"El Catire", ganador en el 2020 de una beca de creación en narración oral del Ministerio de Cultura, por estos días está fabricando el montaje ganador de esta distinción: "El forastero - anécdotas de viaje", centrado en los acontecimientos sucedidos al Catire, así como a sus amigos y narradores en sus viajes de placer y de trabajo.

Estreno: durante el mes de noviembre, de manera virtual, en algunas salas de Medellín.

Fechas de estreno:

Primera función:

Teatro "La barra del silencio"

www.facebook.com/watch/?v=1023829618133852

Viernes 13 de noviembre · 7:00 pm

Segunda función en facebook live con la corporación cultural Canchimalos

Sábado 14 de noviembre · 5:00 pm

→ menos de prioridad, sino de posición. Ciertamente, no concierne a un Estados Unidos ubicado “antes que alguien”, como lo reivindica con crudeza la visión auto centrada de Donald Trump. Pero posición, no obstante, a Estados Unidos “delante de alguien”, podríamos decir, debido a que “le corresponde a Estados Unidos marcar el camino”, como escribe Biden. Según él, “ninguna otra nación tiene la capacidad de hacerlo”, simplemente porque “ninguna ha sido construida sobre esta idea [de libertad]”. Esta visión –el orden estadounidense o el caos– se limita a una idea expresada en el 2000 por el subsecretario de Estado estadounidense, Strobe Talbott, para quien, “particularmente en este siglo, Estados Unidos intentó explícitamente y de manera persistente promover a la vez su interés nacional y sus valores nacionales, sin ver ninguna contradicción entre estos dos objetivos” (8). Esto supone que los valores nacionales, producto de una experiencia histórica específica, podrían ser universalmente aplicados.

Este excepcionalismo extraverido no percibe la creciente distancia entre el rol que Estados Unidos se atribuye y la potencia real de la que dispone. Está a punto de volverse inaudible. En la ecuación de las transformaciones internacionales contemporáneas, la exigencia de reconocimiento está, en efecto, en vías de imponerse. Este giro “identitario” no deja de amplificarse desde hace algunos años, ya sea en China, en India, en Rusia, o en el corazón mismo de los bastiones del orden democrático liberal occidental, Estados Unidos y países europeos incluidos. Tras haber vulgarizado el concepto de “fin de la historia” en cuanto terminó la Guerra Fría, Francis Fukuyama diagnosticó su retorno al publicar una puesta en perspectiva bajo el título *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (“Identidad: la exigencia de dignidad y la política del resentimiento”) (9). Aunque se posiciona contra lo que describe con razón como un “nuevo tribalismo”, no deja de asociar la noción de identidad a la necesidad de dignidad y de reconocimiento de las comunidades políticas organizadas (estatales o no), ya sea sobre los continentes “nuevos” o en “Occidente”. Por otra parte, constata la fuerza de las dinámicas de fragmentación social en un mundo económicamente globalizado.

La consideración de estas nuevas dinámicas sociales que remodelan el orden internacional no aparece en el programa de los dos principales partidos estadounidenses. A decir verdad, es legítimo interrogarse sobre la existencia misma de un programa diplomático del lado republicano. Ya sea en la teoría o en la práctica, ambos bandos se concentran en el primer nivel del orden internacional, el de la competencia en cuanto a la potencia jerárquica. Con diferentes palabras, se contentan con trasponer las consecuencias al segundo nivel, el de las configuraciones geopolíticas y geoeconómicas regionales. De ahí el interés renovado de sus respectivos teóricos por la cuestión de las alianzas (a “reconstruir”, lo que evita repensarlas). En el orden internacional que viene, y que no podría, para unos u otros, quedar en manos de la ONU, Estados Unidos no puede tener otra función más que la de líder de un bando –“Occidente” para el secretario de Estado Michael Pompeo; el “mundo libre”, para los estrategas demócratas, que prefieren esta otra expresión de la Guerra Fría–. Como lo señalamos, sin esta restau-

ración, nos espera el “caos”, según las palabras de Biden.

Esta tesis del “todo o nada” subestima o deslegitima los escenarios alternativos de equilibrio del orden internacional. Si se tiene en cuenta la inquietud aguda que afecta hoy a actores de primer rango como Japón o India debido al aumento de la potencia de China en su región, dos actores serían sin embargo capaces, juntos o por separado, de perturbar el escenario bipolar en vías de reescritura. El primero es Rusia, denunciada por el liberalismo hegemónico en Europa o en Estados Unidos, sobre todo porque Trump ensayó un *pas de deux* sostenido con Moscú desde que asumió la presidencia. Aunque se le pueden hacer reproches a este país –particularmente desde la apropiación ilegal de Crimea en 2014–, esta situación contrasta con las reflexiones de los diplomáticos estadounidenses realistas de los años 90, siguiendo el ejemplo del republicano James Baker, del que se acaba de publicar una biografía esclarecedora. “Hoy tenemos que cooperar con Rusia cuando sea posible. Y cuando Rusia se oponga a nuestros intereses nacionales, tenemos que enfrentarnos a ella. Pero es triste ver que hay personas en mi partido que lamentan que no tengamos más enemigos acérrimos. Hemos ganado numerosas elecciones durante la Guerra Fría porque éramos el partido de la defensa nacional [...]. Y algunos quieren recrear otro enemigo: China, Rusia. No podemos estar de acuerdo en todo con estos países. Pero hoy, ya no son nuestros enemigos, el problema es que podemos convertirlos en enemigos” (10), estimaba Baker, en respuesta a un periodista de *Newsweek* que lo entrevistaba en 2009 con motivo de los intentos de acercamiento de la administración Obama.

Para Europa, una ocasión perdida

El bloqueo que denuncia Baker sigue presente en el campo republicano –la personalidad de un John Bolton lo confirma–. Pero la evolución sociológica de este partido, cada vez menos elitista electoralmente, tiene como consecuencia que los guardianes de la llama de la Guerra Fría migran cada vez con mayor claridad hacia el bando demócrata. La definición de la política exterior estadounidense parece en otros términos estructurada por una suerte de lucha de clases. Esta última se ve ilustrada de manera improbable, pero eficaz, por un Trump que adopta el tono de un Dwight Eisenhower para denunciar al complejo militar-industrial estadounidense: “No digo que los militares estén de acuerdo conmigo. Los soldados, por su parte, lo están. La alta jerarquía del Pentágono probablemente no lo esté, sin dudas porque sólo quieren guerras que permitan a todas esas maravillosas sociedades que fabrican bombas, aviones y todo lo demás ser felices y continuar siéndolo” (11).

Este lenguaje va directo al corazón de los electores de Trump, que prefieren olvidar que este *deal maker* (negociador encarnizado) se regocija al mismo tiempo de haber obtenido en 2017 una promesa de compra de material militar por 450.000 millones de dólares del régimen saudí (12). Dadas las circunstancias, estas contradicciones por lo menos groseras, les parecen menos graves que las del campo demócrata, que, en nombre del cambio, pone como caballo de batalla al senador de un paraíso fiscal (Delaware) que votó a favor de la guerra en Irak en 2002. El orden internacional les llama menos la atención que la pauperización

desigual de la clase media estadounidense. Quieren que los soldados estadounidenses dejen de perder sus vidas en guerras improductivas. Firmarían sin dudar las propuestas de Biden de “hacer que la diplomacia vuelva a ser la prioridad de Estados Unidos” y abandonar las “guerras interminables”, si estas proclamaciones de sentido común no hubieran sido redactadas por las mismas personas que se opusieron a todo cambio fundamental de estrategia en Afganistán durante diecisiete años. Finalmente, les cuesta comprender por qué quienes denuncian la regresión nostálgica que expresa el eslogan “Devolverle a Estados Unidos su grandeza” (“Make America Great Again”) le dan a su propio programa diplomático el título de “Por qué Estados Unidos tiene que dirigir de nuevo” (“Why America Must Lead Again”).

El electroshock Trump ofrecía, al menos para Europa, la posibilidad de retomar progresivamente las riendas de su propio destino estratégico.

La última candidata a una perturbación del escenario bipolar en curso es la Unión Europea, más creíble en este rol que Rusia. Pero algunos de sus propios Estados miembro juzgan más ventajosa la dependencia con respecto a la Otan que la autonomía estratégica europea –un concepto impuesto por una pareja francoalemana desunida y que hace rechinar los dientes desde La Haya a Varsovia pasando por Copenhague–. La eventual elección de Biden probablemente no cambiaría en nada este panorama. Incluso podría agravarlo. El electroshock Trump ofrecía, al menos para Europa, la posibilidad de retomar progresivamente las riendas de su propio destino estratégico. Pero esta oportunidad no fue aprovechada. Y la probable restauración de una sociabilidad transatlántica si, hipotéticamente, Biden ganara, tendría el efecto de incentivar a los aliados a volver sin remordimientos a una era de subordinación estratégica.

Queda esperar que las evoluciones políticas democráticas en el continente europeo vengán a perturbar esta “muerte cerebral” que ilustra la focalización excepcional sobre los resultados electorales del soberano estadounidense. Este reflejo revela menos la importancia de Estados Unidos en el orden internacional que la impotencia europea para imaginar otra solución estratégica efectiva. A pesar de las lecciones de la era Trump. ■

1. Joseph R. Biden Jr, “Why America must lead again. Rescuing US foreign policy after Trump”, *Foreign Affairs*, Nueva York, marzo-abril de 2020.
2. *Ibid.*
3. Nicholas J. Spykman, *Americas Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power*, Harcourt, Brace and Co., Nueva York, 1942.
4. Michael E. O’Hanlon, *The Senkaku Paradox: Risking Great Power War Over Small Stakes*, Brookings Institution Press, Washington, DC, 2019.
5. Stephen Walt, *The Hell of Good Intentions: Americas Foreign Policy Elite and the Decline of US Primacy*, Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2018.
6. “James Manyika speaks with Richard Haass

El altruismo del torturado

por Renaud Lambert*

Desde el 1º de abril de 2020, los países en vías de desarrollo contrajeron más de 100.000 millones de dólares de nuevas deudas ante inversores internacionales (1). Ahora bien, los países más pobres no acceden a las tasas de interés mínimas que le permiten a Francia, por ejemplo, gastar menos endeudándose más (2). Para ellos, cada nuevo préstamo implica reembolsos más costosos, que conducen a nuevas solicitudes de fondos. Es bien conocido que ese efecto bola de nieve significa que una parte de las sumas prestadas no serán reembolsadas. ¿Cuáles?

En un artículo publicado por la revista del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuatro economistas conocidos por su capacidad para no molestar demasiado a los poderosos aportan elementos de respuesta: “Aunque el sector público sea teóricamente un acreedor privilegiado, la historia muestra más bien otra realidad. Durante la crisis de los años ochenta ligada a la deuda de los países emergentes, los acreedores privados se las arreglaron bien, mientras que los acreedores oficiales acumulaban pérdidas. [...] La situación tuvo el mismo sesgo durante la crisis de la deuda europea. [...] Este esquema se repitió durante más de dos siglos de financiamientos privados y públicos”: los acreedores oficiales cargan con “lo esencial de las pérdidas, incluso cuando inicialmente no tengan más que una pequeña parte del saldo pendiente de la deuda, como en Grecia” (3).

En este último país, la parte de los títulos de la deuda poseídos por el sector privado –principalmente grandes bancos– pasó de más del 80 por ciento en junio de 2010 a alrededor del 10 por ciento en diciembre de 2012. Al mismo tiempo, la exposición de los países europeos y del FMI –o sea, *in fine*, contribuyentes– saltaba del 6 por ciento del total al 64 por ciento.

Para los autores del FMI, tal situación ilustra “el altruismo [...] del sector oficial frente a los acreedores privados”. ■

1. Jonathan Wheatley, “Emerging economies tap debt markets but risks pile up ahead”, *Financial Times*, Londres, 28-9-20.
2. Véase “Cassandre au chômage technique”, en “Faut-il payer la dette?”, *Manière de voir*, N° 173, París, octubre-noviembre de 2020.
3. Jeremy Bulow, Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff y Christoph Trebesch, “La pandémie de la dette”, *Finances et développement*, Vol. 57, N° 3, Washington, DC, septiembre de 2020.
4. Cifras de la Comisión Europea, del Ministerio de Finanzas griego y del FMI.

*Jefe de redacción adjunto de *Le Monde diplomatique*, París.
Traducción: Víctor Goldstein

about businesses as global entities”, McKinsey Global Institute, Washington, DC, 16-10-20.

7. Michael C. Williams, *The Realist Tradition and the Limits of International Relations*, Cambridge University Press, 2005.

8. Strobe Talbott, “Self-Determination in an Interdependent World”, *Foreign Policy*, N° 118, primavera boreal, 2000.

9. Francis Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, Farrar, Straus and Giroux, 2018.

10. Adam B. Kushner, “James Baker on the return to realism”, *Newsweek*, Nueva York, 16-1-09.

11. “Trump: Pentagon leaders want war to keep contractors ‘happy’”, *Associated Press*, 7-9-20.

12. Javier E. David, “US-Saudi Arabia seal weapons deal worth nearly \$110 billion immediately, \$350 billion over 10 years”, *CNBC*, 20-5-17.

*Profesor de Ciencia Política en la Universidad Jean Moulin-Lyon-III.

Traducción: María Julia Zaparrat



Hernando Vergara, detalle sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

Informe
especial

La tarea de la pospandemia: revocar la normalidad*

El coronavirus esparció dos certezas por el mundo: la pandemia está lejos de terminar, y la crisis económica será la más profunda y devastadora de los últimos cien años. Unos, los poderosos –propietarios de multinacionales de la informática y la comunicación, banqueros y rentistas del capital–, aprovechan la crisis para incrementar su poder sobre la sociedad: monopolizan mercados, someten a los Estados a su voracidad y logran la mayor concentración histórica de la riqueza en pocas manos en la escala global. Otros –la mayoría– acumulan desespero, rabia e indignación contra los atropellos y privilegios en medio del dolor, la pobreza, el desempleo y la muerte. Pero la sociedad muestra su resiliencia desde las comunidades y los gobiernos locales. Movimientos sociales y redes internacionales han desatado el torbellino de innumerables propuestas para crear una nueva economía, con una nueva política, para una nueva sociedad: volver a la normalidad sería una derrota.

Otro sistema de salud es necesario y posible por Mario Hernández **8** | **Replantear la educación superior** por Jorge I. Escobar y Andrés S. León **P. 10** | **Un nuevo contrato para la reproducción social y de la vida** por Yenny Ramírez, Luisa Tovar y César Giraldo **12** | **Hacia un sistema tributario progresivo y eficiente para el desarrollo** por Jairo O. Villabona **R. 14** | **Mejorar la protección social para la vejez pasa por marchitar el sistema de ahorro individual** por Decsi Arévalo H. y Oscar Rodríguez **16** | **Los retos para el cambio después de la crisis** por Diego Guevara C., Santiago Castaño S. y Leonardo Rojas R. **18** | **Colombia, de la exclusión a la inclusión territorial** por Darío I. Restrepo B. y Camilo A. Peña **20** |

*Todos los artículos incluidos en el presente informe son versiones periodística de algunos capítulos de un libro en preparación de la Red de Grupos de Investigación Alternativas Programáticas Universidad Nacional, de próxima publicación por Ediciones desde abajo.

Informe
especialRevocar la
normalidad

Hernando Vergara, detalle, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

El modelo de aseguramiento adoptado por Colombia no es el único ni la mejor opción de sistema de salud. El sustentado desde y con la Ley 100/93, cuestionado por la realidad y por las comunidades desde entonces, quedó aún más al desnudo con la emergencia de salud pública propiciada por el covid-19. La reforma que de este sistema propone el gobierno no cuestiona su filosofía y sí ahonda su estructura de negocio. ¿Qué hacer?

Otro sistema de salud es necesario y posible

por Mario Hernández Álvarez*

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (covid-19, por la sigla en inglés) sacó a la luz los problemas acumulados de la salud en el mundo, entre ellos la matriz de inequidad basada en clase social, etnia, género y generación, en la forma en que siempre se encuentra, es decir, interseccional y simultánea.

Como digeran Singer y Clair (1), estamos ante una “sindemia” más que ante una epidemia extendida por el mundo, en la que se potencian varios problemas de manera sinérgica. Esta situación no es natural. Resulta de la organización de la sociedad. En este caso, la evidencia muestra que la mayor mortalidad por covid-19 ha recaído en personas mayores de 50 años con alguna comorbilidad, que es la otra pandemia de las enfermedades crónicas. La hipertensión y la diabetes, asociadas a la obesidad, son el resultado de la forma en la que está estructurado el consumo de alimentos, en especial, en las poblaciones más vulneradas de todos los países.

En la respuesta a esta sindemia, quedó expuesto el proceso de privatización de los sistemas de salud en

casi todos los países, debilitando la capacidad de los Estados para organizar una respuesta oportuna e integral, más allá del confinamiento y la represión de la población. Los sistemas de salud quedaron exigidos al máximo, pero los sistemas públicos de cuidado y protección están debilitados. Los Estados concentraron sus esfuerzos en la preparación de las unidades de cuidado intensivo (UCI), mientras se consolidaba la carrera por la patente de la vacuna, en medio de la lucha por la hegemonía mundial. Esta ruta es consecuencia de la expansión mundial de otra pandemia, la del complejo médico industrial y financiero, en creciente desde la década del sesenta, en especial en Estados Unidos (2), consolidado como uno de los frentes más promisorios del “capitalismo informacional” o “capitalismo cognitivo” basado en los derechos de propiedad intelectual (3).

En Colombia, tanto la sindemia como la respuesta del sistema quedaron expuestos con la pandemia de manera dramática. Han enfermado y muerto más personas entre los más pobres de todas las ciudades en las que el covid-19 ha golpeado con más fuerza (4). Y, claro está, el empobrecimiento ha llevado a la

otra pandemia, la del hambre (5). En estas poblaciones se concentran las inequidades simultáneas de clase, etnia, género y generación que venían de atrás. Quedó en evidencia el abandono de las áreas rurales, incluidas las más afectadas por el conflicto armado (6). Los que están peor son los que más barreras de acceso a los servicios de salud tienen, como consecuencia del sistema establecido desde la Ley 100 de 1993. Este es un complejo sistema de seguridad social en salud, con intermediarios financieros privados en competencia regulada, junto con un subsidio a la demanda para ‘pobres’.

En esta dinámica, es necesario resaltar que el sistema de salud colombiano fue el experimento que condujo a la formulación del modelo de “pluralismo estructurado” impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la segunda mitad de los años noventa (7) y hoy sustenta la agenda internacional de “Cobertura Universal en Salud”, promovida por el acuerdo entre el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000 (8). Por ello, la discusión sobre el modelo colombiano tiene impacto internacional.

Es una realidad compleja en medio de la cual, con supuesta pretensión de mejora, el gobierno colombiano, con varios partidos políticos en coalición, presentaron al Congreso de la República, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley para profundizar el modelo vigente. Supone el gobierno, como lo han hecho varios de sus antecesores, que el modelo del pluralismo estructurado es el mejor arreglo que se puede tener entre el Estado y el mercado de servicios de salud y ha logrado una cobertura casi universal del aseguramiento. Si hay problemas, es porque algunos agentes de este complejo mercado se han portado mal y es posible lograr ajustes por medio de la alineación de incentivos a los agentes.

Sin embargo, esta ruta no hará más que reproducir los problemas acumulados y develados por la pandemia, por el simple hecho de que las causas son del mismo modelo y no de los agentes. Si se quiere afrontar la sindemia en curso es necesario y posible construir una ruta que permita acordar otro arreglo institucional que ponga la salud de la población por encima del negocio de la atención médica.

¿Por qué es un problema estructural?

El núcleo central del modelo colombiano de pluralismo estructurado es la conformación de un aseguramiento público financiado por aportes obligatorios (parafiscales) de todo el que pueda pagar a un régimen contributivo, y subsidios (impuestos) para quienes demuestren incapacidad de pago por medio de la encuesta del Sisben (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) en un régimen subsidiado. Estos recursos públicos, hoy concentrados en la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres), se entregan en administración delegada a unos intermediarios financieros denominados “empresas promotoras de salud” (EPS). El mecanismo de transferencia de los recursos y de “regulación de la competencia” entre estos agentes, siguiendo la propuesta de Alain Enthoven (9), es la entrega de una “unidad de pago por capitación” (UPC) para cubrir un “plan de beneficios en salud” (PBS).

El modelo establece, entonces, que el intermediario obtendrá más rentabilidad entre menos se gaste las UPC entregadas sin retraso por parte del Estado. En efecto, este mecanismo hizo que las EPS se fueran constituyendo con pequeñas inversiones y se dedicaran a capturar afiliados, pero trataran a toda costa de evitar el gasto de las UPC para aumentar su patrimonio, sin asumir realmente el riesgo financiero. De allí se deriva un conjunto de problemas como las barreras de todo tipo administrativo, geográfico o de información al acceso a los servicios, que terminan afectando a los que están peor, así como el abandono de las zonas rurales porque no son financieramente sostenibles, o las tarifas leoninas por el pago de servicios, o las deudas acumuladas de las EPS a los prestadores, que terminan transfiriendo el impacto financiero sobre sus trabajadores y trabajadoras, y que explican la precarización laboral y la desprotección en la que se encuentran para afrontar esta pandemia.

Para mejorar la rentabilidad, las EPS aprendieron a hacer integración vertical o comercial con los prestadores, en especial, los de alta tecnología y alto costo. De esta manera, los recursos públicos recibidos por UPC serían transferidos a sus propios negocios. El mejor ejemplo fue Saludcoop y sus 134 empresas integradas. En este marco, no es extraño que los recursos públicos adicionales para atender la pandemia se concentraran en las EPS y los prestadores de alta complejidad.

La división de la ciudadanía en pobres y no pobres para la entrada a los dos regímenes y ofrecer seguros privados para los más pudientes, sostiene la desigualdad estructural en los resultados en salud. Esta división según capacidad de pago va en contra de la ley estatutaria 1751 de 2015 sobre el derecho fundamental a la salud que dice el gobierno reglamentar con su proyecto. La separación entre la atención individual a cargo de las EPS y la salud pública a cargo de los entes territoriales, ha debilitado al Estado para cumplir sus funciones constitucionales. La concentración de la atención en la alta complejidad ha desarrollado un sistema hospitalocéntrico como el que

más, abandonando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud de la población. Como puede apreciarse, las causas de los problemas evidenciados por la pandemia no corresponden al mal comportamiento de los agentes sino a la naturaleza misma del modelo (10).

Pese a la filosofía y limitantes del modelo, el proyecto de ley del gobierno se centra en darle más “gubernabilidad” del sistema al intermediario por medio de varios mecanismos. En primer lugar, cambiarle el nombre de EPS a “Asegurador en Salud” (AS), para dar la apariencia de que se trata de una empresa encargada de gestionar el riesgo financiero con el incentivo de denominar a la UPC como “prima de aseguramiento”. Esto, otra vez, es inconstitucional y va en contra de la ley estatutaria en salud porque estos recursos son públicos y de destinación específica, por tratarse de seguridad social y no de seguros comerciales como en Estados Unidos.

En segundo lugar, se propone “depurar” el mercado, dejando unas pocas AS, y entregarles “territorios de aseguramiento” para garantizarles exclusividad y economía de escala, hasta llegar al monopolio en zonas rurales con población dispersa. Esto disminuirá la competencia y formará un fabuloso oligopolio. Por esta vía las AS podrán hacer integración vertical y comercial con sus redes de servicios y proveedores. Así podrán consolidarse como grandes corporaciones, atractivas a la inversión extranjera y a la bolsa de valores como ha venido ocurriendo. Se estaría consolidando así el paso del monopolio estatal del viejo seguro social al monopolio privado de unas cuantas corporaciones que manejarán seguros de salud, de riesgos laborales y todo lo que circula en el complejo médico industrial y financiero transnacional. El resto es consecuencia.

Hacia un nuevo sistema de salud

Si se quiere reglamentar el derecho fundamental a la salud en Colombia, como establece la Ley 1751 y la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional que la interpretó, es necesario comenzar por eliminar la separación entre ciudadanos pobres y no pobres, lo cual es posible si se asume que la cédula de ciudadanía es el único documento exigible y se separa la entrada al sistema de la condición de pobre o no pobre, es decir, de la encuesta Sisben. Como dice la ley estatutaria, por el hecho de ser residente en el territorio nacional se tiene derecho a la salud, tanto en sus componentes prestacionales como en los no prestacionales. Los primeros consistirían en todos los bienes y servicios que no hayan sido excluidos por el mecanismo participativo establecido por el artículo 15 de la misma ley. Y los no prestacionales serían los esfuerzos que deben hacer los sectores del Estado y del sector privado que afectan los llamados “determinantes sociales de las desigualdades en salud” por medio de la intersectorialidad y normas específicas de regulación, lo cual es posible si se integran los recursos de los aportes obligatorios para salud o parafiscales, los de riesgos laborales, los del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), con los de impuestos, que deberían estar ligados al patrimonio o a la renta de los grandes propietarios.

Estamos ante un fondo único que sería administrado por una entidad similar a la Adres, pero sin separar cuentas por regímenes, sino por cuentas por territorios de salud. De esta forma, habría administradoras regionales o territoriales de estos recursos o Adres regionales, integrando municipios, provincias o departamentos según compartan historia, condiciones de vida, culturas o geografía. En esta instancia territorial se podrían hacer confluir los recursos con que cuentan los entes territoriales por la vía del Sistema General de Participaciones (SGP), aunque incrementado estos valores según las necesidades diversas de las poblaciones en estos territorios y según prioridades de superación de inequidades acumuladas.

Un sistema de este tipo, sin intermediación financiera alguna, permitiría organizar, de manera integral y bien planificada, los servicios de salud ofrecidos por prestadores públicos y privados, y debería ir recuperando la oferta de la red pública destruida por la competencia de mercado, para hacer cumplir

el criterio de “rentabilidad social” y no financiera, ordenado por el artículo 24 de la ley estatutaria. De esta forma, la red integrada de servicios puede ser organizada según necesidades de la población y no según la rentabilidad de agentes que compiten en el mercado. Este administrador público y territorial de los recursos puede orientar el sistema por la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) integral, a partir de equipos multiprofesionales, vinculados de manera estable y digna a través de un régimen laboral, con infraestructura y dotación suficientes, y alta capacidad resolutoria. Este equipo puede recuperar o construir un vínculo con las comunidades, las familias y las personas en una lógica territorial.

Esta perspectiva permite, como lo han mostrado otros ejemplos internacionales, articular mejor el sistema de salud con otros sectores, entre ellos el ambiental, el alimentario, el educativo, para mejorar las condiciones de vida de la población y promover su salud. Y este propósito es alcanzable, si y solo si, se hace con la participación activa y autónoma de las mismas comunidades, tanto para la toma de decisiones, como para la vigilancia y control social del uso de los recursos públicos administrados en el territorio de salud. Por ello, estas administradoras territoriales deberían contar con cuerpos colegiados que incluyan representantes de las comunidades y sectores sociales, de trabajadores de la salud y de la administración estatal, para que el esfuerzo financiero de la ciudadanía se traduzca en mejorar las condiciones de vida para la salud y el buen vivir, en atención oportuna y de calidad de las enfermedades y discapacidades, y en la superación de las inequidades inaceptables que resaltó la pandemia.

Otro sistema de salud es posible y necesario. El modelo de aseguramiento adoptado por Colombia no es el único ni la mejor opción de sistema de salud. Pero cambiar una estructura tan acendrada y sustentada en grandes intereses económicos y políticos sólo es posible si mucha, mucha gente, la considera inaceptable, se moviliza y cambia la correlación de fuerzas que sostiene esa injusticia. No es fácil, pero tampoco imposible. En este sentido avanza el movimiento denominado Pacto por la Salud y la Vida que solicitó al Congreso el archivo del proyecto de ley y exigió un proceso de debate público regional y sostenido que permita acordar un nuevo arreglo institucional en el sector de la salud para materializar, verdaderamente, el derecho fundamental establecido por la ley estatutaria en salud. Bienvenido el debate y la acción colectiva en salud. ■

1. Singer M y Clair S. “Syndemics and Public Health: Reconceptualizing Disease in Bio-Social Context”. *Medical Anthropology Quarterly*, 2003, 17(4):423-441.
2. Burlage R. y Anderson M. “The transformation of the medical-industrial complex: financialization, the corporate sector, and monopoly capital”. In Waitzkin, H. (editor) *Health Care under the knife. Moving Beyond Capitalism for Our Health*. New York: Monthly Review Press, 2018: 69-82.
3. Zukerfeld, M. “The tale of the snake and the elephant: Intellectual property expansion under informational capitalism”. *The Information Society*, 2017, 33(5): 243-260. doi: 10.1080/01972243.2017.1354107
4. Pinilla M, Ramírez Varela A, González C. Los pobres, los más afectados por la pandemia. En: <https://uniandes.edu.co/es/noticias/salud-y-medicina/los-pobres-los-mas-afectados-por-la-pandemia>
5. Oróstegui Restrepo O. El hambre, la otra pandemia que también golpea a los hogares. En: <https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-el-hambre-la-otra-pandemia-que-tambien-golpea-a-los-hogares-488032>
6. Instituto Nacional de Salud, Observatorio Nacional de Salud. *Consecuencias del Conflicto Armado en Salud en Colombia*. Noveno Informe Técnico. Bogotá, D.C.: INS, 2017.
7. Londoño, J.L. y Frenk, J. *Pluralismo estructurado: hacia un modelo innovador para la reforma de los sistemas de salud en América Latina*. Documento de Trabajo 353. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina del Economista Jefe, 1997.
8. Hernández-Álvarez M, Eslava-Castañeda JC, Henao-Kaffure
9. Enthoven A. “Managed Competition: an agenda for action”. *Health Affairs*, 1988, 7(3): 25-47
10. Hernández, M. “Sistemas universales de protecciones sociales como alternativa a la Cobertura Universal en Salud (CUS)”. *Saúde em Debate*, 2019, 43 (spe5): 29-43. <https://scielosp.org/pdf/sdeb/2019.v43nspe5/29-43/es>

Informe
especialRevocar la
normalidad

Hernando Vergara, detalle sin título (Cortesía del autor)

Es reconocida la crisis que marca a la educación superior en Colombia desde años atrás, en particular a la universitaria. La coyuntura que hoy atraviesa el país, la resalta, pero no podemos desconocer que viene desde tiempo atrás. Superarla demanda encarar de manera apropiada los retos abiertos para ella por las improvisaciones y cambios de diverso tipo a que obligó la pandemia en curso.

Los retos y oportunidades que deja el covid-19

Replantear la educación superior

por Jorge Iván Bula Escobar y Andrés Santiago León Pineda*

Es conocido y reconocido, cada crisis abre retos, a unos, intimidados por sus efectos, los puede congelar, ahondar el statu quo e incluso empujarlos a momentos negativos ya vividos, pero a otros los puede animar a un avance, a ensayar cambios, y así puede ser porque la crisis también porta el germen de la oportunidad.

De esta manera, la crisis que hoy vive nuestra sociedad producto de la pandemia propiciada por el covid-19, en el caso de la educación terciaria en Colombia más que a “reinventarse” abre el reto de “replantearse”. Y así debe ser ya que el sistema de educación superior antes de la pandemia ya padecía varios desafíos sin resolver: desfinanciamiento en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, cobertura insuficiente, y hacer frente a las dinámicas disruptivas que plantea el desarrollo de las TIC, entre otros.

Es así como puede afirmarse, tomando lo argumentado por Rincón y Espitia (1) que la educación superior pasó de estar enferma a estar en cuidados intensivos. Por ejemplo, el número de matrículas en el “sistema” de educación superior ha dejado de crecer al ritmo que traía desde 2006 y su tendencia creciente parece revertirse prontamente desde el año 2015 (gráfico N° 1).

Como lo indica la gráfica 1, existe un lento crecimiento de las matrículas, explicable por el marcado descenso en el número de estudiantes nuevos en las universidades, en lo fundamental, en pregrado (gráfico N° 2).

Esta realidad, enfrentada a las circunstancias abiertas en esta coyuntura, permite preguntar si el uso de los canales virtuales intensificados por el confinamiento padecido por la sociedad se advierte como una forma de garantizar el derecho a la educación. Si así fuera, vale este interrogante: ¿La conectividad y el acceso a internet también deberían ser derechos fundamentales?

De ser así, el esfuerzo estatal debería estar encaminado en dos sentidos: i) dotar de una computadora a cada joven del país; y ii) facilitar el acceso a internet gratuitamente en todo el territorio nacional. Es necesario avanzar en la conectividad como derecho (1) cuya concreción no puede esperar más dilaciones ni vacilaciones, y requiere el concurso de manera conjunta del sector público, pero también del sector privado, un concurso en especial en lo referente a las poblaciones ubicadas en zonas rurales alejadas en las que habitan campesinos, indígenas y poblaciones afro, comunidades históricamente rezagadas en cuando a la concreción de sus derechos fundamentales, golpeadas por la guerra y olvidadas históricamente por el Estado.

Es así como, si nuestra sociedad asume la crisis como oportunidad le estaría negado volver a la “normalidad”, es decir, continuar con la crisis del sistema; dejaría así de atender solo lo “urgente” para prestar mayor atención a los problemas estructurales (“lo importante”), y en ellos resaltan las tres misiones de las universidades:

Misión 1: La investigación

En este ámbito los desafíos no provienen en estricto sentido de la crisis de salud pública que vivimos. El problema radica en el desarrollo de los ecosistemas de investigación en los que se encuentran inmersas las universidades. Haciendo un símil con la misma respuesta dada por los países a la diseminación del covid-19, esta ha mostrado en buena medida la solidez o debilidad de los sistemas de salud para afrontar la crisis. Así, universidades que se encuentran dentro de ecosistemas más maduros, tienen mayores posibilidades de mitigar el impacto de esta crisis que aquellas donde los ecosistemas son aún embrionarios o incluso inexistentes.

Los entornos o ecosistemas de investigación reposan en unas condiciones de producción de las que, además, ellos han sido artifices. El desarrollo de

la inteligencia artificial como una de las características de la así llamada cuarta revolución industrial (4RI), y de sistemas como el Big Data y los Blockchains, entre otros, han permitido que la velocidad del procesamiento de la información se duplique cada 18 o 24 meses (2).

Es una realidad notable. A diferencia de estadios anteriores del desarrollo de la ciencia, hoy la velocidad de la información permite acelerar de manera significativa la transferencia del conocimiento de forma tal que las invenciones se materializan en innovaciones en un lapso mucho más breve. Como dice el profesor Gunda Huskobra (3), presidente del Coimbra Group Doctoral Studies Working Group con la 4RI los ciclos de la innovación se hacen más cortos. Así lo confirma la Academia Sueca con ocasión del premio Nobel de Física de 2014 otorgado a los profesores japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura: “La invención del led azul tiene solo 20 años, pero ya ha contribuido a crear luz blanca de una forma nueva beneficiándonos a todos”. Estas innovaciones tienen un efecto disruptivo para la educación superior que pone a las universidades “en una encrucijada crítica. Corren un gran riesgo de disrupción competitiva a la vez que deben estar potencialmente preparadas para un renacimiento impulsado por la innovación” (4).

Estamos ante algo que no es ni ocasional ni aleatorio. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el número nueve establece la importancia de la innovación “para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales”, pero la investigación es la base igualmente para contribuir a los desafíos en cada uno de los ámbitos cubiertos por el conjunto de los ODS, y alcanzar los propósitos en ellos establecidos. El conocimiento, señalan Bondy & Hamdullahpur (5) parafraseando a Clark Kerr, que hoy brindan las universidades en el marco de estas más recientes

Gráfico N°1

Matrícula nacional por nivel académico corresponde al primer semestre únicamente.

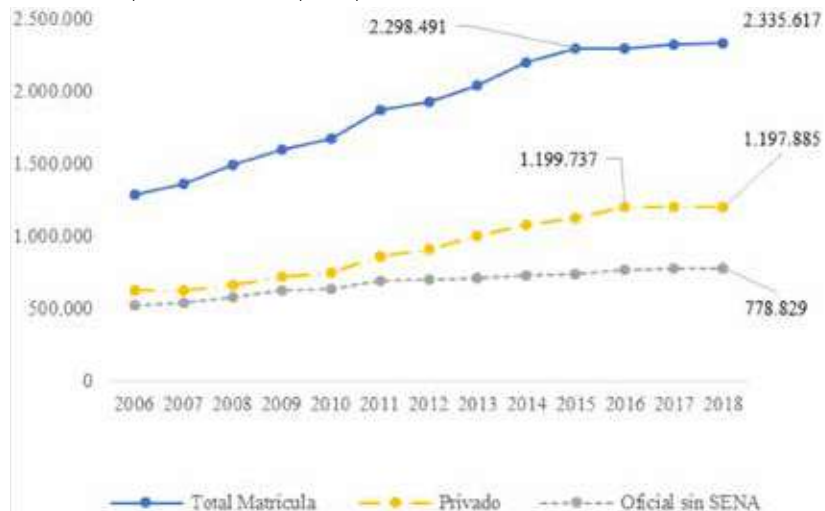
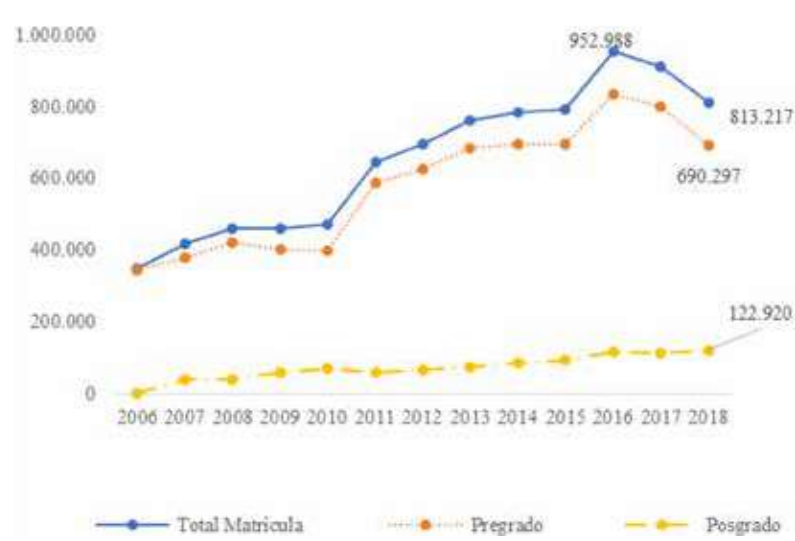
Fuente: SNIES, <https://snies.mineducacion.gov.co/portal/>

Gráfico N°2

Matrícula anual nacional por nivel académico corresponde a la suma de los dos semestres académicos sin incurrir en doble conteo.



Fuente: SNIES

revoluciones, es por tanto “central para la prosperidad nacional”.

Un proceso para el cual, ante la dificultad de movilidad internacional para consolidar el trabajo en redes y la cooperación entre grupos de investigación para fortalecer el mismo trabajo interdisciplinar, las innovaciones de la 4RI permiten obviar esta circunstancia e interactuar en tiempo real facilitando esta interacción. Lo que ahora se conoce como el Internet de Todo (Internet of Everything - IoE), ha supuesto un paso adelante al Internet de las Cosas (IoT, por su sigla en inglés) que ya no solo conecta dispositivos, sino que además conecta a estos con personas, datos y procesos (6).

Estamos ante un desarrollo que también coadyuva a la creación de ecosistemas de colaboración y de co-creación que permiten agregar nuevo valor a los procesos de investigación (7). De manera adicional, la computación en la nube permite un más fácil acceso a la información, acelerado, además, con la computación del Borde de la Red (Edge Computing), que hace más accesible la información sobre la base de localizarla al alcance del usuario, así como la computación en la niebla (Fog Computing), que en medio de la gran nube de información organiza nodos para hacer más fácil la interconexión de la computación del Borde de la Red (8). Así mismo, el “Big data y nuevos sistemas de software están racionalizando la recopilación y el análisis de datos complejos, permitiendo a los investigadores académicos reducir significativamente el trabajo manual y el error humano” (9).

En concordancia con este reto, como bien lo enfatiza el profesor XN Iraki (10) (citado por Sawahel, 2019) de la Universidad de Nairobi, si bien las “universidades deberían invertir en hardware y software que sea acorde con 4RI [...] más importante aún (es) hacer que los estudiantes y los profesores vean la 4RI como una oportunidad, no una amenaza”.

Misión 2: la docencia

El objetivo 4 de los ODS de las Naciones Unidas establece que se debe “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (11) y la Meta 4.3 plantea la necesidad de “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (12). Pero asistimos a un sistema educativo que básicamente reproduce la formación de profesionales para el buen desempeño en el mercado laboral, que si bien es un propósito deseable es insuficiente. Se requiere pensar en un nuevo modelo para la educación, más flexible, centrado en una formación más integral de los estudiantes para hacer de estas personas más empáticas y solidarias en sociedad, sobre todo, en un país que enfrenta una desigualdad tan exorbitante. Y, además, como argumenta el sociólogo Manuel Castells, “hay que formar estudiantes con personalidades adaptables” (13) más aún, con la actual coyuntura que demanda sociedades y ciudadanos más resilientes.

Frente al tema de docencia en las IES, la Unesco (14) señala que deben diseñarse medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes en

desventaja; documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos; aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo; y promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje.

En estas circunstancias, la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación universitaria obliga a considerar dos aspectos importantes: uno, el hecho de que, como lo dice el profesor Huskobra (15), el cerebro de las generaciones del mundo digital no es igual al de generaciones pasadas, si bien este desarrollo no es homogéneo pues está atravesado por las desigualdades sociales tanto de acceso como de la calidad de la educación recibida en los niveles básica y primaria. Y dos, por esa misma razón, según Huskobra, las universidades deben preparar para el futuro digital (16). Y para enfrentar este futuro, al decir del profesor Tshilidzi Marwala de la Universidad de Johannesburgo, deben ofrecer “educación multidisciplinaria, donde los estudiantes de ciencias humanas y sociales hacen materias tecnológicas y los estudiantes de materias tecnológicas hacen ciencias humanas y sociales” (17).

Estamos ante retos por encarar. Pero por ahora, la intensa virtualidad a la que hemos entrado obligados “ha puesto en evidencia la inoperancia de ciertas formas de enseñanza, basadas en el empleo de didácticas expositivas en las que el docente tiene un marcado protagonismo” (18), experiencia que permite preguntar: ¿Es viable continuar con las clases magistrales, en las que los profesores pregonan un discurso o mejor se graba en video la sesión? En efecto, las nuevas tecnologías permiten interactuar más allá del espacio físico y ampliar las fronteras del trabajo colaborativo no solo entre estudiantes sino también, entre pares académicos (Purdue blog). Además, ellas cambian la misma relación docente-estudiante, pasando del “sabio en el escenario” al de “guía acompañante”, toda vez que ya el docente no posee el monopolio de la información.

Las circunstancias impuestas por el covid-19 han obligado a un uso intensivo de las TIC para un aprendizaje remoto sincrónico (19), y parecen indicar que el retorno sin transformaciones a las aulas no se avizora como el horizonte más probable, y que esta modalidad del uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje llegó para quedarse: “La inclusión de la tecnología en la impartición de clases se está volviendo la norma” (20).

Es una realidad que lleva a la pertinente pregunta sobre la calidad de la educación basada en las herramientas virtuales. Más allá de las diversas definiciones de calidad en educación (21), los requisitos de calidad que impone el uso de las nuevas tecnologías guardan relación con las exigencias de la misma educación presencial: calidad de la infraestructura (v.g. conectividad); habilidad en el uso de estas herramientas y prácticas pedagógicas por parte del personal docente; la misma curva de aprendizaje tanto de docentes como de estudiantes en el manejo de estas tecnologías (23); así como de la calidad de los contenidos, que requieren una adecuada integración con la tecnología y las prácticas pedagógicas (24).

Estamos ante un reto que debe tomar en cuenta que la vida universitaria, que permite interactuar en

función del conocimiento y el aprendizaje, va más allá de las aulas de clase, pues la finalidad es formar personas para afrontar los desafíos de vida en sociedad. Reconociendo que el aula física, las salidas de campo y las prácticas posibilitan aprendizajes vivenciales y altamente significativos; así como las deliberaciones en cafeterías o en asambleas estudiantiles, gana terreno la idea del aprendizaje combinado (blended learning), que utiliza a la vez las herramientas del aula de clase física como las aulas virtuales. Y como lo señala Kim, las mismas actividades virtuales se han vuelto más físicas, al punto que a su juicio “está claro que los mejores lugares para la educación unirán a las personas, la tecnología y el espacio de forma innovadora”. Esto confirma que hay prácticas en la formación que permiten justificar la idea de que la virtualidad se comprenda como una actividad complementaria y no sustituta de las actividades que inexorablemente son más provechosas de manera presencial.

Misión 3: la extensión

Como bien lo advierte el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional de Colombia (25): “La extensión en contextos rurales y con deficiente conectividad plantea retos inmensos para su sostenibilidad”.

La extensión, en particular la conocida como extensión solidaria, debe enmarcarse en los ecosistemas de innovación. Pues la llamada innovación social constituye uno de los pilares esenciales para el desarrollo de las comunidades y del desarrollo territorial en su conjunto, y hace parte de la que Priesca, García y Prieto (26) llaman la “innovación oculta”, que incluye la de emprendedores sociales e iniciativas de la ciudadanía, conocidas como la del Tercer Sector. La innovación social, como lo resaltan estos autores, es además un nicho importante de creatividad, y como parte de los aspectos misionales de la universidad, es un espacio de formación ciudadana tanto para sus estudiantes como para las comunidades depositarias de las actividades de extensión. De ahí la importancia de reconocer la capacidad de innovación de los ciudadanos y de la sociedad civil, de educar en la cultura de la creatividad a nuestros jóvenes innovando en el sistema educativo, de reconocer la necesidad y capacidad de innovación en la gobernabilidad, la calidad de vida, el medio ambiente, la cultura, el arte, etcétera (27).

La innovación social, a diferencia de la empresarial, depende en gran medida de la velocidad con que se difundan las experiencias, por lo cual la creación de redes es un mecanismo esencial para su socialización. Así contribuye ella al fortalecimiento del Capital Social en cuanto sus redes de difusión logren articular diferentes actores al sistema. Ella es pues la cuarta hélice de lo que conformaría un Sistema Nacional (o Regional) de Innovación (28).

Son estas tres misiones, como parte de los retos impuestos por la 4RI, las que invitan a las universidades a repensar su quehacer académico sustentado en una perspectiva más interdisciplinar, para lo cual, como condición básica, también requiere de parte del gobierno nacional incrementar de manera significativa la inversión en ciencias y tecnología para que estas encuentren un ecosistema apropiado para su ejercicio de creación y difusión del conocimiento y del sa- →

Informe
especialRevocar la
normalidad

ber artístico, así como para cerrar la brecha digital en sus diferentes expresiones: desigualdades en materia de accesibilidad de una buena parte de la población colombiana; el “analfabetismo” digital de un buen número de docentes y el mismo rezago tecnológico del país. ■

1. Rincón, C., & Espitia, A. (25 de mayo de 2020). Educación superior: de estar enferma a cuidados intensivos. Obtenido de Razón Pública: <https://razonpublica.com/educacion-superior-estar-enferma-cuidados-intensivos/>
2. Sánchez, P. (24 de abril de 2020). “La conectividad como derecho humano fundamental”. *Comercio y Justicia*: <https://comercioyjusticia.info/blog/opinion/la-conectividad-como-derecho-humano-fundamental/>
3. Leonhard, Gerd (2016). *Technology vs. Humanity. The coming clash between man and machine*. Fast Future Publishing.
4. Huskobra, Gunda (2019) “Are universities prepared to face the challenges of the fourth industrial revolution?”, <https://www.coimbra-group.eu/are-universities-prepared-to-face-the-challenges-of-the-fourth-industrial-revolution/>
5. Christensen, Clayton M. & Eyring, Henry J. (2011). *The Innovative University. Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out*. Jossey Bass.
6. Bondy, Matthew & Hamdullahpur, Feridun (2017-) University research mobilization and the fourth industrial revolution
7. Miraz, Mahdi H.; Maaruf, Ali; Excell, Peter S.; Picking, Rich (2015). *A Review on Internet of Things (IoT), Internet of Everything (IoE) and Internet of Nano Things (IoNT)*. IEEE Xplore via <http://dx.doi.org/10.1109/ITechA.2015.7317398>
8. Langley, David J.; van Doorn, Jenny; Ng, Irene C.L.; Stieglitz, Stefan; Lazovik, Alexander; Boonstra, Albert (2020). “The Internet of Everything: Smart things and their impact on business models”. *Journal of Business Research*. Enero.
9. Pastor, Javier (2018). Edge Computing: “Qué es y por qué hay gente que piensa que es el futuro”. <https://www.xataka.com/internet-of-things/edge-computing-que-es-y-por-que-hay-gente-que-piensa-que-es-el-futuro>
10. Linney, Sarah (2019) “How is the Industrial Revolution 4.0 Influencing Higher Education?” <https://www.qs.com/industrial-revolution-4-0-influencing-higher-education/>
11. Citado por Sawahel, Wagdy (2019), *Research universities in the Fourth Industrial Revolution*, University World News, Africa Edition. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019111211231825>
12. Naciones Unidas. (15 de junio de 2020). *Objetivos de desarrollo Sostenible* <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>
13. *Idem*.
14. Castell, M. (2020). Foro Next: ¿Puede reconstruirse otro mundo? (M. Campo, Entrevistador)
15. Unesco. (21 de septiembre de 2020). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Obtenido de <https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030#:~:text=El%20Objetivo%20de%20Desarrollo%20Sostenible,todos%2E%80%9D%20de%20aqu%C3%AD%20a%202030>
16. Huskobra, Gunda (2019), *op. cit.*
17. Citado por Sawahel, Wagdy, *op. cit.*
18. *Idem*.
19. Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. (10 de julio de 2020). “Pospandemia en educación superior: retos, crisis y promesas”. *UN Periódico*, pp. 6-7.
20. Janssen, Luna (2020). How COVID-19 exposed challenges for technology in education. <https://www.gstic.org/inspiration/how-covid-19-has-exposed-the-challenges-for-technology-in-education/>
21. Kim, Andrew (SF) *How Technology Is Changing Education*, Steelcase WorkSpace Futures. <https://www.steelcase.com/research/articles/topics/technology/how-technology-is-changing-education/>
22. Pérez Bonfante, L. A. (2019). Análisis de la calidad de la educación superior de Colombia. *Criterio Libre*, 17 (31), 185-205 y López, N. (2007). Acerca de la problemática de la evaluación de la calidad de la educación en Colombia. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (3), 9-28.
23. *Idem*.
24. Yuen, Allan H.K. (2010). *Blended Learning in Higher Education: An Exploration of Teaching Approaches* en S. L. Wong et al. (Eds.) (2010). *Proceedings of the 18th International Conference on Computers in Education*. Putrajaya, Malaysia: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
25. Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. (10 de julio de 2020). Pospandemia en educación superior: retos, crisis y promesas. *UN Periódico*, pp. 6-7.
26. Priesca Balbín, Pablo; García Álvarez, Javier y Prieto Díez, Paco (2011) “Tecnología, innovación y territorio. Hacia un nuevo concepto de innovación: La innovación global”. *Ábaco*, 2 Época, N° 68/69, “La sociedad digital”, pp. 43-50
27. *Idem*.
28. *Idem*.

*Respectivamente. Profesor Asociado Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Investigador de la UN en el grupo de investigación en Economía, políticas públicas y ciudadanía de la Facultad de Ciencias Económicas y del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior.

La cuarentena ha superpuesto los tiempos y espacios del cuidado y del trabajo fuera de la casa, resaltando el predominio del trabajo reproductivo sobre el productivo. Una realidad que invita a la refundación social a partir del principio de su sobrevivencia, la reproducción, el cuidado y la solidaridad.

Un nuevo contrato para la reproducción social y de la vida

por Yenny Ramírez, Luisa Tovar, César Giraldo*

Las actividades económicas de producción y reproducción social han estado aparentemente separadas en el capitalismo. En los sectores populares esa separación no existe, en la medida en que cada vez más familias deben convertirse en unidades económicas mercantiles. El modelo basado en el varón receptor de ingresos en el espacio público y en la mujer que se dedica a las labores del cuidado al interior del espacio privado del hogar ha sido excepcional en estos sectores. Ante la precarización económica, los hogares se ven obligados a salir a la calle a generar ingresos monetarios que permitan garantizar sus condiciones de reproducción, fundiendo en un solo cuerpo el trabajo productivo y reproductivo, al igual que los espacios públicos y privados.

Es una realidad ahora ampliada a otros sectores sociales a raíz del confinamiento decretado debido al covid-19, y que trasladó al hogar múltiples actividades usualmente realizadas en otros espacios: estudiar, trabajar, hacer ejercicio, las que se sumaron a las tareas del hogar como el cuidado de los hijos, la alimentación y la limpieza. La cuarentena ha superpuesto los tiempos y espacios del cuidado y del trabajo fuera de la casa, evidenciando el predominio del trabajo reproductivo sobre el productivo.

El imperativo de defender la vida ante la crisis provocada por la pandemia colocó lo reproductivo por encima de cualquier consideración económica y mercantil. La coyuntura actual nos sitúa frente a la necesidad de construir un nuevo contrato en el que la provisión de bienes y servicios para la reproducción de la vida sean garantizados a todas las ciudadanías (1), lo que incluye las prácticas y procesos mediante los cuales la comida, el vestido y la vivienda están disponibles para el consumo inmediato; así como las formas en las que se atiende el cuidado de los niños y los adultos mayores (2). Esta reproducción social, mediante el trabajo reproductivo, asumido en la mayoría de los casos por mujeres, sostiene la acumulación en el sistema capitalista y toma lugar en espacios como los hogares, hospitales y escuelas (3).

Repensar el contrato desde la reproducción de la vida

Volver al contrato social desde la perspectiva crítica de la reproducción de la vida implica considerar las condiciones de la gran mayoría de la población, lo que nos conduce a cuestionar los modelos sociales, económicos, políticos y culturales dominantes.

La sociedad moderna del norte global que colonizó los países de América Latina trajo consigo los modelos del Estado liberal, la economía de mercado y la escuela como las formas dominantes a seguir.

En América Latina, desde inicios del siglo XX, con las sociedades filantrópicas, la policía, las escuelas y las campañas de higiene y sanidad, los pobres fueron intervenidos de múltiples formas. La desconfianza hacia los sectores populares asentada en las bases filosóficas y políticas del individualismo metodológico que concibe al ser humano, o más precisamente al hombre como un ser racional que busca incesantemente satisfacer su propio interés, instauraron la necesidad de controlar la fuerza de lo popular para mantener y garantizar el poder de la clase dominante.

El contrato social es un pacto moral basado en el miedo a la rebelión, al caos de la guerra y de la sevicia. Funda una concepción de lo político desde la obediencia. Consagra el orden desde una sociedad moral civilizada, alejada de los apetitos y la violencia con la que el poder eclesial estigmatizó a los sectores populares. Bajo las visiones de la criminalidad, la higiene y la civilización, los esfuerzos del Estado se centraron en educar y controlar a los pobres.

Las intervenciones en lo social mediante el Estado liberal tomaron lugar a través de un cuerpo especializado de expertos. A finales del siglo XIX, con las preocupaciones de la naciente planificación urbana, médicos, arquitectos y abogados criminalistas tuvieron un papel protagónico en la configuración espacial del orden social. Los sectores formales que ostentaban el poder se ubicaron en el centro y aquellos peligrosos, sucios y bárbaros en las periferias. En la actualidad dicho cuerpo de expertos adopta la forma de tecnocracia cuya premisa se basa en dirigir la vida de poblaciones pobres e “ignorantes” que no saben lo que necesitan, que deben ser corregidas y orientadas por el camino trazado. Después de más de 50 años de lucha contra la pobreza en América Latina, se ha develado la funcionalidad de este discurso para controlar a las poblaciones populares y mantener intactos la distribución desigual de la riqueza y del poder en los países de la región.

Estamos ante una realidad que a la luz de los estudios de etnología realizados por Marcel Mauss (4), nos permite verificar que la forma contrato no es exclusiva del liberalismo, que la institucionalización de relaciones de prestaciones y contraprestaciones ha tenido diferentes formas en la historia, e incluso, no siempre ha sido entre individuos, sino que en muchos casos es posible encontrar contratos entre per-



Hernando Vergara, detalle, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

sonas morales (clanes, familias). Como hecho social total, el contrato se encuentra incrustado (5) en relaciones sociales, jurídicas, políticas, económicas, morales y estéticas.

Un contrato, que incluso en el último texto redactado entre nosotros, no ha servido para resguardar y potenciar la vida, y necesitamos recrearlo a su favor. En ese proceso es menester que la mayor parte de personas que habitamos el territorio podamos participar en las decisiones sobre la forma de vida que queremos llevar y proponer alternativas, ante la crisis de la vida desencadenada por la lógica de acumulación capitalista.

El rol del Estado en este nuevo contrato

Frente a los escasos resultados de las políticas asistenciales y de focalización en poblaciones pobres, consideramos fundamental repensar las intervenciones del Estado desde la acción pública. Los sectores populares han evidenciado sus saberes en las historias territoriales de autogestión, en la configuración de barrios en la periferia, en el manejo de acueductos comunitarios y en la transformación de áreas públicas como espacios de historia colectiva y de memoria, entre otros. Su forma de hacer política no se inscribe en la trayectoria meritocrática de transitar por la escuela y por prestigiosas universidades para llegar a los espacios públicos de las Cortes, el Congreso o los Ministerios. Sus prácticas políticas parten de caminos para garantizar la reproducción de la vida en sus territorios, para construir casas y parques en las laderas, para gestionar el suministro de agua o de alimentos o defender ríos como fuentes de vida. El primado de la acción política de origen popular es la reproducción de la vida.

Ante los retos que impone la reproducción de la vida para el 99 por ciento realiza como indispensable avanzar hacia un Estado (6) cada vez más articulado a los sectores populares, en lo que Alexander Roig denominó la acción pública, en la que “cuanto más dentro del Estado esté la sociedad, más van a circular saberes en ambos sentidos y, más prácticas se pueden transformar” (7). Es a partir de su saber territorial y organizacional que en medio del virus podrá enrutarse hacia opciones de vida viables para la mayoría.

Estamos, por tanto, ante la institución que ha centralizado los recursos públicos y la responsabilidad del bienestar colectivo, que sostenemos en el día a día por medio de la tributación directa e indirecta, el respeto o desafío a la autoridad y la defensa de la Constitución Política. Tenemos el reto de reconfigurar esa institución de tal forma que su principal propósito sea la disposición y fortalecimiento de las infraestructuras físicas y sociales para el florecimiento de la vida en sus múltiples manifestaciones.

Garantizar las condiciones del cuidado y de la reproducción social es una responsabilidad del Estado, quien debe velar y preservar la vida digna de toda la ciudadanía. La perspectiva de la reproducción social frente al covid-19 exige una comprensión amplia del cuidado en la que se prioricen los intereses de la

vida sobre los del capital, en la que prevalezcan las relaciones de solidaridad y no la estabilidad y rentabilidad de los mercados, mediante infraestructuras e instituciones públicas y comunitarias que se encarguen del bienestar de la sociedad. El Estado debe entrar directamente a abordar las necesidades de todos los afectados por la crisis del covid-19 y no reforzar la estrategia individualizadora de focalización que fractura las comunidades y sus redes de apoyo.

El camino para que las comunidades puedan reapropiarse de los recursos y de lo público implica reafirmar las formas de organización territorial y de autogobierno, que recuperen el proceso de reproducción y de la vida. Frente a las características excluyentes y delegativas de la democracia representativa que niega la capacidad colectiva, el nuevo contrato con sus lógicas, dinámicas, reglas de uso, debe surgir de un poder comunitario con capacidad de autodeterminación que oriente la política pública en sintonía con la reproducción de la vida y viabilice la configuración de una democracia radical.

La participación vinculante de los sectores populares

Los sectores populares, en histórica tensión (relación, influencia, antagonismo) con la clase dominante (8), han cumplido un papel importante en la reproducción social y de la vida, y es necesario volver a sus saberes y prácticas para pensar las alternativas a la crisis sistémica ahondada con la pandemia.

Un ejercicio en el cual hay que tomar en cuenta la variación vivida por sus formas de vida social, política, económica y cultural, dejando atrás pasados atrasados y premodernos, reconfigurándose a lo largo del tiempo bajo dinámicas y características concretas en los territorios. Entre ellos hay, por ejemplo, trabajadores que generan ingresos monetarios en unidades autogestionadas, sobre la base de prácticas y saberes individuales y colectivos, pero que carecen de derechos sociales.

Para el Estado, sus trabajos históricamente han sido considerados por fuera de las regulaciones formales y, por ello mismo, los criminaliza desde el derecho punitivo. Los/as trabajadores/as populares son productores/as de bienes y servicios que están, según Pablo Chena, “más cercanos a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo [...] Siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero nuestra idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción” (9).

Son actividades que comprenden mejor los requerimientos de la comunidad, y son productores que deben tener reconocimiento legal y político y ser apoyados con crédito adecuado a sus necesidades. El reconocimiento no se limita a registrar que existen, sino que dentro de la institucionalidad estatal implica involucrar sus organizaciones, sus miembros y dirigentes como agentes activos con plenos derechos.

A partir de esta realidad, proponemos concebir esta relación de materialización de la reproducción de la vida para el 99 por ciento mediante las Alian-

zas Público-Populares (APPO, cuyo desarrollo demanda, en primer lugar, unas reformas normativas (al estatuto de contratación y Ley 142 de 1994) y, en segundo lugar, definir unos principios que orienten el relacionamiento entre las comunidades con la administración pública, mediante una acción política, dirigida a apoyar procesos colectivos que se dan en el territorio y no una relación contractual con operadores privados. Se trata de procesos que resuelvan en la práctica las necesidades de reproducción social de las comunidades y de las organizaciones de oficios populares respetando su autonomía.

La potencialidad de un contrato para la reproducción de la vida

Este nuevo contrato entre las comunidades y el Estado debe superar la separación del individuo y su comunidad, que ha caracterizado una larga historia de violencias, despojos e intervenciones articuladas a través del Estado liberal. La propuesta planteada se distancia de aproximaciones individualistas. Por el contrario, la experiencia evidencia que lo comunitario es lo que ha permitido superar la crisis y que las mujeres han tenido un rol protagónico en la medida en que lideran las actividades relacionadas con las necesidades básicas para la vida. Son las comunidades quienes conocen y pueden atender las necesidades de su población. La solidaridad es la base de la colaboración entre semejantes para conseguir un bien común, contraria a la filantropía o altruismo que siembran desigualdad.

Nos encontramos frente a un escenario, en el que el capital puede y va a aprovechar las condiciones de caos para profundizar el “capitalismo del desastre” como lo plantea Naomi Klein o, por el contrario, las comunidades luchan por un giro radical hacia la construcción de un nuevo contrato. Cuando los sectores populares garantizan su autonomía y posibilidades de existencia, el capital encuentra dificultades para controlar y explotar su trabajo y subyugar las comunidades a sus exigencias.

Es indispensable replantear radicalmente los fundamentos sobre los cuales se garantiza la reproducción social y de la vida en condiciones de autonomía frente a las relaciones capitalistas. El nuevo contrato para la reproducción de la vida debe tener como referente el trabajo, los derechos sociales, lo común, el territorio, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y sus organizaciones, la reconexión con la naturaleza y un Estado a favor de la reproducción de la vida y no en función de defender y garantizar la acumulación de capital. La potencialidad de dirigir los esfuerzos de varios sectores de la población que han comenzado a desarrollar actividades autogestionarias, redes de articulación y procesos de reflexión y aprendizaje radica básicamente en su capacidad para reproducir la vida. ■

1. Desde una perspectiva feminista, entendemos la reproducción social como las actividades y relaciones directamente involucradas en el mantenimiento de la vida cotidiana de las personas en diferentes generaciones. Estas involucran trabajos socialmente necesarios—mentales, físicos y emocionales— dirigidos a proveer y mantener la reproducción social de la población.
2. Benzason, K & Luxton, M. (2006). *Social Reproduction*. Montreal: McGill Queen's University.
3. Ferguson, S. (2017). *Children, Childhood and Capitalism: A Social Reproduction perspective*. En *Social Reproduction Theory Remapping Class, Recentring Oppression* (pp. 112-130), editado por Bhattacharya T. Londres: Pluto Press.
4. Mauss, M. (2009). *El ensayo sobre el don*. Madrid: Kartz editores
5. Polanyi, K. (2007). *La gran transformación: crítica del liberalismo económico*. Madrid: Quipu
6. Entendemos el Estado como una institución histórica, como un espacio de lucha que han disputado las movilizaciones obreras y sociales en busca de la redistribución de la riqueza y que en Colombia es necesario situar en la realidad de sus territorios, ricos en recursos, en formas de producir y reproducir la vida y de agenciar lo político.
7. <https://www.conclusion.com.ar/por-los-medios/roig-no-alcanza-una-redistribucion-del-ingreso-hace-falta-una-redistribucion-del-poder/07/2020/>
8. Hall, S. (1984). *Notas sobre la deconstrucción de “lo popular”*. En *Historia popular y teoría socialista* (pp. 185-198), editado por Ralph Samuel. Barcelona: Crítica.
9. <https://www.telam.com.ar/notas/202007/485388-registro-economia-popular-trabajo-formal.html>

Informe
especialRevocar la
normalidad

Hernando Vergara, detalle sin título (Cortesía del autor)

Colombia, un país de profunda desigualdad e injusticia social, cuenta con un régimen tributario que así lo permite. Sus tasas impositivas favorecen a los ricos entre los ricos, a los ricos, a los que cuentan con valiosas propiedades, a quienes perciben ingresos por dividendos, y graban al que recibe el salario por su trabajo. Es el tiempo de reformar todo su sistema tributario, en sus distintas escalas y posibilidades.

Hacia un sistema tributario progresivo y eficiente para el desarrollo

por Jairo Orlando Villabona Robayo*

El sistema tributario colombiano está altamente erosionado, como consecuencia esencialmente de la enorme cantidad de beneficios tributarios que persisten sin una adecuada justificación. “La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios no sólo afecta a todos los países en el ámbito económico, ya que se convierte además en un asunto de confianza, dijo el Secretario General de la Oede, Ángel Gurría”

A pesar de las múltiples modificaciones centradas en el corto plazo, ajustes e inclusive reformas al sistema tributario colombiano, a lo largo de las últimas décadas la recaudación tributaria en relación con el PIB no ha sido la más favorable, constituyéndose por ello Colombia en uno de los países en todo el mundo con más baja productividad y eficiencia en la recaudación de impuestos. La baja productividad puede explicarse, debido a la incorrecta administración de los tributos, una inadecuada planeación, la constante evasión y elusión de impuestos, la abundancia de tratamientos preferenciales, excesivas deducciones y exenciones sobre las rentas del capital, así como por la creciente economía informal.

La regresividad del sistema tributario en nuestro país ha generado una gran inequidad, el coeficiente de Gini de por sí muy alto antes y después de impuestos, prácticamente permanece invariable, mientras

en los demás países de la Oede este disminuye cerca de 15 por ciento después del pago de impuestos, cumpliendo la función de redistribución del ingreso y la riqueza. La regresividad del sistema tributario en Colombia contempla todos los impuestos, situación muy extraña a nivel global, más aún en un país que pertenece a la Oede.

Para ejemplificar esta situación, en la siguiente ilustración se aprecia como cuatro personas con el mismo ingreso pagan impuestos diferentes, rompiendo la equidad horizontal.

Son evidencias de que el sistema tributario colombiano está diseñado para favorecer a un sector específico de la sociedad. Veamos. El impuesto de renta de las personas naturales es el que genera mayor recaudo a nivel global, pero en Colombia ocurre lo contrario: recauda una tercera parte de los países de la Oede.

Esto se explica por los excesivos beneficios a las altas rentas; las empresas generan mayor recaudo que las personas naturales, pero lo más grave es que esto no sucede porque las empresas estén pagando muchos impuestos, sino por cuanto los hiper ricos pagan una tasa efectiva muy baja, de hecho el recaudo porcentual frente al PIB en el caso de las empresas es muy similar en Colombia frente a los demás países de la Oede.

Los ejemplos que evidencian esta realidad son abundantes, acá uno: en la declaración de ren-

ta del año 2018 del senador Arturo Char, declaró \$516.377.000 por dividendos y no pagó nada de impuestos por este concepto; pero si esa misma renta hubiera correspondido a un trabajador habría pagado un total de \$125.584.000!

Con base en las tablas de impuestos para Personas Naturales tomadas de Japón, Francia y España, se puede establecer una tabla más progresiva para el caso colombiano, que genera mayor recaudo y equidad.

En simulaciones realizadas con base en este cambio en el sistema tributario, tomando las ganancias del sector financiero y de las 5.000 empresas más grandes en 2018, con las condiciones actuales, el recaudo del año gravable 2018 en impuesto a la renta, por solo dividendos, hubiera aumentado en cerca de \$5.5 billones. Un resultado, asumiendo una distribución de este rubro del 50 por ciento, principalmente explicado por la reducción de los beneficios a los dividendos, la eliminación de las rentas cedulares y el establecimiento de nuevos rangos en los mayores ingresos.

El sistema tributario en Colombia requiere un cambio estructural profundo para el largo plazo. Si bien cada dos años o menos aprueban reformas tributarias, estas son coyunturales, generalmente cubren los déficits, con un alcance de corto plazo, sin atacar los problemas de inequidad ni de eficiencia.

Estamos ante una realidad, protectora de intereses muy marcados, que es posible de virar. En efecto, cuando se revisan los sistemas tributarios de varios países de la Oede se aprecia la existencia de una variedad de tasas impositivas cobradas a las empresas. En casos como en España y Alemania se cobra la misma tasa a todas; en países como Japón, Canadá, Bélgica, China y Brasil se aplican tasas diferentes dependiendo de las ganancias, las cuales podrían asociarse también de manera general al tamaño, como puede apreciarse en la ilustración 2.

En la muestra tomada, el promedio simple de las diferencias entre las tasas de las de menores ganancias y las demás es cercano al 9 por ciento, que es el mismo porcentaje sugerido por aplicar en Colombia; se recomienda que las ganancias para las menores ganancias tributen el 21 por ciento y para las demás del 30. Tomando como referencia el caso francés pueden considerarse como menores ganancias las inferiores a \$2.067 millones en pesos de 2020.

Este cambio en la tributación favorecería en esencia a las micro, pequeñas y algunas medianas empresas, generando progresividad en la tributación de la MiPymes que hoy en día se encuentran en gran inferioridad frente a las grandes compañías y grupos económicos, las cuales también tienen beneficios de estabilidad jurídica. Es una real desventaja que explica la dificultad que enfrentan actualmente las MiPymes para competir con estas grandes corporaciones nacionales y multinacionales, toda vez que son desfavorecidas en las tasas financieras, en la capacidad tecnológica, en los mecanismos de mercadeo y publicidad, lo que explica su alta mortalidad.

Beneficios fiscales

El efecto de los beneficios fiscales se explica en la amplia brecha entre la tasa efectiva y la tasa nominal, tanto en las personas naturales como en las empresas. De acuerdo con el estudio de Alvaredo y Londoño (2013), la tasa efectiva de tributación del grupo 1/100 fue del 4,8 por ciento, mientras que la del 1/100.000 fue de 1,8, cuando la tasa marginal para esos ingresos era del 33 por ciento. En el caso de las empresas la tasas efectivas promedio entre 2000 y 2015 fue un tanto superior al 17 por ciento, cerca de la mitad de la tasa nominal. Para el sector financiero, sin los bancos, el porcentaje fue cercana al 9 (Villabona y Quimbay, 2017).

Para así avanzar, deben evaluarse los 229 beneficios actuales que vuelven el sistema muy complejo, eliminando aquellos que no determinen un verdadero beneficio social representativo. También deben asignarse por un tiempo limitado; cada vez que se piense establecer un beneficio fiscal, debe realizarse el estudio beneficio costo para cada uno de ellos, lo que implica que el valor dejado de recaudar que corresponde al costo fiscal debería ser menor que el beneficio que está recibiendo la sociedad.

De acuerdo con (Rodríguez, 2019), hay dos aspectos irregulares que son determinantes en el otorgamiento de algunos beneficios fiscales: el primero es el

Ilustración N°1. Liquidación impuesto renta 2018

	Liquidación por rentas Cedulares		Utilidad Fiscal Gravable (Renta Líquida Gravable)	
	Martha Pérez	Carlos Mayorga	Sofía Sarmiento	Pedro Cabal
	Empleado	Arriendos	Accionista Bancario	Empleado, inmobiliario y accionista
Laborales	\$ 236.311.350			\$ 78.770.450
No Laborales		\$ 236.311.350		\$ 78.770.450
Dividendos			\$ 236.311.350	\$ 78.770.450
Total Ingresos	\$ 236.311.350	\$ 236.311.350	\$ 236.311.350	\$ 236.311.350
Impuesto	\$ 59.982.000	\$ 65.824.000	\$ 21.082.000	\$ 28.899.000
%	25,4%	27,9%	8,9%	12,2%

Fuente: Elaboración propia con base en las tablas año gravable 2018 Dian.

Ilustración N°2. Impuesto de renta personas jurídicas en el mundo 2019

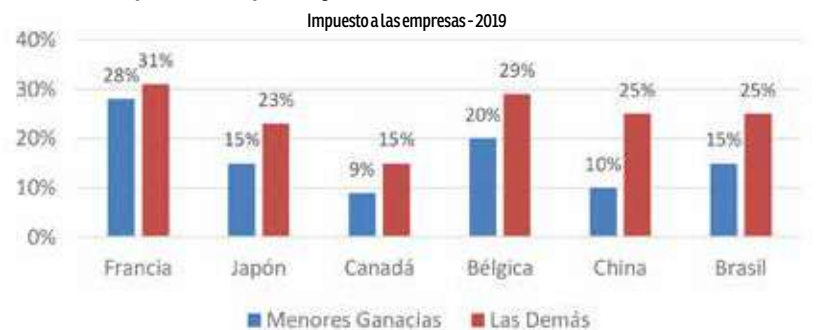
Fuente: <https://santandertrade.com/es/portal>

Tabla 1. Cálculo recaudo adicional por dividendos

Cálculo recaudo adicional personas naturales estimado por dividendos 2018 frente a situación actual	
Utilidades billones financieros y 5,000 más grandes	\$ 102,6
Tasa efectiva	17%
Impuesto	\$ 17,4
Utilidad neta	\$ 85,2
Dividendos del año decretados al	50%
Dividendos recibidos por accionistas billones	\$ 42,6
Concentración altos ingresos	80%
Dividendos altos ingresos billones	\$ 34,1
Tasa de impuesto renta estimada altos ingresos personas naturales	42%
Impuestos estimado personas naturales altos ingresos por dividendos billones	\$ 14,3
Menos: Impuesto pagados por la empresa proporcional	\$ 5,8
Menos: Impuesto actual ponderado 9%	\$ 3,1
Recaudo adicional en dividendos personas naturales billones	\$ 5,5

Fuente: Elaboración propia con base en las tablas año gravable 2018 Dian.

Tabla N°2. Cálculo de recaudo adicional en empresas estimado 2018

	Utilidad estimada antes de impuestos billones \$	**Utilidad neta billones \$	***Tasa efectiva estimada en 2018	Impuesto recaudo estimado TET	Tasa efectiva disminuyendo beneficios impuesto de renta	*Impuesto recaudo estimado a nueva aTET	Diferencia recaudo	Valor estimado diferencia recaudo impuesto billones
Bancos	13,5	11,3	16,5%	\$2,2	29%	\$3,9	12,5%	\$1,7
Seguros y administradoras pensiones y cesantías	3,2	2,9	9,8%	\$0,3	29%	\$0,9	19,2%	\$0,6
5,000 empresas más grandes	85,9	71	17,3%	\$14,9	29%	\$24,9	11,7%	\$10,0
	\$102,6	\$85,2		\$17,4		\$29,8		\$12,4
Tasa			17,0%		29%			12,0%

* TET Tasa efectiva de tributación
** Información superfinanciera y dinero
*** Con base estudio tasas efectivas de tributación Villabona y Quimbay (2017)

Fuente: Cálculos propios con base en información de Superfinanciera (2019) y Revista Dinero (2018).

Tabla 3. Tabla sugerida del impuesto a las herencias en Colombia

Importe desde herencia	Tasa
\$ 400.000.000	5%
\$ 810.000.000	10%
\$ 1.215.000.000	12%
\$ 2.430.000.000	14%
\$ 8.100.000.000	16%
\$ 12.150.000.000	20%
\$ 24.300.000.000	25%
\$ 36.450.000.000	30%
\$ 60.750.000.000	35%
\$ 85.050.000.000	40%
\$ 133.650.000.000	45%

Fuente: Cálculos propios con base en www.publictable.com

lobby o cabildeo ejercido por especialistas en el tema o emisarios de grupos económicos; el otro corresponde a la financiación de las campañas políticas. El lobby o cabildeo es un mecanismo inequitativo y opaco, es muy difícil rastrear, debido a que en Colombia no existe regulación sobre el tema; en el caso de la financiación de las campañas políticas, es la pieza clave para asegurar que los congresistas aprueben leyes que favorezcan a grandes sectores económicos, o por lo menos que no los afecten en las campañas electorales.

En un sencillo ejercicio para evidenciar el beneficio que representa para el país tomar alguna de estas medidas, se toman las utilidades de las empresas más representativas del sector financiero y se eliminan gran parte de los beneficios tributarios, aplicando la tasa efectiva de tributación del 29 por ciento, que se acerca más a la tasa nominal, obteniendo como resultado un recaudo adicional, en el 2018 y para las personas jurídicas incrementado en cerca de \$12.4 billones.

Impuesto a las herencias

El mecanismo más efectivo para disminuir parcialmente la gran concentración de la riqueza es el impuesto a las herencias, el que en Colombia corresponde a un 10 por ciento para cualquier herencia, bien sea de una persona hiperrica o de una persona muy humilde, lo que de hecho ya va en contravía de la equidad vertical.

En Francia la tabla de impuesto a las herencias está en varios rangos entre el 5 y el 40 por ciento; en Chile está entre un 1 y un 25 por ciento. Anteriormente las

herencias se trataban en Colombia de forma similar al impuesto sobre la renta. Con la tabla sugerida la herencia más alta del país, estimada según Forbes en \$41 billones en 2020, pagaría con las leyes actuales \$4.1 billones, mientras que con la tabla progresiva pagaría \$18.5 billones, es decir \$14.4 billones adicionales.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Colombia tiene la tercera tasa general más alta del IVA en América con el 19 por ciento, por debajo de Uruguay (22%) y Argentina (21%), también está por debajo de países nórdicos, de los Países Bajos, Alemania y Bélgica; sin embargo, en el caso de los países europeos estos tienen un ingreso per cápita promedio de USD \$57.186, un 273 por ciento más alto que Colombia, adicionalmente nuestro país tiene un coeficiente de Gini en ingresos un 73 por ciento superior al promedio de estos países, por tanto un alto IVA afecta a la mayoría de la población. Dado el bajo ingreso per cápita generalizado de los colombianos, lo más apropiado en principio es bajar la tarifa general al 15 por ciento, cercano al promedio mundial de este impuesto.

En la medida en que aumente el ingreso per cápita y disminuya el coeficiente de Gini podría pensarse en un aumento de la tarifa del IVA. Es necesario resaltar, en todo caso, que de ninguna forma es conveniente gravar más productos de la canasta familiar con este impuesto, pues eso golpea de manera directa a las personas de menores ingresos y, sobretodo, a la clase media, en esencia los trabajadores, prestadores de servicios y microempresarios, quienes hoy en día tienen la mayor carga en impuestos.

Catastro

El impuesto predial es una fuente importante de recursos para las finanzas territoriales, sin embargo, en Colombia no se ha querido realizar la actualización catastral por la presión y los intereses particulares entre estos de los políticos, muchos de ellos grandes poseedores de tierras.

Desde 2014 Juan Antonio Nieto Escalante, el director del Igac, subrayó que esta actualización es un importante instrumento dentro de una política de tierras que conduzca a un "nuevo campo colombiano" mediante una "Reforma Rural Integral", como reza el compromiso preliminar logrado en La Habana. Sobre este particular, Nieto Escalante señaló que será la base para buscar una distribución más equitativa de la propiedad rural y un mejor uso del suelo. So-

bre lo primero recordó, por ejemplo, que Colombia es uno de los países de más alta concentración de la propiedad rural. Ocupa el puesto 60 dentro de setenta países, con un índice Gini de 0.86.

Mientras en Colombia, específicamente en Bogotá, la tasa más alta en el impuesto predial es del 1.2 por ciento, en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Francia las tasas son del 3.1, 2.9 y el 2.6 por ciento respectivamente, lo que evidencia un alto potencial para un mayor recaudo en este tipo de impuesto.

Paraísos fiscales y acuerdos regionales

Varios de los países desarrollados tienen una doble moral con los paraísos fiscales y permiten que funcionen incluso en sus mismas geografías o posesiones. Para captar grandes capitales, concededores que sus propietarios buscan resguardos para ocultar sus grandes ganancias y fortunas, promueven una competencia desleal en materia tributaria. Es como buscar permanentemente la cueva de Ali Babá y los 40 ladrones.

La evasión y elusión de impuestos, fomentadas legalmente por la competencia fiscal de los Estados, se han trivializado, y las estrategias de optimización de los bancos y las multinacionales recurren a paraísos fiscales, montajes jurídicos y contables.

Ante estas circunstancias, de no lograr un intercambio automático de información, Colombia debe prohibir los giros desde o hacia paraísos fiscales, incluido Panamá. En declaraciones a *El Tiempo*, el exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega afirmó que los colombianos tienen 100.000 millones de dólares en otras jurisdicciones, recursos que no tributan en el país, una cifra equivalente a 370 billones de pesos. Si a estos dineros evadidos les cobraran el 1 por ciento como impuesto al patrimonio, se generaría un recaudo adicional de \$3.7 billones y en renta, asumiendo una renta promedio del 5 por ciento, genera un recaudo adicional estimado en \$5.9 billones.

Estamos, por tanto, ante una diversidad de posibilidades para fortalecer las finanzas del país, mejorando así el espacio para una inversión social cada vez más amplia, a la vez que reduciendo la brecha de injusticia y desigualdad social que lo caracteriza. Un giro que depende de la presión ciudadana y que no se dará por solidaridad desde los más ricos. ■

Informe
especialRevocar la
normalidad

Mejorar la protección social para la vejez pasa por marchitar el sistema de ahorro individual

por Decsi Arévalo H. y Oscar Rodríguez S.*

La sociedad colombiana sufre las consecuencias de un sistema pensional en el que su componente de aseguramiento basado en un Régimen de ahorro individual -Rais prohíja la concentración del capital, otorga pensiones que oscilan alrededor del 32 por ciento del último salario devengado y actúa de manera procíclica con el desempeño económico, de modo que en situaciones de recesión y crisis la desprotección es flagrante.

Teniendo en cuenta que la misión de un sistema de protección social es amparar a la población frente a los riesgos derivados de la vida en sociedad, lo que requerimos es un modelo que brinde estabilidad en la atención a las necesidades de la población mayor, es decir, la protección social pasa por el marchitamiento del Rais. Esta propuesta es diametralmente contraria a la de quienes abogan por una reforma pensional que privatice el sistema pensional o a la de aquellos que claman por una reforma que realice ajustes secundarios sin llegar a afectar los intereses de los grupos económicos que monopolizan los ahorros del sistema pensional: el grupo Aval (Porvenir) y

el grupo empresarial antioqueño (Protección), que hoy controlan más del 80 por ciento de los ahorros.

Para avanzar en esta dirección, en primer lugar, abordamos el análisis de dos de las características que dificultan el crecimiento de la afiliación y hacen necesaria la transformación del sistema a fin de que brinde protección social a la vejez: a) el despliegue del discurso que defiende el aseguramiento basado en el lucro, a pesar de su demostrado fracaso y b) la divergencia entre el crecimiento económico y la generación del empleo, en la que los sectores con mayores crecimientos no son los que impulsan el empleo. En segundo lugar, establecemos las condiciones en las cuales se puede adelantar la supresión del Rais.

Los ajustes al sistema pensional desde la óptica del aseguramiento basado en el lucro

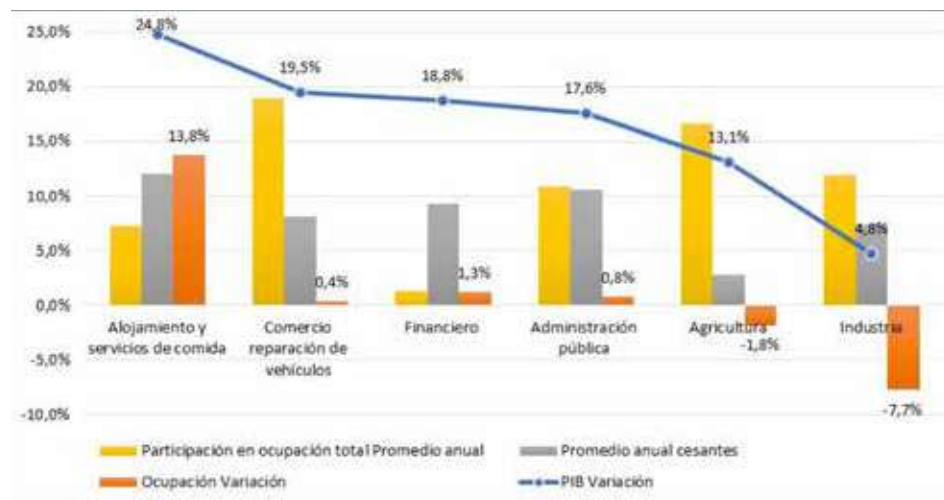
La primera dificultad que enfrenta el sistema es el fortalecimiento del discurso que defiende con fe ciega la existencia del aseguramiento basado en el lucro, a pesar de las demostraciones teóricas y empíricas de su fracaso, y que traslada la explicación de sus malos resultados al comportamiento laboral. Tal dis-

curso sustenta un conjunto de proposiciones de reforma que profundizan la inseguridad y la desigualdad en la vejez.

La gama de iniciativas va desde las más radicales como *la extinción (marchitamiento) del régimen de prima media* (Anif-Sergio Clavijo y Mauricio Santamaría, BID), *la creación del sistema multipilares* (Fedesarrollo, BID), *la modificación de las variables paramétricas*: aumento de la edad e incremento de los años de cotización (Stefano Farné) y *la complementariedad entre el Rais y Colpensiones con cambio en variables paramétricas*: aumentar la edad de jubilación, igualar edades entre hombres y mujeres, elevar la cotización, utilizar el ingreso promedio de toda la vida laboral (o al menos de los últimos 20 años) para calcular la pensión, menguar el tope máximo del nivel pensional y reducir la pensión de sobrevivencia al 75 por ciento (Comisión del Gasto Público y la Inversión pública 2017, que no descartó marchitar el Régimen de Prima Media -RPM).

En esa senda, entidades como Asofondos, Ocde, Anif, Fedesarrollo y el Ministerio de Hacienda consideran que los ajustes sugeridos al sistema pensional

Gráfica 1. Variaciones en Valor Agregado y en Ocupación 2015-2019 (Trimestre oct-dic.)



Fuente: Cálculos con base en Dane 2020c

en nuestro país pasan por una reforma laboral, que tiene entre sus objetivos la reducción del salario mínimo legal vigente (smlv) (1). El discurso “se nuclea alrededor de la tesis que en Colombia el smlv es muy elevado, tanto en términos de productividad media de la economía como de los ingresos medios de los trabajadores, lo que explica la informalidad, la existencia de trabajadores por cuenta propia y el desempleo” (2).

Para estos organismos, reducir el smlv cumple dos objetivos: aumentar la cobertura y liquidar pensiones por debajo de este salario (esta recomendación implica cambiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia). Quizás este anhelo lo expresa el gobierno con el Decreto 1174 del pasado 27 de agosto que reglamenta el piso de protección social (PPS) para personas que devengan menos de un smlv.

La propensión a reducir los pagos por pensión se manifiesta en el apoyo que los organismos mencionados le brindan a la estrategia de fortalecer y ampliar el mecanismo de Beneficio Económicos Periódicos (Beps), administrado por Colpensiones, con el cual el Estado desconoce el mandato de universalizar el aseguramiento y crea un esquema en el que los ingresos en la vejez pueden estar por debajo del salario mínimo.

Divergencia entre el crecimiento del capital y la generación de empleo

Las políticas económicas adoptadas por el actual gobierno bajo la modalidad de decretos legislativos están en sintonía con los intereses del capital financiero, sin embargo esta identidad se oculta y no aparece como la principal motivación de las medidas tomadas a lo largo de los últimos siete meses, por el contrario, la “defensa del empleo” se fija como norma del discurso oficial, en *el que luchar contra la informalidad se iguala a promover la precariedad*. Sin duda, generar empleo es un imperativo ético, pero no puede crearse disminuyendo el bienestar de los hogares colombianos en aras de favorecer la rentabilidad del capital.

En los datos reportados por el Dane se observa que las ramas de actividad económica con mayores aumentos del PIB no contribuyen de manera importante a la generación de empleo en el país, pero sí a una significativa inestabilidad en la ocupación. Por supuesto, el sector financiero es el caso más emblemático de esta tendencia: con una variación porcentual de su valor agregado de 18,8 entre 2015 y 2019 procuró un aumento de apenas 1,3 por ciento en la ocupación y promedió una tasa anual de cesantes de un por ciento del 9,3, cifra superior a la del total nacional. Una dinámica similar se reporta en la administración pública y en el ramo de comercio, sector en el cual el efecto es más grande por su mayor participación en la ocupación total (19%). De otra parte, los sectores agrícola y manufacturero, que en conjunto aportan alrededor del 30 por ciento del empleo nacional, reportaron bajos crecimientos en valor agregado y pérdidas importantes en el empleo (-1,8% y -7,7% respectivamente).

La presencia de la pandemia y el consecuente aislamiento reforzó la tendencia en la dinámica de ocupación. Los únicos sectores que reportaron crecimiento en el valor agregado fueron el inmobiliario (0,1%) y el financiero (0,3%), las caídas más dramáticas se presentaron en alojamiento y servicios de comida (-63,2%) y transporte (-35,3%), que a su vez tuvieron un efecto severo sobre la ocupación (-12,1% y -10,7%), los ramos de construcción, comercio e industria tuvieron descensos de alrededor del 22 por ciento en el valor agregado.

Las cifras ilustran una dinámica ampliamente conocida en el país: el mayor aporte en la generación de empleo corresponde a los sectores que albergan unidades de pequeño capital, con las cuales la población puede solventar las pérdidas de empleo o la caída de ingresos. En este segmento el ramo emblemático es el de alojamientos y servicios de comida, que es también uno de los sectores con mayor registro de inestabilidad y de precariedad laboral.

Este tipo de comportamiento del mercado laboral aleja las posibilidades de ampliar la cobertura de afiliación del sistema pensional, ya de por sí muy baja: 36,6 por ciento de la población ocupada en el trimestre diciembre del 2019 y febrero del 2020 (Dane). La situación se corrobora al tomar en cuenta el desalentador porcentaje de cotizantes dentro de los afiliados, según los datos de la Superintendencia Financiera en el Rais este grupo constituye alrededor del 40 por ciento de la afiliación total y del 45 en el RPM.

Marchitar el Régimen de ahorro individual con solidaridad

La actual crisis del Rais la visualizó el gobierno al expedir los decretos 558 y 802 del 2020 para “proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado”, pues allí reconocía los posibles efectos negativos en la rentabilidad provenientes del mayor riesgo financiero durante la pandemia. Pero, los efectos negativos ya estaban presentes desde antes (cuadro 1).

Cuadro 1. Rentabilidad mensual en el Fondo de retiro programado, primer trimestre del 2020

AFP	Enero	Febrero	Marzo
Colfondos	0,92%	-0,74%	-4,01
Porvenir	1,06%	-0,76%	-5,33%
Protección	1,00%	-0,78%	-4,96
Skandia	1,11%	-0,51%	-4,93%

Fuente: Decreto 802 del 4 de junio 2020, p. 9

La propuesta alternativa para esbozar otra forma de protección a la tercera edad parte del traslado de los afiliados del Rais a Colpensiones, situación que permitiría realizar el pago de las pensiones generadas en el sistema y no requerir el traslado de recursos del gobierno al RPM (3). Al observar la tendencia entre 2015 y 2019 –el pago de los aportes de los dos regímenes y los pagos pensionales– se aprecia que ya en 2019 el total de aportes cubría las prestaciones.

Cuadro 2. Cotización y pensiones en el sistema general de pensiones (RPM y AFP), 2015-2019

AÑO	Cotizantes	Aportes \$ de 2015	Prestaciones \$ de 2015	Prestaciones/ aportes
2015	7.719.042	26.351.917	27.413.548	1,04
2016	7.458.032	27.197.483	28.968.783	1,07
2017	8.319.889	28.021.538	29.965.656	1,07
2018	9.235.665	30.643.632	31.120.022	1,02
2019	9.646.611	33.221.305	32.604.929	0,98

Fuente: Colpensiones, informe de 2019 y Superintendencia financiera

Este traspaso mejoraría las condiciones de pensión de los actuales afiliados a las AFP que, de otro modo, con similares niveles de cotización tendrán a futuro bajas tasas de reemplazo. Además de permitir que con los ingresos anuales se paguen las pensiones de la vigencia, se contaría con reservas cercanas a \$261,8 billones de pesos, es decir, cerca del 25 por ciento del PIB, con las cuales el sistema estaría técnicamente respaldado y en expansión gracias a los rendimientos de dichas reservas que se sumaría a las que actualmente reporta Colpensiones.

Tratamiento particular ameritan los regímenes exceptuados y especiales en donde se concentra el 64,9 por ciento del déficit pensional (Fopep participa con el 28,8%, la fuerza pública con el 18,7%, el magisterio con el 8,9% y otros con 8,5%). En el Fopep, la fuerza pública, el Congreso y las altas Cortes los ajustes deben basarse en los análisis actuariales correspondientes, pues las condiciones desiguales respecto a Colpensiones y el Rais generarían una carga exagerada al régimen administrado por Colpensiones si se procede a la unificación.

Esta medida debe ir acompañada de la creación de un Consejo de inversiones como máxima autoridad para determinar el portafolio de las reservas, que funcionaría con autonomía, de modo que su composición y las características de sus integrantes, así como el régimen de inhabilidades, sea el resultado de una discusión de los aportantes al sistema de pensiones (asalariados, trabajadores independientes, patronos, academia, entre otros). Establecer el portafolio de inversiones debe conjugar dos criterios: garantizar la estabilidad financiera del sistema, a la vez que se asegure una adecuada tasa de reemplazo, y el de tener efectos sobre el sector real de la economía para que se aumente la cobertura de afiliación al sistema pensional, privilegiando sectores económicos que extiendan la relación salarial.

Para aquellos que no logren cumplir con el número de semanas y para quienes nunca cotizaron al sistema pensional la protección social optará por la renta básica o por la pensión universal propuesta por la Cepal.

Estamos ante un conjunto de modificaciones que solo será posible de implementar si se logra una transformación en el campo del poder en el que las fuerzas políticas mayoritarias tengan como directriz la protección social a la tercera edad y no el mantenimiento de un sistema de seguridad social basado en el lucro, que antepone los intereses financieros al cumplimiento de los derechos sociales. Es un reto en pro de garantizar vida digna para millones, y así debe ser comprendido y abordado, en el presente y en el futuro.

1. Un análisis de estas propuestas se puede encontrar en Rodríguez Salazar (2017)

2. Decsi Arévalo “Concentración del capital y fragmentación social, dos efectos del sistema de aseguramiento pensional en Colombia”. En Decsi Arévalo (ed.) *Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2018.

3. En el presupuesto del 2020-2021 la partida asignada para pensiones es del orden de \$42,4 billones (13,5%). No realizar el marchitamiento del RAIS significa que en los presupuestos futuros se debe contemplar una partida para el pago de las mesadas pensionales, de manera que ningún tipo de reforma al sistema de pensiones podrá afectar este pago. En las condiciones actuales, la justificación de desactivar la “bomba pensional” sería una tarea de largo plazo y entretanto el capital financiero continuará monopolizando el ahorro de los colombianos y destinándolo a actividades que no son las más dinámicas en la generación de empleo.

La economía de enclave y extractivista que desde siempre han caracterizado a la economía colombiana, y que la atan a ciclos económicos e intereses políticos internacionales de diverso orden, hoy pueden ser superados. Un reto mayor y a la orden del día a través de avanzar hacia una economía baja en carbono, posible a través de una política industrial y agraria verde.

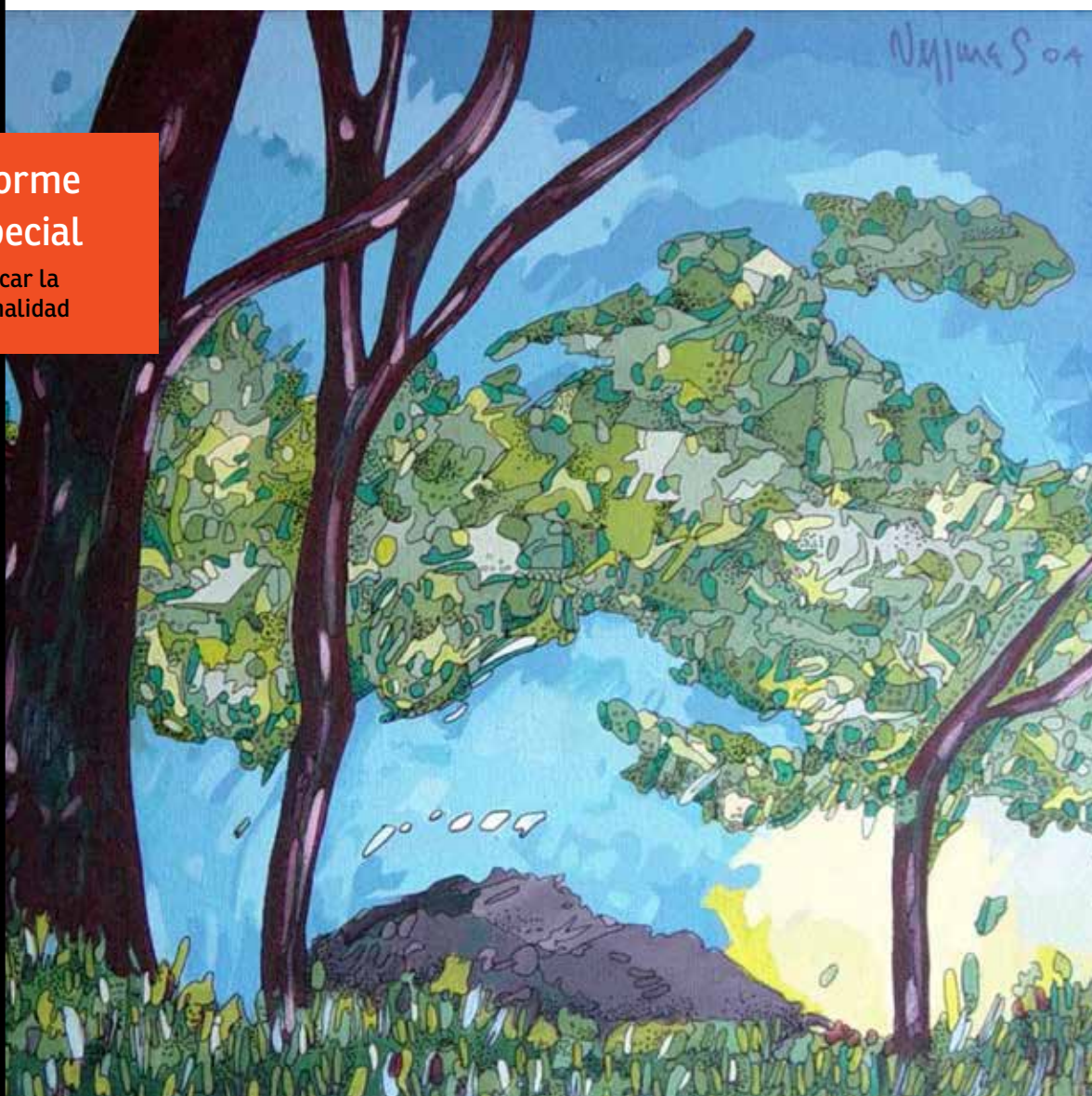
Dependencia minero energética y transición a economías bajas en carbono:

Los retos para el cambio climático después de la crisis

por Diego Guevara Castañeda, Santiago Castaño Salas y Leonardo Rojas Rodríguez*

Informe
especial

Revocar la
normalidad



Hernando Vergara, detalles, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

El inicio del siglo XXI estuvo marcado para las economías latinoamericanas por un “boom” en el precio de las materias primas lo que les permitió, tanto a los gobiernos progresistas como a los de corte financiarizado y pro mercado, tener un mayor margen de maniobra en su gasto público y su política social. Sin embargo, la euforia despertada por esta coyuntura borró de la discusión de política pública importantes temas como el de la transición hacia economías bajas en carbono. La descarbonización hoy empieza a ser una realidad en las economías del centro.

Una reflexión propiciada por una nueva circunstancia, la pandemia de 2020, que con la notable reducción propiciada en la emisión de dióxido de carbono (CO₂, ver figura), como ningún otro fenómeno

en la historia contemporánea mundial, proyectó luz sobre las formas de producción imperantes en los últimos siglos, desde la revolución industrial a principios del siglo XIX.

Relación entre el cambio climático y el crecimiento económico

En la década de los noventa hubo discusiones en torno a la relación existente entre la contaminación y el crecimiento del ingreso en los países. El punto en común era que en las primeras etapas del desarrollo, cuando la tasa de crecimiento del PIB tenía una mayor aceleración, el deterioro ambiental cargaba una fuerte correlación positiva con el crecimiento de los ingresos, pero en etapas posteriores, cuando el PIB tenía unos mayores ingresos, se ralentizaba. En otras palabras, cuando hay un mayor

crecimiento y un mayor nivel de ingresos, las personas y las sociedades valoran más las condiciones ambientales (situación que no pasaba cuando habían bajos ingresos) por lo que crean instituciones y regulaciones para enfrentar los problemas de contaminación. Esta relación, primero directa y luego inversa, entre el nivel de ingresos y las condiciones ambientales fue resumida como la Curva de Kuznets Ambiental (CKA).

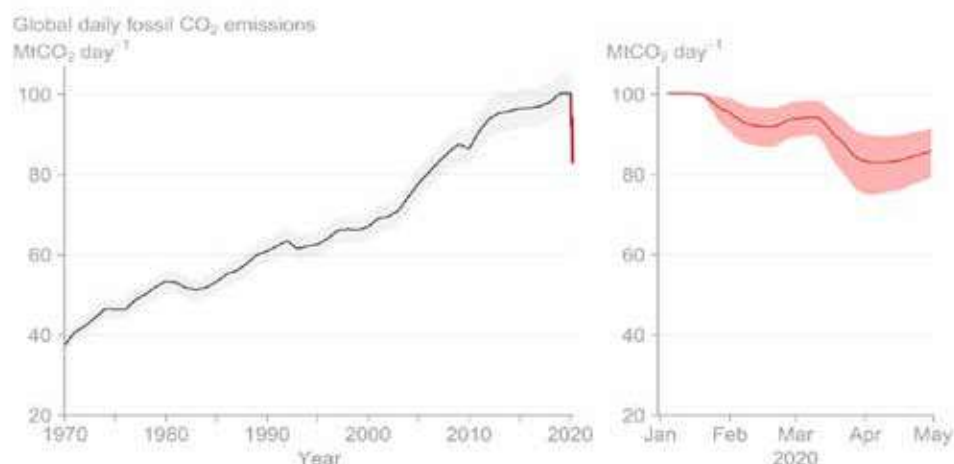
Sin embargo esto no siempre es cierto ya que en países desarrollados las emisiones se reducen a través de una transmisión de los costos ambientales a países en vía de desarrollo. Así pues, para este grupo de países es más complejo reducir las emisiones y el impacto global sobre el medio ambiente, que no se reduce a pesar de aumentos en el ingreso per cápita. Es necesario entonces pensar la CKA.

Colombia, entre la dependencia y las vulnerabilidades económicas de la transición

En las últimas décadas Colombia ha tenido un crecimiento económico impulsado por el sector extractivo que le ha permitido gradualmente volverse un país de ingreso medio alto según el Banco Mundial (1). Sin embargo, esto le ha significado una dependencia no solo de los precios internacionales de las materias primas sino también de los ciclos comerciales y financieros internacionales, así como de la demanda de carbón y petróleo por parte de los países centrales los cuales han comenzado a transformar sus matrices energéticas hacia un menor consumo de energías fósiles según el acuerdo de cooperación entre las partes (CO15/21).

Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia (Siac), el país ocupa la posición 105 a nivel internacional respecto a las emisiones per cápita de Gases Efecto Invernadero (GEI). Si bien esta posición puede parecer no desfavorable, la misma no responde a un proceso sistemático de producción sostenible y sí a la escala de la producción local. Por otro lado, la caracterización de las fuentes de emisiones revela un vínculo estrecho entre la producción de bienes de bajo valor agregado y los mayores niveles de emisión de GEI.

No estamos ante una situación novedosa, desde tiempos coloniales Colombia, en sus pretéritas formas institucionales, mantuvo un desenvolvimiento vinculado a la extracción de recursos naturales y a las economías de enclave. Bulmer-Thomas (2) denominó a esto la lotería de los recursos naturales, como parte de una explicación de las trayectorias cercanas pero heterogéneas de las economías latinoamericanas. Para el caso colombiano esto ha implicado una trayectoria en la que la explotación de recursos naturales no renovables ha sido el centro de la dinámica económica, por mucho tiempo como principal producto de exportación, y desde la década de los noventa del siglo pasado con el oro y

Figura 1: Emisiones globales de CO₂ por día hasta abril de 2020

Fuente: Earth System Research Laboratories Global Monitoring Laboratory

el petróleo como el activo colateral para el establecimiento del régimen de acumulación del tipo de financiarización periférica.

Todos estos cambios tienen lugar en el ecosistema y en parte son resultado de los procesos sociales y económicos que a su vez se verán afectados en periodos siguientes. Es así como la degradación del ambiente, y la declinación de los recursos naturales, afectan tanto las condiciones para la disposición de los factores de producción como para la producción misma. Acá, entonces, puede introducirse la idea de vulnerabilidad de las condiciones económicas ante el cambio climático.

La vulnerabilidad es usualmente definida como la capacidad de un sistema a ser afectado por una perturbación o tensión. Las vulnerabilidades ante el cambio climático también se pueden observar en temas de estabilidad financiera y monetaria donde se menciona el riesgo que implica el cambio climático para la economía conocido como el Cisne Verde (3). Esto es una alerta de las implicaciones del cambio climático en diferentes aspectos financieros y monetarios que podrían devenir en riesgos importantes, como por ejemplo efectos sobre la distribución del ingreso. De forma similar, se exploran vulnerabilidades del sector externo que puede experimentar una economía frente al cambio climático, problemas que van desde dificultades en la Balanza de Pagos hasta reducción de ingresos tributarios.

En transición hacia una economía baja en carbono

Colombia, al igual que los países periféricos latinoamericanos que han basado su crecimiento económico en la explotación de materias primas, enfrenta un doble desafío. Primero, tiene que crecer de forma importante y sostenida para lograr garantizar los derechos sociales y económicos de su población y superar problemas acentuados estructuralmente como la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Segundo, tiene que responder a los desafíos ambientales firmados en espacios internacionales (COP 21) en términos de

reducción, mitigación y adaptación al cambio climático, primordialmente mediante la disminución de los GEI; desafío aún más importante dadas las vulnerabilidades y riesgos macroeconómicos ya mencionados y que podrían presentarse dado el patrón de crecimiento basado en la explotación de materias primas.

Si bien, cualquier recomendación de política debería incluir un conjunto de medidas que en conjunto apunten a un objetivo común, la emergencia sanitaria de 2020 y la crisis financiera asociada a la misma han derivado en que las herramientas de acción se concentran nuevamente, como sucede generalmente en las crisis, en el plano de lo fiscal. Por ello es preciso mencionar algunos elementos que pueden representar una alternativa para los tomadores de decisiones de política económica.

En correspondencia con estos retos, la motivación que debería guiar la implementación de algún paquete fiscal con objetivos de sostenibilidad ambiental en la perspectiva de "Green new deal" (nuevos acuerdos para impulsar la economía teniendo en cuenta el cambio climático) debería tener dos objetivos: uno inmediato y otro de mediano y largo plazo, el primero encaminado a obtener metas de mitigación y el segundo a reducir vulnerabilidades.

Ahora bien, volviendo a que la vinculación externa a nivel productivo y financiero de Colombia ha sido fundamental en la determinación del ritmo de crecimiento, la principal herramienta para emplear con el gasto público debería ser una política industrial y agraria verde enfocada en sectores intensivos en empleo, la que debería estar fundamentada en modificar los vínculos productivos del país con el exterior, lo que a su vez tendría efectos positivos sobre el relacionamiento financiero, puesto que si bien en el corto plazo podría generar efectos con signos mixtos, en el mediano y largo plazo podría redundar en mayor disponibilidad de financiamiento sin riesgo. Claramente estas decisiones implican sacrificios en el corto plazo pero con escenarios más posibles que los que ofrece el sacrificio del círculo vicioso de la austeridad.

Más allá de esto, este objetivo es viable por diferentes caminos como una política de empleo verde, inversión en infraestructura para la producción de energías limpias, o la implementación de flotas de transporte a partir de energías limpias. Un ejemplo de este tipo de políticas lo viene implementando China, que frente a la actual crisis y dado su nivel de endeudamiento ha decidido implementar un paquete fiscal de menor tamaño que el empleado en 2008.

Respecto a la financiación de este tipo de programas, el panorama es más complejo y requerirá de nuevos paradigmas macroeconómicos. No obstante, dado el nivel y el tipo de deuda que mantiene Colombia, puede pensarse que aún hay espacio fiscal, tanto para tomar deuda con privados, como para generar recursos por medio de emisión monetaria. Vale la pena señalar que en la corriente principal la autonomía del Banco Central y su prohibición explícita de financiar al gobierno ha sido uno de los caballos de batalla políticos y teóricos de las elites financieras en el poder, sin embargo hay diferentes teorías monetarias alternativas, como la dimensión de MMT (Modern Monetary Theory) que si bien tienen limitaciones, en países emergentes puede brindar posibilidades (4).

En esta misma línea una alternativa adicional es la ofrecida desde la perspectiva del *Big Push medioambiental*, expresión que hace referencia al modelo de desarrollo y a la expresión planteada por Rosenstein-Rodan (5) según la cual para lograr la sostenibilidad en el crecimiento del producto se necesita un paquete de inversiones complementaria, coordinando cada inversión con inversiones paralelas en otros sectores y haciendo que cada una de ellas sea rentable y viable. El problema de coordinación está presente en el esfuerzo por avanzar hacia un sendero de crecimiento bajo en carbono.

En estas circunstancias, valga decir que no habrá inversiones en nuevas fuentes de energía sin otras en la industria y el consumo que permitan que las primeras operen de forma eficiente. Lo importante a recalcar es que medidas aisladas, como pueden ser los impuestos verdes, no van a ser una solución si toda la estructura productiva, al igual que los patrones de consumo e inversión, no se adaptan a las nuevas condiciones ambientales. ■

1. Banco Mundial, (2019) tomado de: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>

2. Bulmer-Thomas, V. (2014). *The Economic History of Latin America since Independence* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139208710>

3. Bolton, P., Després, M., Silva, L. A. P. da, Samama, F., & Svartzman, R. (2020). *The Green Swan. Central banking and financial stability in the age of climate change*. <https://www.bis.org/publ/othp31.htm>

4. Vernengo, M & Pérez Caldentey, e. (2019). Modern Money Theory (MMT) in the Tropics: Functional Finance in Developing Countries. *Working Papers Series. POLITICAL ECONOMY RESEARCH INSTITUTE*, 495. <https://www.peri.umass.edu/component/k2/item/1220-modern-money-theory-mmmt-in-the-tropics-functional-finance-in-developing-countries>

5. Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe. *The Economic Journal*, 53(210/211), 202-211.

*Investigadores GSEID Universidad Nacional. Este artículo es el resumen de un capítulo del libro sobre alternativas programáticas que verá la luz en el primer semestre de 2021.

Una inversión descentralizada, constante y según las necesidades y posibilidades diferenciadas de los territorios, es uno de los requisitos por satisfacer para superar la histórica concentración del poder en Colombia y la masificación de algunas ciudades. Vías, educación superior y universitaria, ciencia y tecnología, son algunos de los segmentos por satisfacer en esta perspectiva.

Hacia el cambio estructural territorial de la economía colombiana

Colombia, de la exclusión a la inclusión territorial

por Darío I. Restrepo Botero y Camilo A. Peña Galeano*

Informe
especial

Revocar la
normalidad



Hernando Vergara, detalle, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

Es común que alguien que está buscando algo, llegue al lugar equivocado. Su rabia en unos casos, su risa en otros, prosigue al momento en que se percata del error, ha perdido tiempo pero puede reemprender la búsqueda, ahora con mayor precisión,

Pero no es fácil proceder así cuando sucede que nacemos en el lugar equivocado. Esto ocurre en Colombia como en la mayoría de países de América Latina. Y lo que posibilita esta circunstancia es la concentración de las oportunidades de desarrollo económico, una de las características de su formación social.

En la región se pueden encontrar grandes urbes con modernas edificaciones y sistemas de transporte que conviven con territorios en los que, incluso, no hay un limitado acceso incluso a los servicios sociales básicos. Una realidad que genera una presión hacia el crecimiento desordenado de las ciudades, al tiempo que priva a los demás territorios del capital humano y físico necesario para desarrollarse, generando así un círculo vicioso que refuerza los patrones de desarrollo concentrado.

Estamos ante una realidad que para el caso de nuestro país es una constante prácticamente inalterada durante los últimos cuarenta años, como lo mues-

tra el gráfico 1. Una constante prolongada en el tiempo a pesar del proceso de descentralización iniciado en el año 1986 y de la Constitución del año 1991, que incluyó la autonomía de las entidades territoriales como uno de los principios de organización del Estado.

Es una realidad que, sin embargo, connota particularidades más fuertes en Colombia toda vez que la concentración del ingreso y la riqueza en unos cuantos territorios tiene consecuencias más complejas que en otros países de la región, y así es ya que son las regiones en las márgenes del país, tradicionalmente desprovistos de los privilegios del desarrollo, en donde el conflicto armado de 50 años profundiza sus raíces (1). Como consecuencia, en estos territorios suele abundar la precariedad en las instituciones públicas, la explotación ilegal de minerales preciosos y la deforestación relacionada con la producción de productos del narcotráfico.

Todo esto, en uno de los países más inequitativos de la región, que con un índice Gini de 0.52 sólo es superado por Brasil (2). Sin embargo, en el caso colombiano, ni el recaudo de impuestos, ni el gasto público tienen algún impacto en la reducción de las inequidades económicas generadas por el mercado (3).

Estamos ante unas particularidades de su formación social que llevan a que la inequidad territorial

sea constituya en uno de los obstáculos más significativos que enfrenta el país para el logro del desarrollo sustentable e inclusivo, en la medida en que se convierte en una característica central del modelo de desarrollo que excluye a todos aquellos que no hayan tenido la fortuna de nacer en el lugar apropiado, al tiempo que, refuerza la depredación de la naturaleza como único medio de supervivencia.

Es una concentración de oportunidades de desarrollo reforzada por la institucionalidad pública, toda vez que las entidades del gobierno central se encuentran concentradas en la capital del país, al tiempo que la mayoría de las transferencias a las entidades territoriales son dirigidas al centro del país. No es casual que así sea, ya que la concentración de la producción económica tiene su correlato en la concentración de la representación política (4).

La buena noticia es que esta situación es remedia-ble. Colombia, así como otros países de América Latina, puede fortalecer su economía y su Estado a partir de la promoción del Cambio Estructural Territorial. La transformación de la estructura productiva a una más moderna, más diversificada, más productiva y basada en la economía del conocimiento es una necesidad de todos los países que quieran desprenderse de la maldición de los recursos naturales y de la precariedad de las instituciones. Y en ello, el enfoque territorial es una alternativa para acelerar el deseado cambio, de forma tal que el crecimiento económico no resulte “restringido” ni por el sector externo ni por la estrechez del mercado interno.

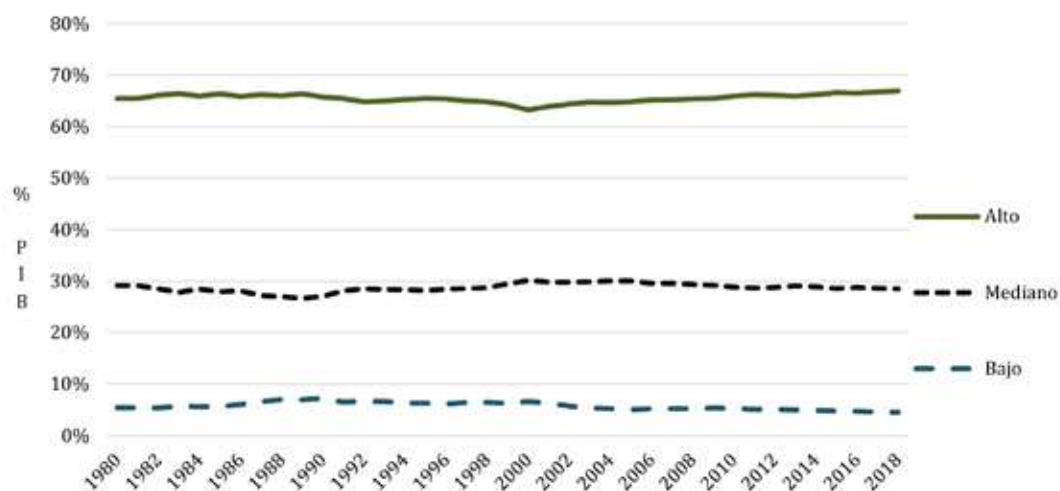
Para lograrlo, es necesario incluir la equidad territorial en el marco del funcionamiento del Estado. Un ejemplo destacado, tiene que ver con la Política de Desarrollo Productivo, la cual no puede escoger unos sectores restringidos territorialmente a unos cuantos departamentos (5), por el contrario, deben adoptarse políticas destinadas a la promoción del Cambio Estructural de todos los municipios y departamentos desde sus limitaciones y sus posibilidades, a partir de la generación de capacidades técnicas y humanas, así como de la dotación adecuada de capital.

Retos

Para lograr este viraje, un primer paso tiene que ver con la dotación de la “infraestructura básica para el desarrollo” tan limitada territorialmente a las capitales y las zonas costeras. Particularmente, el país tiene un altísimo déficit en vías terciarias.

Un siguiente paso, tiene que ver con la democratización de la educación superior. El país ha realizado grandes avances en la mejora de la matrícula de la educación básica y media, sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la educación superior. Como puede apreciarse en el gráfico 2, la oferta universitaria se encuentra concentrada en unos cuantos departamentos del país. Empero, la oferta de universidades de “alta calidad” se encuentra aún más restringida. El Cambio Estructural Territorial requiere de la formación de profesionales en todos los territorios del país.

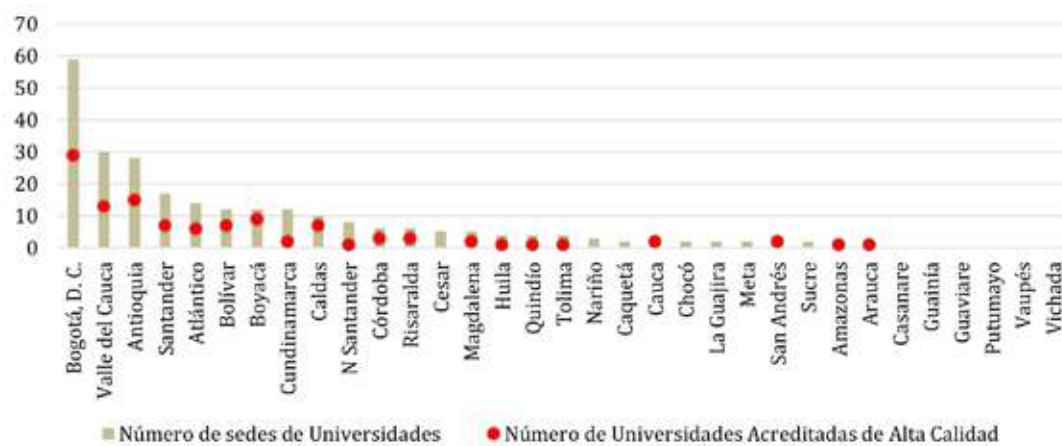
Gráfico 1. Distribución departamental del PIB 1980-2018



Grupo Alto: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Meta
Grupo Medio: Bolívar, Atlántico, Boyacá, Tolima, Cesar, Córdoba, Casanare, Huila, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Risaralda, Caldas y Magdalena
Grupo Bajo: La Guajira, Sucre, Caquetá, Chocó, Arauca, Putumayo, San Andrés, Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés

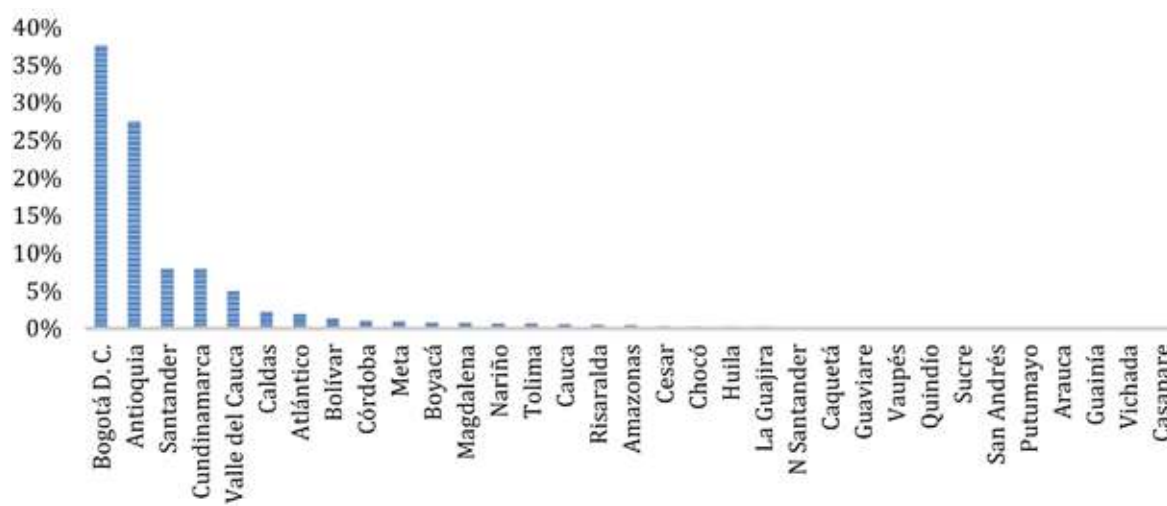
Fuente: Cálculos propios con base en Dane, cuentas departamentales

Gráfico 2. Sedes de universidades por departamento



Fuente: Ministerio de Educación

Gráfico 3. Concentración departamental de la inversión en investigación y desarrollo. 2012-2016



Fuente: Colciencias (2017)

De forma similar, como lo recoge el gráfico 3, la inversión en Investigación y Desarrollo se encuentra concentrada en unos cinco departamentos; una inversión que resulta clave para la innovación tanto en procesos productivos como en productos. Además, en el diseño colombiano hace falta la creación de un enlace entre la generación de conocimiento y su aplicación directa en las necesidades del sistema productivo.

Por tanto, la consecución del Cambio Estructural Territorial requiere de una ampliación significativa del Sistema Universitario Estatal, de forma tal que éste expanda su cobertura en perspectiva territorial, en busca de que no quede ninguna subregión del país en la que no sea posible acceder a la Educación Superior. Paralelamente, es necesario crear los Centros Subregionales para la Innovación y el Desarrollo (Csind) los cuales se constituirían en los corazones de las economías subregionales, enfocados en la generación de soluciones que permitan mejorar los sistemas de producción local, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Por otra parte, es necesario revisar la inclusión de incentivos locales hacia el desarrollo sostenible a través de la modificación de las competencias de los municipios y la inclusión de estímulos que lleven a alinear los planes locales con las agendas de protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible.

Por último, el giro acá propuesto requerirá de una revisión profunda de los esquemas de financiación imperantes, para garantizar la provisión de los recursos suficientes para potenciar el desarrollo económico a partir de la mayor equidad territorial posible, concretando para ello la tributación territorial suficiente y progresiva como instrumento de desarrollo.

De esta forma sería posible alcanzar círculos virtuosos de desarrollo equitativo territorial en el que el crecimiento sostenible de cada territorio propicie el avance conjunto de toda la economía. Todos esto, no son sólo resultados deseables sino posibles, siempre que se incluya la perspectiva territorial en el tan necesario Cambio Estructural de la Economía colombiana, con cuya concreción se reduzca la posibilidad de que en nuestro país alguien nazca en el lugar equivocado. ■

1. Restrepo Botero, Darío, & Peña Galeano, C. (2019). Institutional dilemmas and challenges in the territorial construction of peace. *Cuadernos de Economía*, 38(78), 785-811. [https://doi.org/10.1016/S0210-0266\(11\)70011-5](https://doi.org/10.1016/S0210-0266(11)70011-5)
2. Según datos de Cepalstat
3. Izquierdo, A., & Pessino, C. (2018). *Mejor gasto para mejores vidas*. Banco Interamericano de Desarrollo BID.
4. Restrepo Botero, Darío, & Peña Galeano, C. (2018). "Economía política de la descentralización y de la recentralización (1986 - 2016)". En: L. Estupiñán (Ed.), *La cuestión territorial a debate: España y Colombia* (pp. 165-196).
5. Ocde. (2019). *Production Transformation Policy Review of Colombia*.

* Respectivamente: Profesor Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía, Director del Grupo de Investigación en Protección Social. indamail@gmail.com
 Investigador Grupo de Investigación en Protección Social, Universidad Nacional de Colombia: caapenaga@unal.edu.co

Ediciones desde abajo

A propósito de la regulación de la protesta social

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

“Quien sea que haya sembrado privilegios recogerá revoluciones”.
Claude Tillier

EL DERECHO A LA REBELIÓN
Cólera, resistencia, revuelta, sublevación, revolución...

Inf.: Carrera 20 N° 45A-85 - telf.: 345 18 08 (Bogotá) • Carrera 48 N° 59-52 Of. 105 - telf.: 479 86 33 (Medellín) • www.desdeabajo.info • <https://libreria.desdeabajo.info/admin/index.php>

En Chile se realizó el plebiscito para aprobar o rechazar la idea de confeccionar una nueva Constitución Política del Estado. Casi un 80 por ciento de las chilenas y chilenos votamos por el Apruebo y para que la Constitución sea redactada por una asamblea ciudadana, mitad mujeres y mitad hombres en número de 155. Queda por definir el número de representantes de los Pueblos Indígenas, que debiera ser aproximadamente un 10 por ciento.

Chile. El camino de cambios que emerge con el plebiscito

El día después

por José Bengoa*



Hernando Vergara, detalle sin título, acrílicos sobre lienzo (Cortesía del autor)

Es el tercer plebiscito que votamos. En 1980 nos tocó ir a aprobar o rechazar la Constitución que había redactado la dictadura de Pinochet. No había registros electorales siquiera y el ambiente de terror era evidente. Ganó –en un fraude ampliamente denunciado– la Constitución de Jaime Guzmán y esa noche el dictador ebrio de entusiasmo en el frontis del Edificio Diego Portales (Ex Unctad) prometió televisores, bicicletas, automóviles y todo tipo de “baratijas”: el consumo irrestricto como la base de la integración y desarrollo social y cultural. Chile se transformó en un “mall”.

Ocho años después el dictador le preguntó al pueblo si seguía por ocho años más o no. Y ganó en un día primaveral el No. Pero no se fue. Quedó de comandante en jefe del Ejército por diez años más y luego como senador vitalicio. La Constitución se modificó cosméticamente varias veces. El triunfo del No inauguró un ciclo

de gobiernos democráticos. Hubo crecimiento económico y sobre todo alto nivel de consumo; todo ello en el marco rígido de la Constitución ilegítima en su origen.

Desde los años 90, durante la llamada transición, fuimos observando las limitaciones del proceso. Se censuró a los críticos de *autoflagelantes* Ganaron los *auto-complacientes*. Ya bien entrado el nuevo milenio un grupo de personas firmamos un llamado a una “Nueva Constitución y la formación de una Asamblea Constituyente (AC)”. La idea quedó pero no prendió. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se dieron nuevos impulsos, hubo debates constitucionales múltiples y participaron miles de personas, pero tampoco prendió la idea por la resistencia en su propia coalición. El presidente Sebastián Piñera en su actual segundo mandato la desechó y todo lo que se había trabajado fue a dormir en un canasto de papeles.

En esos años se produjeron numerosos procesos difíciles de entender. Por una parte el acomodo del sistema político partidista y su creciente desprestigio. No es fácil interpretar el fenómeno, pero lo que no cabe duda es que las dirigencias (hombres, mujeres, jóvenes y viejos) de los partidos políticos que habían llevado al país a la democracia cayeron en el más profundo desprestigio. Acusados de corruptos, acomodados y ladrones, no se salvó casi ninguno.

Los estudiantes secundarios comenzaron las protestas. Se les llamó los *pinguinos* por el uniforme escolar que usan. Sobre todo los estudiantes de los Liceos llamados *emblemáticos*, los de mayor fama, se fueron descolgando del sistema y vivieron los últimos años en paros, tomas y también destrozos de sus locales. Años después esos mismos en la universidad iniciaron un enorme movimiento estudiantil por la gratuidad y calidad de la edu-

cación. De ese sector surgieron nuevos liderazgos que llegaron también al Congreso y lamentablemente –no todas ni todos– se contaminaron, o aparecen contaminados, con la política de los pasillos del poder.

A esos movimientos juveniles habría que agregar tres más de una profundidad difícil de sopesar: el movimiento de mujeres y de género, el movimiento mapuche indígena y el movimiento de las personas de edad por mejores pensiones. Las manifestaciones han sido masivas en los últimos años.

Un proceso profundo de *despatriarcalización* se apoderó de la gente joven, las mujeres, en particular. Películas como la ganadora del premio Oscar constituyen una ruptura notable en la conservadora sociedad chilena. La “performance” del grupo de Valparaíso llamado *Las Tesis* dio la vuelta al mundo.

El sur de Chile comenzó a arder literalmente y se vive un rico proceso de *descolonización* y *anti racismo*. Ya el segundo gobierno de Bachelet se mostró incapaz de iniciar cualquier política positiva con respecto a los mapuches. Más aún. Un subsecretario del interior, de militancia histórica socialista, construyó un “montaje” ridículo llamado *Operación Huracán*, que aprisionó a una cantidad de dirigentes indígenas en coordinación además con la administración de Macri en Argentina. Todo resultó ser una gran mentira. Después de ello el siguiente gobierno de Piñera inauguró con bombos y platillos el *Comando Jungla*, según dijo, preparado en la lucha antiguerrillera en Colombia, que concluyó con el asesinato del comunero Camilo Catrillanca y un montaje absurdo que hizo caer a la cúpula político militar. Las cosas en la Araucanía se pusieron muy difíciles. El Estado no produjo ninguna política salvo la criminalización de la protesta y la represión policial y militar. La prensa se ha hecho cómplice de esta barbarie comunicativa.

Finalmente, aunque hay muchas otras señales, el movimiento por *No más AFP* (Administradoras de Fondos de Pensiones), convocó a miles de miles de personas en una reivindicación muy sentida: la precariedad de las jubilaciones y sobre todo la mentira que se prometió durante la dictadura su creador José Piñera, hermano (no querido) del presidente. Las cifras de ganancias que ostentan las AFP son escandalosas frente a la miseria de las pensiones que pagan. Esos enormes capitales dan vueltas entre las manos de los mismos acelerando la concentración de la riqueza en Chile.

Estas son tres de las “asignaturas pendientes” que subyacen y se votaron masivamente el plebiscito. El descrédito de la política institucional, por otra parte, explotó en medio de una guerra que se produjo entre las élites por asuntos ligados a corrupción y financiamiento ilegal de la política. Fueron acusados y procesados dos de los mayores empresarios del país de financiar a la derecha (el Caso Penta). Luego salieron al baile los dineros de un yerno de Pinochet (Ponce Lerou) que “mojaba” a todo el espectro político, y así se fueron ensuciando todas y todos. Las *salpicaciones* de los escándalos brasileros (Obredecht) también arribaron a estas heladas playas. No quedó nadie bien parado. Las instituciones perdieron totalmente credibilidad y sus agentes con ellas.

Habría que señalar que todos estos y muchos otros procesos no son exclusiva-

mente chilenos sino que se dan en muchos países del mundo. Hay un ethos de descrédito de las instituciones y de la incapacidad del *sistema capitalista tardío* de satisfacer las necesidades que promete resolver.

Bueno es en estos días recordar el concepto de *expectativas crecientes*, ya que mucho de ello explica lo que ocurre. Mi experiencia en la Universidad es bien significativa. Muchos jóvenes son los primeros en llegar a la educación superior en su familia. Las expectativas del grupo familiar son enormes. Las ceremonias de graduación así lo demuestran siempre: familiares orgullosos de que su hija o hijo reciban su título. Sin embargo las denominadas redes sociales brillan por su ausencia. Salen de sus estudios con un cartón en la mano y les cuesta años encontrar un lugar en el mercado de trabajo, condicionado por las amistades, los apellidos, la "facha", en fin, el origen social, y muchos otros elementos extra académicos. No es casualidad que este tipo de jóvenes ha estado presente y muy activo en las manifestaciones y posiblemente fue el que más fue a votar.

Hace un año, en ese ambiente, se le ocurrió a una señora ministra de Transporte y a un panel de expertos subir en 30 pesos el pasaje del Metro de Santiago. Los estudiantes secundarios comenzaron por saltarse los torniquetes, manifestarse en las estaciones, y el 18 de octubre del 2019 se produjo una revuelta violenta que destruyó estaciones, trenes del Metro y hubo saqueos de grandes tiendas de los afamados malls, símbolos ambos del "progreso nacional". El 25 de octubre -justamente un año antes del plebiscito- más de un millón y medio de personas marchó por la Alameda en el centro de Santiago y otras tantas en todas las regiones.

No parecía haber modo de parar las manifestaciones, saqueos, incendios y protestas que ocurrían en todo el país. En

ese contexto los presidentes de los desprestigiados partidos políticos se reunieron y acordaron llamar a un plebiscito para cambiar la Constitución, luego de una iniciativa presidencial que la propuso.

No pareció para nada evidente, pero ante la falta de salidas de otro tipo con el tiempo se fue imponiendo e incluso los sectores juveniles movilizados consideraron que era un camino posible. La pandemia del covid-19 vino a hacer lo suyo. Las personas encerradas en sus casas, los que la tienen, vieron que el plebiscito era una alternativa.

El silencio y descrédito de los partidos políticos se mantuvo. Pero no teníamos conciencia del papel que jugarían los medios de comunicación y las "redes sociales". La televisión criminalizó las manifestaciones y las redes, en cambio, mostraban la complejidad y sobre todo el arrojo de los que se manifestaban. Por ejemplo, la TV mostró el incendio de dos iglesias, mientras por las redes se difundía cómo los manifestantes se peleaban con los que provocaron las llamas, entre los que había evidentes infiltrados, uno de ellos de la Armada nacional. Muchos pensaron que esas manifestaciones afectarían el voto del plebiscito y aumentaría el rechazo, los datos muestran que no fue así.

La noche del plebiscitario hubo grandes manifestaciones de alegría en todas las ciudades, por todas partes las plazas y calles se llenaron de gente esperanzada. En Achao, isla de Quinchao, Chiloé, por ejemplo, enterraron simbólicamente la Constitución de Pinochet. Fue uno de los miles de actos de ese tipo. Se ha considerado que la votación terminó con el legado del dictador, y eso da sentido. Como siempre, no había banderas partidarias en las manifestaciones.

Llamó mucho la atención la cantidad de gente joven que participó en la votación. No sabemos lo que ello podrá significar para el futuro pero es un dato impor-

tante. No es fácil contabilizar el voto juvenil ni tampoco el de las mujeres.

Significativa es la votación de las comunas ricas de Santiago: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea fueron las únicas tres comunas metropolitanas en las que ganó el Rechazo, por un porcentaje apreciable. Allí reside un pequeño porcentaje de la población del país que concentra buena parte de los ingresos. Ahí están los colegios de mejores puntajes para ingresar a las universidades y los establecimientos más caros de educación superior, los de la "cota mil" como dijo un cura. La clase alta chilena, los ricos (los *cuicos*), se refugiaron en los faldeos de la Cordillera, se atrincheraron y hoy se expresa vivamente esa situación. No por casualidad son objeto de robos, *portonazos* y cunde entre ellos el temor y la inseguridad.

La votación siguió las pautas históricas. En el norte se dieron los mayores porcentajes de apruebo, como en Copiapó con más del 90 por ciento de la votación. Es el norte minero y su tradición de izquierdas. En Temuco, la Araucanía, se dio una relación favorable al Apruebo, pero con alta votación del Rechazo. Recordemos que fue el único lugar en que ganó el Sí en el plebiscito de 1988 cuando en todo el país ganó el No. No es como han querido interpretar algunos medios producto de la descolonización y de las acciones violentas que allí ocurren.

Quizá el concepto clave de estos días es el de "abuso". Hay un sentimiento de que se es abusado por el Estado, por las grandes empresas, por los servicios, en fin por todo el sistema que se ha formado de manera abusiva en el país. Y eso es lo que se quiere cambiar.

Y algo importante es que el temor a la violencia no tuvo efectos en la votación. Muchos pensaban que aumentaría el Rechazo por la violencia que ha ocurrido en la Plaza Italia, o Baquedano y hoy llamada "Plaza de la Dignidad". Muchos pensaron

que las pintadas de colores del monumento al general Baquedano iban a ser repudiadas. Nada de eso pareciera haber afectado a los votantes. Más aún, la convicción general es que si no hubiera habido grandes manifestaciones, acciones de rechazo duras y también violentas, no habría habido plebiscito. Que este ocurrió gracias a "la calle".

Viene ahora un conjunto de negociaciones para saber cómo se van a presentar los y las candidatas a la Constituyente. La autonomía del movimiento va a ser puesta a prueba. Los partidos políticos tratarán de dominar el escenario y quizá lo logren. Lo importante es que las peleas se darán tanto en el ámbito callejero y masivo como en el de las negociaciones políticas. Nada está dicho aún.

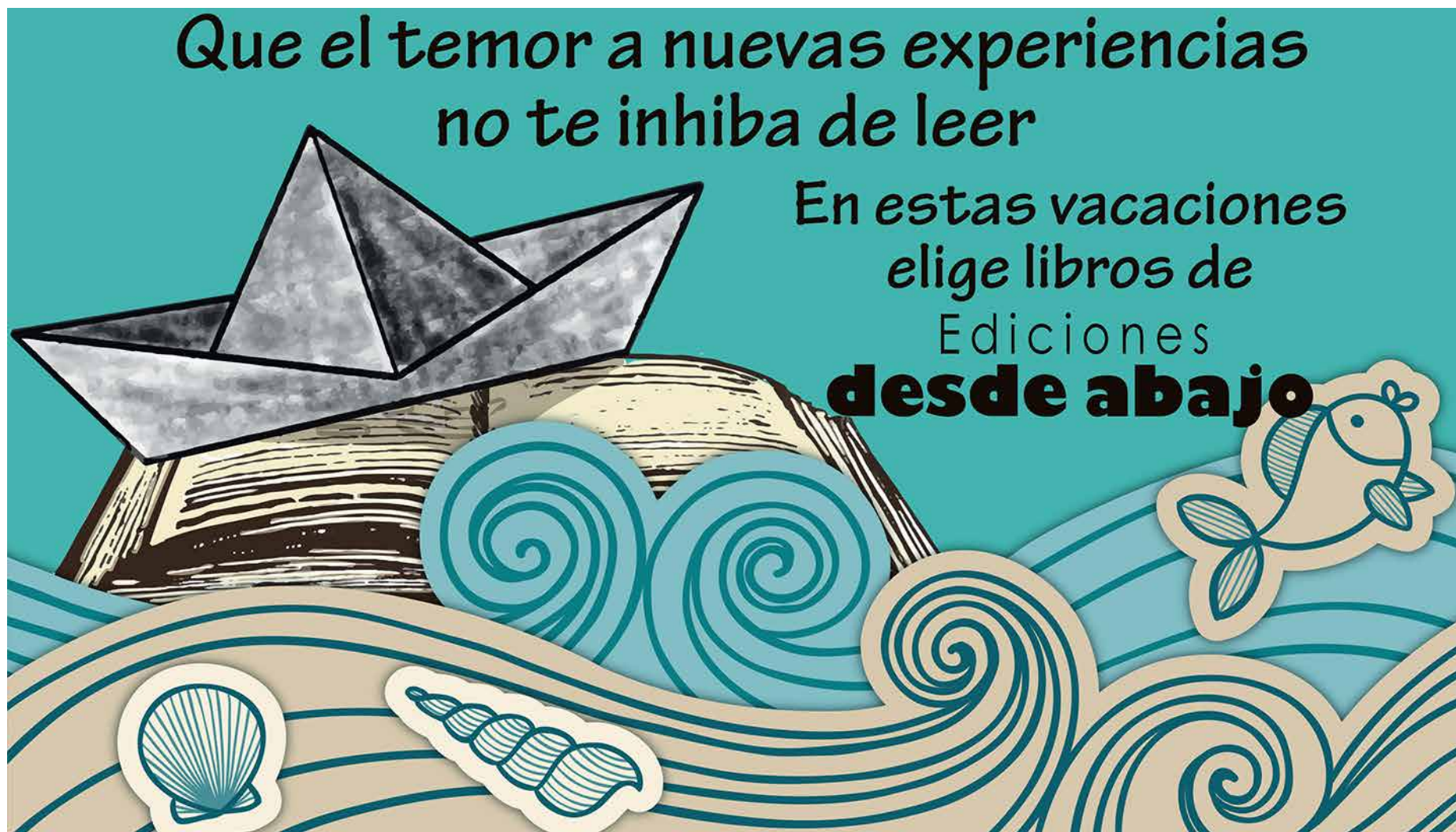
Lo que se ha mostrado es el carácter histórico de la memoria de los sectores populares chilenos. No son fáciles de dominar. Así ha sido siempre. Las oligarquías reaccionarias en el mejor sentido de la palabra, rechazan obviamente cualquier apertura y así lo han hecho también en este plebiscito. Los sectores populares enfrentados a coyunturas auspiciosas o posibles, participan con ideas de cambio, con utopías de una vida mejor. Los partidos políticos se ven agotados, pero quizás puedan surgir nuevos liderazgos, nuevas ideas, en fin, algún tipo de renovación en un contexto cambiante y para muchos amenazante. No es fácil predecir el futuro próximo. Menos aún con el mundo que nos rodea y la pandemia que sigue su marcha sin descansar. Está fijado el 11 de abril próximo las elecciones de miembros de la Asamblea o Convención Constituyente. No pareciera fácil interrumpir el cronograma decidido, no pareciera haber condiciones para ello.

Lo que no cabe duda es la apertura de la esperanza, sobre todo a partir del día después. ■

*Antropólogo.

Que el temor a nuevas experiencias no te inhiba de leer

En estas vacaciones elige libros de Ediciones desde abajo



Debido a la pandemia del covid-19, el planeta sufre su mayor crisis económica desde el período de entreguerras. Explosión del desempleo, inseguridad alimentaria, desconexión escolar... Los efectos del "gran confinamiento" se sienten en todas partes, pero se multiplican en los países pobres, donde el sector informal, por definición falto de protección social, tiene un lugar preponderante.

La pandemia incrementa la dependencia de los países pobres

El "gran confinamiento" del Tercer Mundo

por Gilbert Achcar*

Así como las consecuencias del cambio climático se hacen notar en todas las latitudes, la pandemia de covid-19 nos afecta a todos, jefes de Estado o refugiados. Pero se sabe que estas crisis planetarias no impactan de la misma forma en todos los humanos. Además de las diferentes vulnerabilidades en función de la edad y distintos factores de riesgo, la pandemia, al igual que el calentamiento global, incide de manera muy diferente a escala mundial, y también al interior de cada país, a raíz de las líneas de fractura tradicionales entre ricos y pobres, blancos y no-blancos, etc. Desde luego, la infección de Donald Trump confirmó que el virus no discrimina en función del rango político, pero el tratamiento excepcional que recibió el presidente estadounidense, cuyo costo estimado supera los 100.000 dólares por tres días de hospitalización (1), demuestra que, si bien los humanos son todos iguales ante la enfermedad y la muerte, algunos, como escribió Georges Orwell en *Rebelión en la granja*, son "más iguales que otros".

Como de costumbre, el Tercer Mundo es el más afectado por la crisis económica en curso, una crisis que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha denominado "el gran confinamiento" en su informe semestral de abril de 2020 (2). Una crisis que ya es la más grave desde la Gran Depresión del período de entreguerras. El Tercer Mundo es ese tercer Estado planetario del cual solo unos pocos países de Asia Oriental consiguieron despegarse desde que el economista Alfred Sauvy creó el término en 1952. Lo definiremos aquí como el conjunto de países de bajos ingresos, así como aquellos de ingresos medios (capas inferiores y superiores), según la clasificación del Banco Mundial, con excepción de China y Rusia que, si bien cuentan con ingresos medios superiores, son potencias mundiales.

Vulnerabilidad de los informales

A escala internacional, "el gran confinamiento" generó una fuerte suba de la desocupación. Ahora bien, el impacto social de esa desocupación es mucho más fuerte en los países del Tercer Mundo que en los países ricos, donde en general se adoptaron una serie de costosas medidas para atenuar sus consecuencias. En promedio,



Hernando Vergara, sin título (Cortesía del autor)

se destruyó el equivalente de 332 millones de empleos a tiempo completo en el mundo a lo largo de los tres primeros trimestres de 2020, es decir 11,7 por ciento de pérdida en relación al último trimestre de 2019. Entre ellos, 143 millones se perdieron en los países con ingreso medio inferior (-14%), 128 millones en los países con ingreso medio superior (-11%) y 43 millones (-9,4%) en los países ricos, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (3). Y si los Estados con ingreso bajo "solo" perdieron el equivalente a 19 millones de empleos (-9%) durante el mismo período, esta cifra traduce mal el impacto socioeconómico de la crisis que atraviesan. En efecto, en estos países, así como en los de ingreso medio inferior, la gran mayoría de los empleos y actividades independientes se encuentran en el sector informal, que absorbe el 60 por ciento del trabajo mundial y está, por definición, desprovisto de toda protección social.

En un informe reciente, el Banco Mundial estima que la pobreza extrema -a la que define como el hecho de tener que sobrevivir con menos de 1,90 dólares por

día- aumentó en este 2020 por efecto de la pandemia por primera vez desde 1998, tras la crisis financiera asiática de 1997 (4). Asia del Sur es la zona más perjudicada en términos absolutos: 49 a 56,5 millones de personas más que las previstas antes de la pandemia deberían ubicarse bajo el límite de la pobreza extrema o permanecer allí este año. En lo que respecta al África subsahariana, se esperan 26 a 40 millones, lo cual confirma la posición del subcontinente como el de mayor tasa de pobreza extrema. La variación rondará entre los 17,6 y 20,7 millones de personas para los países en desarrollo de Asia Oriental (5); podría llegar a 4,8 millones en América Latina y 3,4 millones en la región de Medio Oriente-África del Norte. En total, según las cifras del Banco Mundial, de 88 a 115 millones de personas caerán bajo el umbral de los 1,90 dólares o permanecerán allí en 2020 por culpa de la pandemia. El crecimiento neto en la cantidad de muy pobres en relación a 2019 se ubicará entre los 60 y 86 millones.

Desde 2013, la aceleración del cambio climático, del cual las poblaciones más pobres son las primeras víctimas, así como los nuevos conflictos, como los de Siria, Yemen y Sudán del Sur, venían frenando el descenso de la pobreza. "El gran confinamiento" terminó de liquidar el "Objetivo de Desarrollo Sostenible" relativo a la pobreza extrema que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se había fijado para 2030 y que apuntaba a reducir la tasa mundial al 3 por ciento. Esta tasa se ubicaba todavía en el 10 por ciento en 2015, lo cual correspondía a 736 millones de personas. Según el Banco Mundial, en 2030 debería ubicarse en torno al 7 por ciento.

En julio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha, en inglés) de las Naciones Unidas, hizo sonar las alarmas. Mark Lowcock, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, resumió la situación en el prólogo de su informe: "Las estimaciones recientes sugieren que unos seis mil niños morirán cada día por causas evitables, a causa de efectos directos o indirectos del covid-19. El acaparamiento de recursos sanitarios podría generar la duplicación de muertes por sida, tuberculosis y malaria. El cierre de escuelas erosionará la productividad, reducirá los ingresos a lo largo de toda la vida

y aumentará las desigualdades. La desaceleración económica, el aumento del desempleo y la baja en la frecuentación de las escuelas aumentarán las posibilidades de guerras civiles, lo cual provoca hambrunas y desplazamientos de poblaciones" (6).

Incluso sin nuevas guerras, el hambre aumentó notablemente. Según el informe de la Ocha, la pandemia la agravó en las zonas donde ya azotaba y creó nuevos epicentros. Sin una asistencia masiva y rápida de parte de los países ricos, la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda podría alcanzar los 270 millones antes del fin de año, contra 149 millones antes de la pandemia. Ahora bien, en septiembre, de los 10.300 millones de dólares solicitados por la Ocha, solo le habían atribuido 2.500 millones de acuerdo al informe anual del secretario general de la ONU (7). Y no será el millón de dólares atribuido al Programa Alimentario Mundial por el premio Nobel de la Paz el que podrá colmar ese vacío. ¿Será porque el hambre no es contagiosa y no pasa las fronteras con los migrantes como el virus? El último 13 de octubre, el Banco Mundial otorgó 12.000 millones de dólares a los países en desarrollo para un programa de vacunación y de tests anti covid-19.

Éxodo urbano de los migrantes indios

Por otra parte, el programa "Cada mujer, cada niño", lanzado por la ONU en 2010 y administrado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), advierte en su último informe que el cierre de escuelas debido a la pandemia significa que muchos niños y adolescentes no retomarán probablemente jamás ese camino en los países del Tercer Mundo (8). Y se expondrán por lo tanto a niveles mayores de violencia familiar y, en el caso de las niñas y adolescentes, a elevados riesgos de embarazos precoces. El mismo informe estima que "el gran confinamiento" podría reducir en un tercio el progreso realizado en la eliminación de la violencia de género con horizonte en 2030, y provocar 13 millones de casamientos de niños suplementarios durante la próxima década.

"No es inevitable. Podría prevenirse con dinero y voluntarismo de la parte de los países más ricos -afirma Lowcock-. Estimamos que el costo de la protección del 10% más pobre contra los peores efectos de la pandemia y la recesión asciende a 90.000 millones de dólares -es decir menos del 1% del plan de reactivación que los países ricos pusieron en marcha para proteger sus economías." En efecto, según el FMI, el monto total de los planes de reactivación anunciados en el mundo alcanza unos 11,7 billones de dólares en septiembre, es decir un 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, de los cuales la mayor parte se limita a los países de ingresos altos (9). El nivel global de la deuda pública real de esos países supera ahora el 120 por ciento del PIB -un nivel que solo fue alcanzado una vez en la historia del capitalismo: al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, de acuerdo a la OIT, 937.000 millones de dólares permitirían paliar las pérdidas de empleo de los países con ingresos medios bajos, y 45.000 millones alcanzarían para los países de ingresos bajos, es decir un total de 982.000 millones de dólares para un conjunto de Estados que reúnen a la gran mayoría de la población mundial.

Esta ayuda requerida para los países pobres, modesta si se la compara con las

medidas tomadas por los Estados más ricos, es además urgente. Tres expertos del FMI advirtieron sobre los efectos a largo plazo de esta crisis en los países con ingresos bajos. Utilizan el término scarring (literalmente, “dejar cicatrices”), que designa una pérdida permanente de capacidad productiva. “El scarring fue el legado de las pandemias que precedieron a esta: [mayor] mortalidad; deterioro de la salud y de la educación lo cual disminuye los ingresos futuros; agotamiento del ahorro y de los bienes que impone el cierre de empresas –sobre todo las pequeñas empresas sin acceso al crédito– y causa perturbaciones irreversibles en la producción; y un sobreendeudamiento que frena los préstamos al sector privado. Así, tras la pandemia del virus del Ébola, en 2013, la economía de Sierra Leona nunca pudo recuperar la senda de crecimiento previa a la crisis” (10).

El país más poblado del Tercer Mundo, India, es también uno de los más afectados por “el gran confinamiento”. Su PIB cayó casi un cuarto (23,9%) al segundo trimestre de 2020. Se trata de un duro golpe a su “ambición de transformarse en una potencia mundial, de salir de la pobreza y modernizar sus Fuerzas Armadas”, explica el jefe de la oficina de *The New York Times* en Nueva Delhi, Jeffrey Gettleman. La gestión errática del primer ministro de extrema derecha, Narendra Modi, contribuyó notablemente y exhibió a las claras los peligros de reproducir de forma idéntica medidas tomadas en países con características sociales y demográficas muy distintas.

Según cuenta Gettleman, “el 24 de marzo, a las 20 horas, después de haber ordenado a toda la población permanecer confinados, Modi cerró la economía –oficinas, fábricas, rutas, trenes, fronteras entre Estados [de la Unión india], casi todo– con cuatro horas de preaviso. Decenas de millones de indios instantáneamente perdieron sus empleos. Muchos trabajaban en fábricas, en obras de la construcción o eran empleados domésticos en las ciudades, pero eran migrantes de la India rural. Por miedo a morir de hambre en las villas miserias, millones de ellos abandonaron los centros urbanos a pie, en bicicleta o haciendo dedo, desesperados por regresar a sus pueblos: una migración épica de la ciudad al campo, a contrapelo del sentido habitual, y que India nunca había atravesado, pero que desperdigó al coronavirus por cada uno de los rincones de este país de 1.300 millones de habitantes” (11).

Incluso la clase media india no pudo escapar al desastre, con 6,6 millones de “cuellos blancos” condenados al desempleo y una suba de la tasa de suicidios entre los empleados y entre los representantes de las profesiones liberales (12). El gobierno de Modi respondió a esta crisis colosal con un plan de reactivación de... 10.000 millones de dólares, anunciado el 12 de octubre –cifra incomparable con los 2 billones de dólares del plan adoptado en Estados Unidos, un país cuatro veces menos poblado–.

El 6 de octubre, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que estas medidas excepcionales hayan permitido que la economía mundial resista mejor de lo previsto al impacto del confinamiento. Si lo peor había podido evitarse hasta el momento, afirmó “es en gran parte gracias a las medidas excepcionales que impidieron el derrumbe de la economía mundial. Los Estados volcaron alrededor de 12 billones de dólares en ayuda presupuestaria a los

hogares y empresas. Y medidas de política monetaria sin precedentes mantuvieron los flujos de crédito, lo cual ayudó a millones de empresas a mantenerse a flote” (13). Sin embargo, la directora del FMI se encargó de afirmar que “algunos pudieron hacer más que otros. Los países avanzados hicieron todo lo que había que hacer. Los países más pobres hacen lo que pueden”.

Su diagnóstico para los países del Tercer Mundo fue el siguiente: “Los países emergentes, así como los de ingresos más bajos, siguen estando en una situación precaria. Tienen sistemas de salud menos eficaces. Se ven muy afectados por los sectores más dañados, como el turismo y la exportación de materias primas. Y son muy dependientes de los financiamientos externos. El exceso de liquidez y las bajas tasas de interés ayudaron a muchos países emergentes a volver a tomar deuda –pero el África subsahariana no emitió deuda externa desde marzo”.

En efecto, el continente africano, una vez más, es el más seriamente afectado. Según las informaciones del Banco Africano de Desarrollo (BAD), la contracción del crecimiento proyectada para 2020 debería representar pérdidas para África que van de 145.000 a 190.000 millones de dólares, en relación a los 2,59 billones de PIB proyectados antes de la pandemia (14). El BAD estima que el año 2021 podría marcar también una caída de 28.000 a 47.000 millones en comparación con las previsiones anteriores. Son especialmente vulnerables los Estados “altamente endeudados y cuya economía reposa en buena medida en los aportes financieros internacionales, que se tornaron muy volátiles”.

Estos últimos, en efecto, se atrofiaron considerablemente. Además de los efectos globales del “gran confinamiento” en sus propias economías, la totalidad del Tercer Mundo sufre crudamente los efectos derivados de la crisis que afecta a los países ricos. En especial, la caída brutal de los flujos monetarios y de las inversiones destinadas a los países en desarrollo, en especial los envíos de fondos de los trabajadores emigrados. Uno de los efectos de la globalización, a raíz de la doble relación de circulación entre personas y dinero, es que esos envíos –llamados “remesas migratorias”– crecieron de manera sostenida desde el inicio de este siglo. En 2019 alcanzaron el monto record de 554.000 millones de dólares, y superaron por primera vez a las inversiones extranjeras directas (IED), las cuales decayeron constantemente en los países en desarrollo durante la última década, tras haber llegado a su punto más alto de 700.000 millones de dólares (15). Por otra parte, desde el cambio de siglo, las remesas migratorias siempre superaron tanto a las inversiones privadas de portafolios de deudas y acciones hacia el Tercer Mundo como a la ayuda pública al desarrollo –muy ampliamente en el caso de esta última, incluso cuando llegó a su record absoluto en 2019 con 152.800 millones de dólares (16).

Una deuda cada vez más pesada

La contribución de los trabajadores expatriados alcanza o supera el 10 por ciento del PIB para muchos países africanos, como Senegal, Zimbabwe y Sudán del Sur (más del 34% en el caso de este último); para las ex repúblicas soviéticas del Cáucaso y de Asia Central desprovistas de riquezas en hidrocarburos (cerca del 30% para Kirguistán y Tayikistán); para Jordania, Yemén, Líbano y los Territorios Palestinos en Medio Orien-

te; para Nepal (27%), seguido por Pakistán y Sri Lanka (cerca del 8% cada uno), en Asia del Sur, para Filipinas en Asia Oriental y para varios Estados de América Central, como El Salvador y Honduras (más del 20%) y Haití (37%) (17). Ahora bien, el Banco Mundial, prevé que en 2020 los envíos de fondos hacia los países en desarrollo bajarán en el orden del 20 por ciento, es decir más de 110.000 millones de dólares, por el hecho de que los migrantes son los más afectados por los despidos y las reducciones de salarios. Además, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (Unctad) estima que las IED destinadas a países de África caerán entre un 25 y un 40 por ciento en 2020, después de una baja del 10 por ciento en 2019 (18). Para los países en desarrollo de Asia, especialmente aquellos sensibles a las perturbaciones de las cadenas globales de aprovisionamiento, la caída de las IED debería alcanzar entre el 30 y 45 por ciento, y hasta el 50 por ciento para el caso de América Latina.

A todo esto, se agrega el problema creciente de la deuda. Los montos destinados a su reembolso alcanzaron los niveles más altos desde comienzos del siglo (19). En promedio, deberían representar 14,3 por ciento de los ingresos de los Estados implicados en 2020, contra el 6,7 por ciento en 2010. Algunos enfrentan situaciones dramáticas, como Gabón, donde la deuda absorbe el 59,5 por ciento del total de los ingresos públicos, Ghana (50,2%), Angola (46%) o Pakistán (35%). Cincuenta y dos Estados dedican más del 15 por ciento de sus ingresos a reembolsar deuda, contra 31 en 2018, 27 en 2017, 22 en 2015...

Ante esta situación urgente, los representantes de las finanzas internacionales multiplican las declaraciones de buenas intenciones, afirman la necesidad de aliviar la deuda de los países del Tercer Mundo a causa de la pandemia. Entre ellos, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, o su economista jefe, Carmen Reinhart, quien preconiza anulaciones de deudas para permitir que los países en desarrollo tomen nuevos préstamos (20). Pero la realidad es menos color de rosa, tal como lo explica el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (Cadtm): “A raíz de la pandemia, los países del G20 acordaron una moratoria sobre el reembolso de la parte bilateral de la deuda para el período que va de mayo a diciembre de 2020. [...] 73 países fueron inicialmente seleccionados, pero solo 42 llegaron a un acuerdo con el Club de París” (21). ¿Por qué tan pocos? Una de las explicaciones sería “el chantaje de los acreedores privados y de las agencias de calificación”. Estas últimas “indicaron que los países que presentaban demandas de moratorias tomaban el riesgo de ver degradada su nota por las agencias de calificación y de ver recortado su acceso a los mercados financieros”. En suma, “esos países deberán reembolsar sumas superiores con menos recursos” (22).

Acosados por la crisis, los países del Tercer Mundo solicitan un mayor alivio de sus deudas (23). La revuelta está a punto de estallar. En un artículo publicado por *Financial Times*, el ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, convocó a los Estados africanos a “tomar la delantera creando un secretariado para coordinar los diversos grupos de intereses y los centros de poder con el objetivo de proponer una reestructuración de la arquitectura financiera global”, a fin de adaptarla “a las necesidades de África y de otros países en desarrollo en el momento en que debe-

mos gestionar la reconstrucción post covid-19” (24). Otros, como el académico filipino de izquierda Walden Bello, defienden la idea según la cual los países del Tercer Mundo deberían salir colectivamente de dos instituciones fundamentales de la arquitectura financiera mundial: el FMI y el Banco Mundial (25).

A fin de cuentas, “el gran confinamiento”, al consolidar la posición de subordinación del Tercer Mundo en el seno del sistema político-económico del mercado mundial, alejará aun más la esperanza de que se pueda salir sin rupturas de la lógica neoliberal, cuya inadecuación a las necesidades de una humanidad imbuida en una catástrofe es cada vez más flagrante. ■

1. Sarah Kliff, “How much would Trump’s coronavirus treatment cost most Americans?”, *The New York Times*, 7-10-20.

2. “The Great Lockdown”, *World Economic Outlook*, FMI, Washington, DC, abril de 2020.

3. “ILO Monitor: covid-19 and the world of work. Sixth edition”, *OIT*, Ginebra, 23-9-20.

4. “Reversals of fortune - Poverty and shared prosperity 2020”, *Banco Mundial*, Washington, DC, 2020.

5. “From containment to recovery: Economic update for East Asia and the Pacific”, *Banco Mundial*, octubre de 2020.

6. “Global Humanitarian Response Plan: Covid-19 (April-December 2020)”, *Ocha*, Ginebra, julio de 2020.

7. “Memoria del secretario general sobre la labor de la Organización – 2020”, *ONU*, Nueva York, 2020.

8. “Protect the progress: rise, refocus, recover”, *OMS y Unicef*, Ginebra, 2020.

9. “Fiscal Monitor: Policies for the recovery”, *FMI*, octubre de 2020.

10. Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand, “Covid-19: Without help, low-income developing countries risk a lost decade”, *IMFBlog*, 27-8-20.

11. Jeffrey Gettleman, “Coronavirus crisis shatters India’s big dreams”, *The New York Times*, 5-9-20.

12. Stephanie Findlay, “Suicides rise after virus puts squeeze on India’s middle class”, *Financial Times*, Londres, 6-10-20.

13. Kristalina Georgieva, “La longue ascension: surmonter la crise et bâtir une économie plus résiliente”, *FMI*, 6-10-20.

14. “Perspectives économiques en Afrique 2020”, *BAD*, Abiyán, 30-1-20.

15. “Covid-19 crisis through a migration lens”, *Migration and Development Brief*, N° 32, *Banco Mundial y Parteneriado Mundial para el Conocimiento sobre las Migraciones y el Desarrollo* (Knomad, en inglés), Washington, DC, abril de 2020.

16. “ODA 2019 preliminary data”, *Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde)*, www.oecd.org

17. “Covid-19 crisis through a migration lens”, *op. cit.*

18. “World Investment Report 2020: International production beyond the pandemic”, *Unctad*, Ginebra, 2020.

19. “Debt Data Portal”, Jubilee Debt Campaign, data.jubileedebt.org.uk. Véase también “Faut-il payer la dette?”, *Manière de voir*, N° 173, París, octubre-noviembre de 2020.

20. Larry Elliott, “World Bank: Covid-19 pushes poorer nations ‘from recession to depression’”, *The Guardian*, Londres, 19-8-20, y Jonathan Wheatley, “Borrow to fight economic impact of pandemic, says World Bank’s chief economist”, *Financial Times*, 8-10-20.

21. El Club de París es un grupo de acreedores públicos que comprende a la mayoría de los miembros de la Ocde, así como a Brasil y Rusia.

22. Éric Toussaint y Milan Rivié, “Les pays en développement pris dans l’état de la dette”, *Cadtm*, Lieja, 6-10-20.

23. Jonathan Wheatley, David Pilling y Andrés Schipani, “Emerging economies plead for more ambitious debt relief programmes”, *Financial Times*, 12-10-20.

24. Ken Ofori-Atta, “Ghanaian finance minister: Africa deserves more Covid help”, *Financial Times*, 12-10-20.

25. Walden Bello, “The Bretton Woods twins in the era of Covid-19: Time for an exit strategy for the global south?”, *Focus on the Global South*, Bangkok, 10-10-20.

*Profesor en Estudios de Desarrollo en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres.

Traducción: Heber Ostroviesky



Hernando Vergara, sin título, acrílicos sobre lienzo (Cortesía del autor)

Casi un año después de la erupción del covid-19, el mundo sigue sin poder hacer frente a la pandemia. Sin embargo, las medidas adoptadas para contrarrestarla han causado una triple crisis: económica, política y cívica. Ya se han reforzado dos grandes tendencias: el triunfo de las industrias digitales y el retorno del Estado como motor del capitalismo. Dos movimientos complementarios...

Como el covid-19 remodeló la economía

Una pandemia, dos futuros

por Robert Boyer*

Los economistas rara vez mostraron interés por los procesos mediante los cuales se construyen las reglas del juego, las instituciones y organizaciones cuya convergencia asegura la resiliencia de un régimen socioeconómico. Su incompreensión de la larga depresión que siguió al desmoronamiento del régimen soviético en Rusia es prueba de esta carencia. Ahora bien, salvando las distancias, es exactamente la pregunta que plantea la salida del coma en el que se vieron inmersas las economías para intentar detener la pandemia de covid-19: ¿cómo reconstituir un sistema económico funcional a partir de componentes desconectados unos de otros?

Ante la falta de un apoyo histórico, cada cual propone una aproximación normativa en función de sus preferencias doctrina-

les o ideológicas. Para facilitar la recuperación, hay que eliminar los impuestos a la producción, afirman las organizaciones patronales. Hay que restablecer el impuesto a la riqueza, instituir un impuesto transitorio, o incluso permanente, a los altos ingresos y encaminarse hacia más justicia social, proclaman los investigadores y los movimientos de izquierda. Otros sugieren “empezar todo de cero”: tomar finalmente en cuenta la amenaza de desmoronamiento ecológico y prolongar el decrecimiento, cuya posibilidad demostró el confinamiento.

Explorar el legado de las dos últimas décadas se impone como una condición previa. La pandemia interviene en una coyuntura marcada por la difícil salida de la crisis de 2008, que no desembocó en un retorno a una regulación estricta de las finanzas. Al

contrario: implicó la conservación de tasas de intereses casi nulas para estimular la actividad económica, fuente de recurrentes desmanes especulativos –por ejemplo sobre el petróleo y las materias primas– en las sociedades dominadas por la financiarización**. El despegue de los ingresos del capital y la precarización del empleo alimentan un alza constante de las desigualdades. A principios del año 2020, los responsables políticos no podían imaginar que un virus fuese capaz de detener estas poderosas dinámicas.

Incertidumbre radical

Ciertamente, a partir de la observación del síndrome respiratorio agudo severo (Sars, en inglés) y del H1N1, algunos especialistas en salud pública habían llegado a la conclusión de que había que pre-

pararse para el retorno de epidemias cuya probabilidad aumentaba con la movilidad internacional. En Asia se acusó recibo del mensaje, pero no en Estados Unidos o en Europa –al contrario. En general, los gobiernos buscaron limitar el crecimiento de los costos de la salud, a riesgo de invertir de manera insuficiente en los equipamientos elementales de lucha contra las epidemias. Grande fue el desconcierto cuando la rápida progresión de las infecciones obligó a una medida radical –el confinamiento–, por no haber previsto y preparado los medios para una estrategia eficaz: testear, trazar y aislar. Así se explica la desigual letalidad de la pandemia entre las grandes zonas de la economía mundial y entre países geográficamente cercanos (Francia y Alemania, por ejemplo).

La decisión de muchos gobiernos de priorizar la defensa de la vida humana más que perseguir la normalidad económica invirtió la jerarquía tradicional instituida por los programas anteriores de liberalización, que habían debilitado el sistema de salud. Este cambio inesperado y brutal precipita una serie de ajustes que recorren toda la sociedad: pánico bursátil, desmoronamiento del precio del petróleo, falta de crédito, reducción del consumo, volatilidad de las tasas de cambio, abandono de la ortodoxia presupuestaria, etc.

La irrupción del covid-19 tomó por sorpresa a los mismos comentaristas y actores, incapaces de encontrar las palabras para describir la situación que tenían que enfrentar. Después de la guerra contra el terrorismo, ¿era sensato declararle la guerra a un virus? ¿Era pertinente calificar de “recesión” lo que es de hecho una decisión política y administrativa de detener todas las actividades que no son necesarias para luchar contra la pandemia y para la vida diaria?

Los no especialistas y los dirigentes políticos pudieron creer que los avances de la biología permitirían un control rápido del covid-19. Pero eso implicaba ignorar la advertencia de los investigadores en virología: no hay virus tipo, cada cual tiene características que hay que descubrir al mismo tiempo que se expande. Las autoridades por lo tanto tuvieron que tomar decisiones de largo alcance ante una incertidumbre radical. ¿Cómo decidir hoy dado cuando sabemos que aún no sabemos lo que terminaremos sabiendo pasado mañana –lamentablemente, ¿demasiado tarde?-. ¡Adiós al cálculo económico racional! De lo cual resulta un mimetismo general: mejor equivocarse todos juntos que tener razón por separado. Así, los gobiernos se copian unos a otros y terminan refiriéndose a un mismo modelo de difusión de la pandemia. Los financistas se conforman con invertir en fondos que siguen un índice bursátil, porque no tienen la información pertinente para evaluar los activos financieros. Asimismo, los gobernantes no previsores tienen que innovar con medidas sin precedentes, lo que agrega una segunda incertidumbre radical, dado que nadie sabe cuál será su impacto final.

Esto es lo que explica en parte los contrastes de las decisiones públicas y las contradicciones que atraviesan los discursos oficiales. Esta pregnancia de la incertidumbre tiene una consecuencia importante en materia de responsabilidad: cuando las estrategias que se hayan revelado como las más eficaces sean conocidas, los ciudadanos perjudicados por un tratamiento inadecuado de la pandemia, ¿podrán enjuiciar a la administración de la salud o incluso a las políticas?

La decisión de cuasi suspensión de la economía con el riesgo de hacer quebrar a las empresas más frágiles y empobrecer a los más débiles debía verse acompañada de medidas de apoyo a los resultados de las empresas y a los ingresos de los asalariados. En Francia, el aporte masivo del Estado rompe con el proyecto de un regreso al equilibrio de las finanzas públicas: el imperativo de la salud pública y la urgencia –cuando no el pánico– son los que justifican esta reapreciación de la doctrina gubernamental. Pero la esperanza de una victoria rápida sobre el virus se ve frustrada y hay que extender las medidas sanitarias, por lo tanto, también el esfuerzo presupuestario. La vida humana, que parecía no tener precio, tiene un costo. Turismo, restauración, transporte aéreo, espectáculo: sectores enteros se encuentran a punto de quebrar y sus organizaciones profesionales exigen un regreso a una actividad económica más sostenida. Que no puede ser la que prevalecía en 2019, pues las barreras a la propagación del virus pesan sobre la productividad, los costos y la rentabilidad.

Lógicamente, si la emoción creada por el covid-19 se mostrara duradera, la pandemia podría marcar una toma de conciencia: la búsqueda del bienestar debería convertirse en la piedra angular de las sociedades. Es necesario moderar este pronóstico optimista, ya que el covid-19 no hace tabula rasa del pasado. “Cambiar todo para que nada cambie”, en particular en la distribución del poder en las sociedades y, entre ellas, a escala internacional. Por un lado, el covid-19 ya cambió muchos comportamientos y prácticas: la estructura del consumo registró los riesgos de las relaciones cara a cara; el trabajo se



Hernando Vergara, sin título, acrílicos sobre lienzo (Cortesía del autor)

digitalizó, permitiendo una desconexión al mismo tiempo temporal y geográfica de las tareas que producen un bien o un servicio desmaterializado; la movilidad internacional de las personas ha sido indefinidamente obstaculizada; y las cadenas de valor a escala mundial no saldrán indemnes de los esfuerzos de reconquista de una cierta soberanía nacional sobre la producción de bienes considerados estratégicos. Los modos de regulación se verán transformados, con pocas probabilidades de un regreso al pasado.

¿Por qué no imaginar cómo las fuerzas que trabajan las sociedades pos covid-19 podrían desembocar en configuraciones dotadas de una cierta coherencia?

Por otro lado, el covid-19 aceleró dos de las tendencias observadas desde la década de 2010. La primera tiene que ver con el capitalismo de plataformas, centrado en la explotación de cualquier tipo de información, que empezó a conquistar el mundo. Con la crisis sanitaria, mostró su poder manteniendo la actividad del comercio electrónico gracias a sus algoritmos potenciados por la inteligencia artificial y a su logística, proponiendo informaciones en tiempo real de todas las actividades, facilitando el trabajo y la educación a distancia, explorando caminos para el futuro abiertos en nuevos sectores (vehículos autónomos, explotación comercial del espacio, telemedicina, equipos médicos). Por su parte, los

financistas apuestan a su éxito a largo plazo en el contexto de una caída de la economía tradicional. Este capitalismo transnacional invasivo parece haber salido de la crisis sanitaria aun más poderoso.

Pero también suscitó su contraparte dialéctica: una miríada de capitalismo impulsados por el Estado que, empujado por los “dejados de lado” por la apertura de las economías, pretenden defender las prerrogativas del Estado-nación, incluso en el campo económico. A medida que los beneficios de la globalización se desdibujaban, aparecieron diversos tipos de capitalismo estatales. Sus gobiernos salen ideológicamente fortalecidos de la pandemia, que rehabilitó el rol protector de las fronteras.

Esta presentación no puede dejar de suscitar una objeción de sentido común: ¿cómo pueden coexistir dos regímenes tan opuestos? Si se mira bien, se alimentan mutuamente. La ofensiva de las multinacionales del capitalismo digital tiene como contrapartida una desarticulación de los sistemas productivos nacionales y una polarización de las sociedades según una línea de fractura entre los grupos y las profesiones que prosperan por las convocatorias de licitación de los territorios y los otros, los perdedores, cuyo nivel de vida se estanca, e incluso baja. Tal es el terreno del que se alimentan los movimientos que defienden la identidad nacional y le piden al Estado que los proteja del ventarrón de la competencia internacional, que no tienen los medios para enfrentar.

Paradójicamente, la pandemia consolida estos dos tipos de capitalismo. El capitalismo transnacional de la información domina desde hace mucho tiempo el comercio electrónico, en el cual construyó una logística aceptada, y el teletrabajo. El distanciamiento físico está en el centro de su modelo productivo y las medidas de confinamiento le permiten conquistar

clientes rápidamente, desarrollar nuevas aplicaciones para la medicina, la educación a distancia, las reuniones de trabajo. Los financistas ven en la información y en la investigación médica los raros sectores que salen fortalecidos de la pandemia.

En el campo ideológico, los gobiernos calificados de “populistas” ganan terreno, porque la amenaza de un virus venido de afuera justifica un control de las fronteras, la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento del Estado en la esfera económica. El capitalismo estatal no pretende competir con el capitalismo transnacional, sino simplemente afirmar una soberanía económica, por más que se adquiera en detrimento del nivel de vida. Los gobiernos pueden dirigir su mirada hacia China para contener a las Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), de manera tal que una división del espacio mundial entre dos esferas de influencia se vuelve posible, sin implicar necesariamente la victoria de una sobre otra.

En este clima sombrío, los conflictos sociales, no superados en el pasado reciente, corren el riesgo de resurgir tanto más cuanto que los puestos de trabajo destruidos podrían ser más numerosos que los creados en los sectores de futuro. En el capitalismo, un régimen socioeconómico solo es viable si descansa sobre un compromiso fundador que organice la arquitectura institucional –en particular la de la relación salarial y la de la competencia–, guíe la acumulación y canalice el conflicto entre capital y trabajo. La polarización de las sociedades vuelve extremadamente difícil el ejercicio, pero sería ilusorio pensar que medidas puramente técnicas, por más innovadoras que sean, puedan reemplazar el rol de lo político en la construcción de nuevos compromisos.

Construir un nuevo compromiso

Visto que sería inútil buscar una previsión en un determinismo de orden tecnológico o económico, ¿por qué no imaginar cómo las fuerzas que trabajan las sociedades pos covid-19 podrían desembocar en configuraciones dotadas de una cierta coherencia?

Un primer futuro podría resultar de una alianza entre las técnicas digitales y los avances de la biología para llegar a una sociedad de vigilancia generalizada que instituya y vuelva posible una polarización entre una pequeña cantidad de ricos y una masa de sujetos vueltos impotentes por el abandono del ideal democrático.

El segundo futuro podría resultar del desmoronamiento de una sociedad semejante. La dislocación de las relaciones internacionales y el fracaso de la implementación de un determinismo biológico muestran la necesidad de un Estado social que se convierta en el tutor de una democracia extendida a la economía. El éxito de una cantidad creciente de experiencias nacionales vuelve a hacer posible, a largo plazo, la construcción de un régimen internacional centrado en los bienes públicos mundiales y los comunes sin los cuales los regímenes nacionales no pueden prosperar. La historia se encargará de invalidar, o no, estas dos visiones, y de sorprendernos, como lo hizo el covid-19. ■

** Véase Frédéric Lemaire y Dominique Plihon, “Los peligros de las tasas de interés negativas”, *Le Monde diplomatique*, edición Colombia, noviembre de 2019.

*Economista. Autor del libro *Les Capitalismes à l'épreuve de la pandémie*, La Découverte, París, 2020, que inspiró este texto.

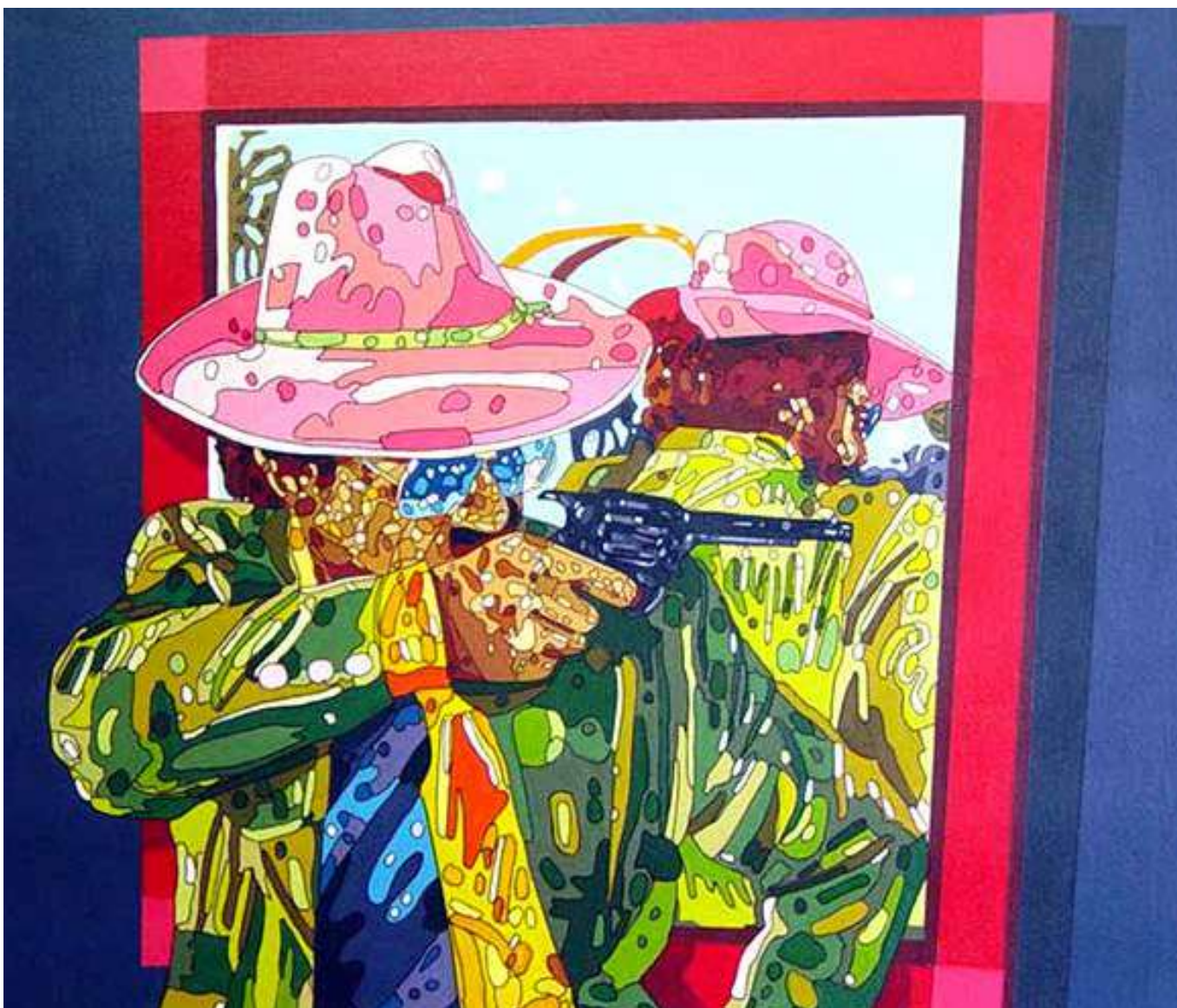
Traducción: Aldo Giacometti

Alto Karabaj está experimentando una nueva escalada militar. El conflicto en torno a esta autoproclamada república, situada dentro de las fronteras oficiales de Azerbaiyán y apoyada por Armenia, amenaza la estabilidad del Cáucaso. Aunque las dos treguas negociadas bajo el liderazgo de Moscú no se han respetado, el compromiso incondicional de Turquía detrás de Bakú está alejando las perspectivas de paz.

Del conflicto interétnico a la confrontación geopolítica

Alto Karabaj: del conflicto interétnico a la geopolítica global

por Sergei Markedonov*



Hernando Vergara, detalle, sin título, acrílicos sobre lienzo (Cortesía del autor)

La reciente ola de violencia en el Alto Karabaj llevó nuevamente la atención a la situación en el Cáucaso. Sin embargo, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán no es nuevo. La pulseada etno-política en torno a este pequeño territorio del Cáucaso Sur, con una superficie de 4.400 kilómetros cuadrados, fue una de las primeras del espacio postsoviético. En poco más de tres déca-

das, el enfrentamiento entre comunidades y repúblicas de un mismo Estado, la URSS, se convirtió en un conflicto internacional con perspectivas de resolución inciertas.

La primera fase de este conflicto (1988-1991) puede describirse como un litigio interno entre dos repúblicas federadas. En esa época, la reivindicación principal de Armenia era el *miatsum* (“la unificación”): la anexión del óblast autónomo

del Alto Karabaj (Nkao), que en ese entonces integraba el Azerbaiyán soviético, a la República Socialista Soviética de Armenia. La república de Azerbaiyán, por su parte, priorizaba la preservación de su integridad territorial. Las autoridades soviéticas dudaban acerca del partido a tomar: ¿perpetuación del statu quo (favorable a Bakú) o afirmación del derecho a la autodeterminación (favorable a Ereván)? Esas

vacilaciones favorecieron una escalada de violencia: pogromos antiarmenios en Sumgait (Azerbaiyán) en 1988, luego represalias en Bakú, en 1990; desplazamientos forzados de poblaciones... Las posiciones se radicalizaron.

En una segunda fase (1991-1994), el diferendo devino en enfrentamiento armado abierto, primero entre Bakú y los armenios del Karabaj (que Azerbaiyán calificaba de “separatistas”), y luego, con la intervención del ejército regular armenio, en 1993, entre Estados. Un acuerdo de cese el fuego irrestricto entró en vigencia en mayo de 1994. El conflicto ingresó entonces en una tercera fase, que puede calificarse de político-diplomática, durante la cual prevaleció la búsqueda de una solución pacífica. En diciembre de 1994, el grupo de Minsk, creado con ese objetivo dentro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce), se dotó de una triple co-presidencia: París, Washington y Moscú, quienes desde entonces desempeñan el papel de garantes del proceso de paz.

Esta tercera fase terminó en abril de 2016, con la “guerra de los cuatro días”. Por primera vez desde el cese el fuego de 1994, el statu quo se resquebrajó. El entonces presidente armenio, Serge Sarkissian, reconoció la pérdida de 800 hectáreas –un revés acotado que, no obstante, anunciaba la política de reconquista por la fuerza que se observa hoy en día (1)–. No obstante, el marco de negociación permaneció sin cambios: más allá de los intercambios de información sobre los incidentes militares, Bakú y Ereván siguieron negándose a un acuerdo más vasto.

El conflicto del Alto Karabaj forma parte de la familia más amplia de los conflictos llamados “congelados” del espacio postsoviético. En 1991, la URSS se derrumbó tras la proclamación de independencia de cada una de sus repúblicas federadas. Algunas regiones pertenecientes a esos nuevos Estados reclamaron entonces el mismo derecho a la autodeterminación, o la anexión a alguna otra república. Ese tipo de desafíos surgieron con el Alto Karabaj en Azerbaiyán, pero también en Georgia con Osetia del Sur y Abjasia o en Moldavia con Transnistria. Pese a ser más tardía, la declaración de independencia, en 2014, de las dos repúblicas autoproclamadas del Donbás (Lugansk y Donetsk) puede vincularse a este mismo proceso de fragmentación que siguió a la dislocación de la URSS.

Pero la cuestión karabají presenta características específicas. En efecto, los “separatistas” tomaron allí el control de la mayor parte del territorio correspondiente a las antiguas fronteras soviéticas, pero también de los distritos adyacentes (en total, siete: cinco por completo y dos parcialmente). Esos territorios, montañosos y poco poblados, revisten una importancia estratégica crucial. El corredor de Lachín une al Alto Karabaj con Armenia; el distrito de Kelbajar, en el norte, contiene fuentes de agua que abastecen al Alto Karabaj. De modo que antes del aumento de la tensión de este otoño, las fuerzas armadas armenias controlaban alrededor del 13,4 por ciento del territorio de Azerbaiyán, según lo reconoce la “comunidad internacional”. Desde entonces, las negociaciones están atascadas, en relación al ordenamiento y la coordinación de tres parámetros: el estatuto de la ex región autónoma, el fin de la ocupación de los distritos adyacentes y la instalación de un corredor seguro entre el territorio del Alto Karabaj y Armenia.



Más allá de este rompecabezas territorial, hay que admitir que la salida negociada no tiene buena prensa, ni en la sociedad de Azerbaiyán ni en la población armenia. Los dirigentes que se arriesgaron a buscar una solución de ese tipo, en muchos casos debieron abandonar sus funciones. Ese fue el caso del ex presidente armenio Levon Ter-Petrosian, que asumió en 1998 y propuso aceptar un plan de paz escalonado. En 1999, varios altos funcionarios del equipo del presidente azerí Heydar Aliyev, como el ministro de Relaciones Exteriores Tofik Zulfugarov, también debieron renunciar a sus cargos. Y la población azerí sabe hacerse recordar por sus dirigentes: en julio de 2020, cuando aumentó la tensión a lo largo de la frontera armenio-azerbaiyana, un grupo de manifestantes se dirigió al Parlamento para pedir la movilización militar (2).

Rechazo a cualquier compromiso

Para asentar su legitimidad frente a las antiguas elites, el primer ministro armenio Nikol Pachinian, quien llegó al poder en 2018 gracias a una “revolución de terciopelo”, adoptó una retórica guerrera. Exigió, entre otras cosas, la participación en el proceso de paz de representantes de la auto-proclamada república del Alto Karabakh, o declaró, durante una visita a Stepanakert para la inauguración de los Juegos Panarmenios de verano, el 6 de agosto de 2019, que “Artsakh [denominación armenia de la región] es Armenia” (3). Si bien esas ideas ya circulaban antes de él, Pachinian se sintió obligado a hacerlas suyas, siendo que él

no combatió en Karabakh en los años 90—hecho de armas indispensable, hasta ese momento, para quien quisiera imponerse como dirigente nacional—.

Los enfrentamientos de este otoño superaron en magnitud a la “guerra de cuatro días” de 2016. Fue la primera vez que las ciudades del Alto Karabakh (la capital Stepanakert, pero también Shusha o Martuni) sufrieron bombardeos. Peor aun, los disparos desbordaron sobre el territorio de Armenia. Se produjeron incidentes cerca de la ciudad de Vardenis, en el distrito de Gegharkunik, a ochenta kilómetros en línea recta de Ereván. Las ciudades azerbaiyanas de Ganyá y Mingechevir, a un centenar de kilómetros de la zona de combate, fueron blanco de ataques de las fuerzas armenias. La amenaza de una internacionalización del conflicto fue más fuerte que nunca, sobre todo cuando los dos sectores del ex enfrentamiento etnopolítico—el mismo Karabakh y la zona fronteriza—están implicados simultáneamente.

Es imposible referirse a la internacionalización del conflicto sin mencionar el papel de Ankara. Arraigado en una solidaridad panturca, el apoyo de Turquía a Bakú no es nuevo. En 1993, Turquía cerró su frontera terrestre con Armenia, y desde entonces, no existe ninguna comunicación por vía terrestre entre ambos países. Entre los Estados vecinos o dentro del grupo de Minsk, nadie aboga con tanta constancia por la victoria total de Bakú sobre Ereván y Stepanakert. De hecho, Ankara propone una condición previa a todo proceso de negociación: el retiro total de las fuerzas ar-

menias, no sólo de los distritos ocupados, sino también del mismo Karabakh (4).

La escalada de este otoño sacó asimismo a la luz el involucramiento de combatientes yihadistas y grupos armados pro-turcos provenientes de Medio Oriente (5). Aunque algunos de ellos, poco numerosos, hayan participado en las hostilidades del lado azerbaiyano a principios de los años 90, en esa ocasión su papel fue marginal. Su participación, renovada y numéricamente más importante, hace gravitar un riesgo de desestabilización, tanto sobre Azerbaiyán—donde la mayoría musulmana de la población se divide entre chiitas y sunnitas—como sobre sus vecinos, Georgia o Rusia (y muy en particular, sobre sus repúblicas musulmanas del Cáucaso Norte).

En comparación con la determinación turca, Rusia actuó con reserva. El presidente Vladimir Putin afirmó que la asistencia militar prometida a Ereván en caso de ataque, en virtud del tratado de seguridad colectiva que vincula a ambos países desde 1992, solo concernía al territorio de Armenia, no al Alto Karabakh. Y si bien el Kremlin intentó una primera mediación, invitando a ambas partes a reunirse en Moscú el 9 de octubre, la tregua negociada entonces nunca entró en vigencia.

¿Por qué Rusia adoptó una actitud tan prudente, cuando en 2008 no dudó en enviar sus tanques contra Georgia, que intentaba reconquistar por la fuerza a Osetia del Sur? En realidad, Moscú no desarrolló una estrategia única para resolver los conflictos caucásicos. Prefiere reaccionar según las realidades del terreno. Contrariamente

a Tiflis, que supo adoptar una postura pro-occidental, Bakú no asocia la restauración de su unidad territorial con una retórica antirrusa. Azerbaiyán no declaró aspirar a incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) o a la Unión Europea; no lleva adelante una “política histórica” basada en el rechazo total de la experiencia soviética y el cuestionamiento de la victoria común en la “gran guerra patriótica” (contra la Alemania nazi). Por otra parte, ambos países están igualmente ligados por varios acuerdos de cooperación que conciernen tanto a la seguridad transfronteriza como a la energía, la explotación de los recursos del Mar Caspio o los transportes. El Kremlin no querría ver a Azerbaiyán convertido en una segunda Georgia, y en consecuencia, no hace nada por empujar a Bakú hacia la vía del enfrentamiento.

No obstante, el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre Azerbaiyán y Turquía puso a Rusia ante un dilema. Ankara ya propuso a Moscú el establecimiento de una suerte de “condominio geopolítico” en el Cáucaso Sur, es decir, la extensión del modelo sirio de conciliación de los intereses y las contradicciones al “exterior cercano” de Rusia (6). Por ahora, Ankara no invitó a Moscú a ninguna negociación. Además, el Kremlin no toleraría la derrota de una de las dos partes, y menos bajo la presión directa de Turquía. Eso significaría a la vez una amenaza para su influencia en el Cáucaso Sur y el riesgo de que la inestabilidad de Medio Oriente alcance a sus repúblicas del Cáucaso del Norte.

Hoy en día, el conflicto de Karabakh es la única cuestión, en Eurasia, respecto a la cual los intereses de Rusia y los de Occidente no se contradicen tanto. Es casi imposible imaginar una declaración común de Donald Trump, Emmanuel Macron y Vladimir Putin sobre cualquier tema. Y sin embargo, en el quinto día de la escalada militar en Karabakh, el 1º de octubre de 2020 (7), los presidentes estadounidense, francés y ruso pusieron sus firmas al pie de un mismo documento...

Su preocupación común sobre la amenaza yihadista, así como la desconfianza creciente de Washington, París y Bruselas respecto a Ankara favorecen la convergencia de sus visiones. ¿Será suficientemente fuerte su voluntad, para superar la desconfianza que existe sobre prácticamente todos los demás asuntos? Por ahora, una cosa es segura: en la Bolsa de la geopolítica, el conflicto del Alto Karabakh incrementa su capitalización a simple vista. ■

1. Sara Khojovan y Anthony Halpin, “War may resume at ‘any moment’, Armenian president warns”, Bloomberg Businessweek, Nueva York, 24-4-16.

2. Lenta.ru, 15-7-20 (en ruso).

3. Rosbalt, 8-8-19 (en ruso).

4. “Turkey’s Erdogan says Armenia must withdraw from Azeri lands”, Reuters, 28-9-20.

5. Ria Novosti, 6-10-20 (en ruso); Bethan McKernan, “Syrian rebel fighters prepare to deploy to Azerbaijan in sign of Turkey’s ambition”, *The Guardian*, Londres, 28-9-20; Kareem Khadder, Gul Tuysuz y Tim Lister, “Rebels from Syria recruited to fight in conflict between Azerbaijan and Armenia, source says”, CNN, 1-10-20.

6. Eurasia Daily, 30-9-20 (en ruso).

7. “Déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères français, russe et américain, coprésidents du groupe de Minsk, appelant à un cessez-le-feu au Haut-Karabakh”, Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores, París, 5-10-20.

*Investigador del instituto de estudios internacionales del MGIMO (Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa), jefe de redacción de la revista *Análisis internacionales*.

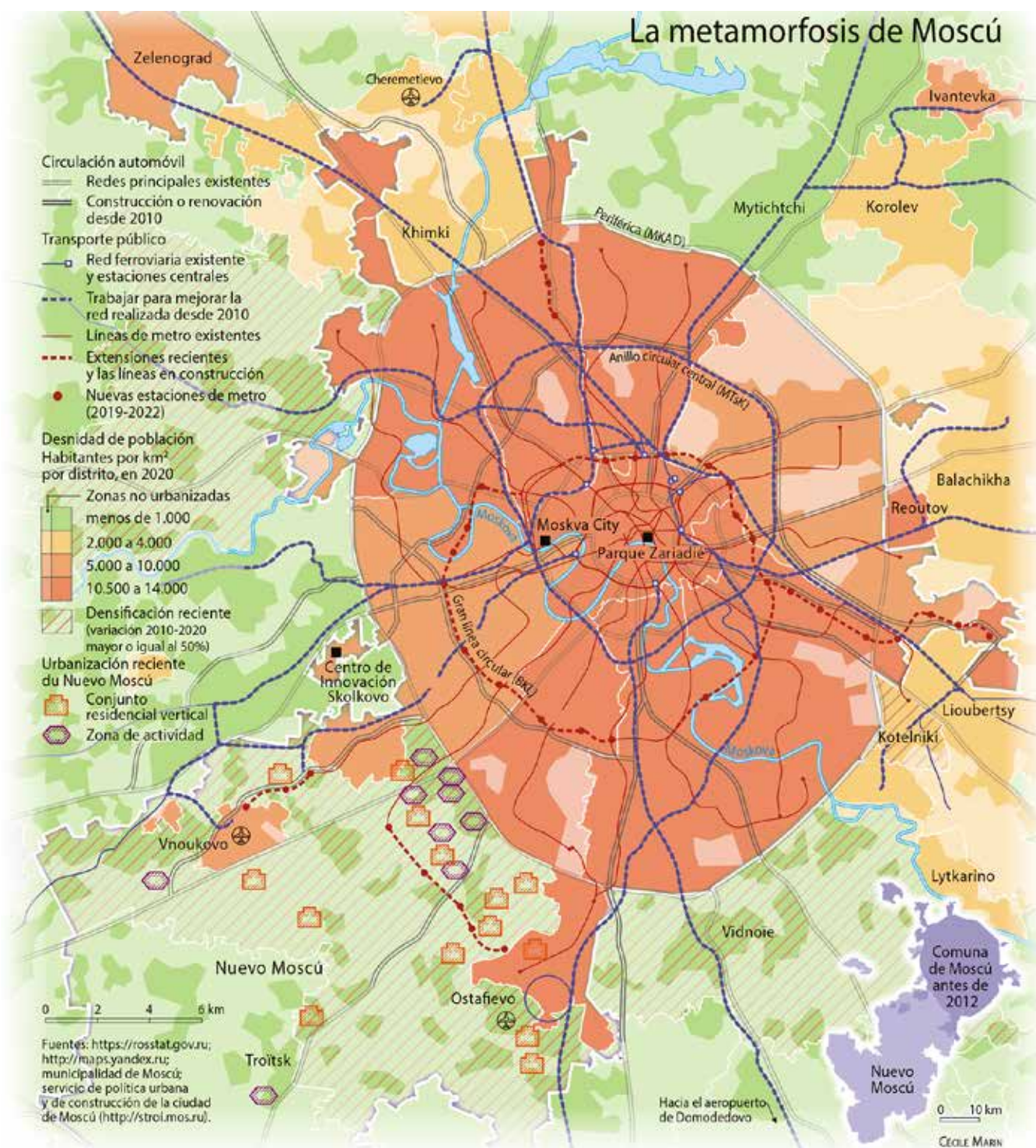
Traducción: Patricia Minarrieta

Desde hace diez años, la capital rusa cuida su comunicación. Adepta al marketing urbano de moda, la municipalidad de Moscú busca atraer a inversores y ejecutivos de multinacionales, al igual que las otras grandes metrópolis mundiales. Pero esta política no logra disimular el control que ejerce el Kremlin, al servicio de mayores brechas territoriales.

La capital rusa quiere limpiar su imagen

Moscú quiere ser una "ciudad global"

por Vladimir Pawlotsky*



A pie del Kremlin, los turistas –rusos o extranjeros–, armados con palos telescópicos para sacarse fotos, se amontonan sobre el puente flotante del nuevo parque Zaryadye, que sobrevuela el río Moscova. En una síntesis de la flora rusa, este parque integra paisajes de estepa, tun-

dra, bosque y humedal. También tiene una cueva de hielo, un museo arqueológico, restaurantes gourmet, un centro multimedia donde se llevan a cabo proyecciones de películas y exposiciones, un auditorio para 1.600 personas y un anfiteatro al aire libre con una capacidad similar, en el que se realizan, desde la inauguración del parque el

9 de septiembre de 2017, los eventos internacionales más prestigiosos de la capital. En 2018, el parque Zaryadye, orgullo de los ediles, fue incluido en el ranking de la revista estadounidense *Time* como uno de los lugares más lindos del mundo para visitar.

Primer parque público moscovita que se construyó en más de cincuenta años,

Zaryadye forma parte de un proyecto de embellecimiento y puesta en valor de la capital ante el mundo que emprendió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, hace unos diez años. En 2010, cuando asumió su cargo, este ex funcionario federal –seguidor de larga data del presidente Vladimir Putin– se propuso limpiar la imagen de la ciudad para impulsarla en la competencia mundial que libran las grandes metrópolis. En otras palabras, el objetivo consiste en competir con Nueva York, Londres, Tokio o París y convertir Moscú en una “ciudad global”, según el concepto popularizado por la socióloga y economista estadounidense Saskia Sassen, quien por otra parte integró el jurado del concurso que seleccionó a los diseñadores del parque.

En una economía dependiente del precio –muy volátil– de los hidrocarburos, Moscú debe convertirse en un centro mundial de estabilidad financiera e innovación. Rusia, y sobre todo su plataforma privilegiada para establecer inversiones extranjeras, la metrópolis moscovita, buscan captar los flujos económicos y financieros internacionales al darle asilo a las oficinas centrales y a las filiales de empresas transnacionales, y al desarrollar actividades culturales así como el turismo.

Construir un relato metropolitano

Para eso, es preciso cumplir con una serie de condiciones. Además del respeto a la propiedad privada, un sistema fiscal ventajoso, una burocracia laxa y una sede exclusiva, las empresas transnacionales buscan un entorno urbano atractivo e infraestructuras colectivas de calidad para brindarles a sus ejecutivos. Estos son parte de los miembros de la famosa “clase creativa” –motor de la nueva economía– junto con científicos, ingenieros, artistas, trabajadores de medios de comunicación, educación, salud y justicia. De hecho, el padre de este concepto, Richard Florida (1), visita Moscú. En 2019, fue el invitado de honor del Moscow Urban Forum (MUF), una gran convención sobre cuestiones urbanas que reúne cada año a varios miles de espectadores y a cientos de actores –funcionarios públicos, economistas, urbanistas– de más de cincuenta países. Y que desde 2017 se celebra en... el parque Zaryadye.

Desde 2018, la compañía Mosinjproekt, coorganizadora del evento y “brazo constructor” de la municipalidad (que posee el 100% de la empresa), recurre a los servicios (por 10.000 euros mensuales) (2) de un representante de primera línea: Maurice Leroy, quien ocupa el cargo de subdirector general. El ex diputado del departamento francés de Loir-et-Cher y ex ministro de Vivienda del tercer gobierno de François Fillon (2010-2012, a cargo en ese entonces del Gran París), es el responsable de los grandes proyectos internacionales de la empresa pública moscovita. Leroy supervisó, entre otras cosas, la firma de un programa de cooperación entre Sobianin y el presidente de la Metrópolis del Gran París, Patrick Ollier, el 4 de julio de 2019. El acuerdo permitió que se posicionaran varias de las principales empresas francesas, como Électricité de France (EDF) y Suez. El MUF ofrece así una oportunidad única al gobierno municipal para promover los resultados de su política urbana ante los dirigentes e inversores internacionales.

Actualmente, Moscú está cubierta de eslóganes de un metro de alto con letras mayúsculas, que se encuentran en deter-

minadas plazas del centro, y de logos coloridos y floreados. Se instalaron redes wi-fi por todas partes y la identidad visual de la municipalidad pasó a elaborarse en colaboración con la población, a través de aplicaciones disponibles para smartphones. En 2018, en el subterráneo, las pantallas transmitían el canal municipal Moskva 24, en el que, entre dos imágenes de hinchas brasileños haciendo jueguitos en la Plaza Roja durante el Mundial de Fútbol, se veía al alcalde inaugurando infraestructuras de todo tipo: parques, estaciones de subte, rutas, hospitales e incluso barrios enteros en las afueras de la ciudad. Porque construir ya no es suficiente; también hay que comunicarlo mediante la edificación de un relato metropolitano: el de una ciudad en movimiento, conectada a los grandes flujos mundiales.

Con esta gran dosis de comunicación, Sobianin pretende pasar la página de la era Yuri Luzhkov, alcalde de la capital entre 1992 y 2010, cuyo balance es duramente criticado en la actualidad. En la mente de los ciudadanos, su mandato quedó asociado a la explosión demográfica de la ciudad. En efecto, en la década de 1990, las empresas constructoras empezaron a obtener permisos de obra sin dificultad alguna. La densidad de la ciudad pasó de 8.280 habitantes por kilómetro cuadrado en 1989 a 10.681 en 2010, una cifra cercana a la de las grandes ciudades asiáticas. Atravesada por las vibraciones de los taldros, Moscú arrastraba también la mala imagen que se había forjado en la primera mitad de los años noventa, cuando la tasa de homicidio se cuadruplicó. Por otra parte, incluso después de que los grupos criminales hubieran cesado los tiroteos en medio de las calles, la ciudad se vio salpicada con regularidad por asuntos de corrupción.

El alcalde Luzhkov encarnaba en sí mismo el concepto de conflicto de intereses. Su mujer, Yelena Baturina, con quien se casó el día anterior en vísperas de su nombramiento como jefe de la alcaldía en 1991, se convirtió en la directora de Inteko, el gigante de la construcción. Baturina se hizo rica durante el mandato de su marido, al punto de convertirse en la primera mujer multimillonaria del país. Asimismo, juntos pusieron en marcha, en un estilo que mezclaba pastiche y modernismo, grandes



Hernando Vergara, sin título, acrílicos sobre lienzo (Cortesía del autor)

proyectos relacionados con el patrimonio histórico, que apuntaban a desdibujar la marca del sovetismo por un retorno a los orígenes prerrevolucionarios. La reconstrucción entre 1995 y 2000 de la Catedral de Cristo Salvador, que había sido dinamitada en 1931 por el poder comunista, y la inauguración en 1997 de una estatua del emperador Pedro el Grande, erigido sobre un barco con obenques de bronce, reflejan el gusto dudoso de la época.

Pero uno de los aspectos más estructurantes de la política de Luzhkov fue la

transición de la capital hacia la economía de libre mercado. Bajo su mandato, las superficies comerciales y de oficinas, que prácticamente no existían en la URSS, se multiplicaron. Su principal hazaña fue la construcción, iniciada en 1998, del distrito financiero Moskva City, que hoy cuenta con siete de los diez rascacielos más altos de Europa. Erigido en la orilla del Moscova, frente a los edificios estalinistas de la avenida Kutúzov, donde vivían dignatarios del partido, este distrito simboliza la entrada de la capital rusa en el grupo de las metrópolis mundiales. Sin embargo, en 2006, con 5,5 millones de metros cuadrados de oficinas, es decir, unos 0,56 m² por habitante, Moscú seguía estando muy por debajo de los promedios internacionales. En la misma época, París, por ejemplo, contaba con 4,5 metros cuadrados de oficinas por habitante. La demanda moscovita era tal que el precio anual del alquiler de oficinas por metro cuadrado se disparó. Según un informe de la consultora inmobiliaria británica Knight Frank (3), en 2008 alcanzó los 900 euros, lo que la situó por delante de París (840 euros), Singapur (826 euros) y Dubai (780 euros), pero por detrás de Tokio (1.400 euros) y Londres (1.017 euros).

Regreso a la órbita federal

Aunque la relativa escasez de superficies de oficinas debilita el atractivo internacional de la metrópolis, su distribución también plantea problemas. Un tercio de los empleos están situados en el distrito central de la capital, que representa menos de un décimo de su superficie (4). A los flujos cotidianos de millones de trabajadores moscovitas se suman los 1,4 millones de trabajadores que vienen de la región de

Moscú, es decir, el 30 por ciento de su población activa. Entre ellos, algunos viven en las ciudades dormitorio densamente pobladas que limitan con la capital o en las pequeñas ciudades situadas a cien kilómetros de la autopista de circunvalación (Mkad) y realizan trayectos de ida y vuelta de entre cuarenta y doscientos cuarenta minutos por día (5). En los alrededores de las ciudades dormitorio, también empezaron a surgir superficies comerciales, grandes consumidoras de terrenos. En 2010, por ejemplo, el primer local de Ikea abrió sus puertas en Jimki, un suburbio situado al noroeste de la capital, y en 2002, Auchan (la cadena de supermercados francesa) siguió los mismos pasos. Rápidamente, cientos de marcas rusas y extranjeras ocuparon la autopista de circunvalación, en el cruce con las autopistas federales, para maximizar su alcance de mercado.

Tras la caída de la URSS, la ampliación del acceso al automóvil particular acarrió importantes reconfiguraciones del tejido urbano. La tasa de motorización aumentó drásticamente, algo raro en una gran ciudad europea a fines del siglo XX. Pasó de 113 a 308 autos por cada 1.000 habitantes entre 1993 y 2016. Y esto sucedió en una ciudad cuyo plano general, en el año 2000, no preveía más de 8,5 millones de habitantes para 2025, mientras que hoy cuenta con alrededor de 13 millones. Consecuencia lógica: el sistema de transporte de Moscú es uno de los más saturados del mundo (6).

En 2010, la elección de Sobianin, ex jefe de la administración presidencial (2005-2008) y ex viceprimer ministro de la Federación (2008-2010), marcó una ruptura. Con la designación de altos funcionarios federales al frente de los principales departamentos de la administración municipal, Moscú volvió a estar en manos federales después de dieciocho años de relativa autonomía política. Esta recuperación del control se vio acompañada, algunos meses más tarde, del anuncio de una nueva política urbana voluntarista. El 17 de junio de 2011, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente Dmitri Medvédev anunció que quería ampliar las fronteras de la municipalidad y transferir las principales instituciones federales –sobre todo las Cámaras bajas y altas del Parlamento y la Fiscalía General– hacia los territorios anexados, en un amplio distrito administrativo, con el fin de liberar el centro de la ciudad de las actividades burocráticas.

“Los negocios siempre quieren estar cerca del gobierno, los ministerios y los organismos estatales”, afirmaba Sobianin. El alcalde estaba convencido de que este nuevo territorio sería un imán de inversiones y que constituiría el principal instrumento de su política de reorientación de los flujos de transporte (7). El presidente les pidió a Sobianin y a Borís Gromov, entonces gobernador de la región de Moscú, que seleccionaran un territorio para ampliar la capital. Los funcionarios encontraron una “corbata” de tierra de unos 1.480 kilómetros cuadrados sobre un eje sur-oeste que multiplicó el tamaño total de la ciudad por 2,4. El territorio, bautizado “Nueva Moscú”, tenía una población de apenas 232.000 habitantes y prometía a la capital importantes perspectivas de despliegue. Después de esta anexión, aprobada el 1º de junio de 2012, Moscú, con sus 2.561 kilómetros cuadrados (unas veinticinco veces el tamaño de París intramuros), se convirtió en la sexta ciudad más grande del mundo, con una densidad promedio de 4.919 habitantes →

Espejismos de la democracia digital

Además de organizar grandes concursos internacionales de arquitectura, la capital rusa ha incurrido en las últimas innovaciones en materia de “democracia digital local”. El objetivo: conectarse a las últimas tendencias del marketing urbano para romper la imagen de la ciudad soviética monumental, rígida y autoritaria, y unirse al club de las “ciudades globales”.

En 2015, el gobierno lanzó la plataforma Internet “Ciudadano Activo”, que hoy cuenta con 3 millones de usuarios, 140 millones de opiniones recogidas y cerca de 4.500 preguntas sometidas a votación. Estas últimas tocan veinticuatro grandes temáticas como el transporte (“¿Moscú necesita una nueva línea de subte?”), la ecología (“¿De qué tipo de arbustos deberían ser los cercos de tal barrio?”), la construcción (“¿Deberíamos hacer más hincapié en los estacionamientos, las áreas de juego o los caniles para mascotas?”) e incluso el deporte (“¿En qué estadio moscovita preferiría presenciar el Mundial de Fútbol de Playa?”).

La idea no es someter al voto de los ciudadanos las preguntas más importantes –al contrario– sino de hacerles las preguntas cuyas respuestas son susceptibles de coincidir con los objetivos de las autoridades, contribuyendo así a legitimar el accionar municipal. Para asegurarse de que la plataforma sea utilizada de manera sostenida a pesar de los temas más bien anecdóticos que pone sobre el tapete, la municipalidad le da a los usuarios más asiduos regalos varios: souvenirs, ropa, entradas para espectáculos, tickets de estacionamiento, boletos de transporte, códigos de descuento, etc. Esta estrategia clientelista le permite recabar diversos datos personales. Los cuestionarios no solo no son anónimos sino que, para poder participar de ellos, también hay que proporcionar una serie de informaciones: lugar de residencia y trabajo, correo electrónico, cantidad de hijos, profesión, sensibilidad estética y política, etc. Todos datos que pueden resultar útiles para la propaganda electoral dirigida...

Ocho por ciento de la población

“Moscú no es Rusia.” ¿De qué capital no se escucha una reflexión parecida? Sin embargo, en este caso refleja en primer lugar una realidad estadística. En 2018, con sus 12,6 millones de habitantes, Moscú, principal ciudad del país delante de San Petersburgo (5,3 millones de habitantes), representaba el 8 por ciento de la población rusa. Su presupuesto es casi cuatro veces superior al de la ex capital imperial. Dicha preponderancia también se manifiesta en su producción de riqueza, que representa un 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En la mayoría de las regiones rusas, las infraestructuras de transporte se encuentran en un estado crítico, la producción está orientada mayoritariamente hacia los mercados locales y el turismo apenas existe. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que, en 2013, Moscú concentrara cerca del 60 por ciento de las sedes centrales de las filiales extranjeras. Una cifra inferior a la que registraban París (73%), Tokio (70%) o Londres (69%), pero muy por encima de la de las ciudades de estados federales como Fráncfort del Meno (18%) o Nueva York (16%)**.

** Olivier Di Lello y Céline Rozenblat, “Les réseaux de firmes multinationales dans les villes d’Europe centre-orientale”, *Cybergeo*, N° 678, 20-6-14, <https://journals.openedition.org>

V.P.

→ por kilómetro cuadrado, es decir, desde un punto de vista puramente estadístico, dos veces menos que antes de la anexión.

A las autoridades rusas les gusta comparar la Nueva Moscú con el Gran Londres (1999) o con la Metrópolis del Gran París (2016). En el caso británico, un nivel administrativo suplementario coordina la capital y el gran anillo londinense, y sobre esta estructura, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tiene la mayor parte del poder. Por el contrario, la Metrópolis del Gran París consiste en un dispositivo de coordinación de 131 municipalidades. Estas dos configuraciones difieren mucho del caso moscovita, ya que la capital rusa absorbió, por anticipado, territorios poco urbanizados. Probablemente sería más pertinente compararse con Hanoi, otra ciudad poscomunista que triplicó su superficie en 2008 después de anexar la provincia limítrofe de Hà Tây. Pero esa comparación sería menos prestigiosa...

Para diseñar la organización de este nuevo territorio, el municipio de Moscú lanzó en enero de 2012 una gran competencia internacional, con diez equipos candidatos. El estudio estadounidense Urban Design Associates ganó el concurso y propuso articular doce “bloques funcionales” (industrial, administrativo, comercial, sanitario, educativo, científico, turístico, logístico, etc.) alrededor de un nuevo centro administrativo federal. Este proyecto, que estaba pensado para 1,7 millones de personas y contemplaba la creación de 800.000 puestos de trabajo, preveía conectar la Nueva Moscú con la “ciudad vieja” mediante un sistema de transporte rápido y eficaz.

Sin embargo, en su mayoría, estos proyectos quedaron trunco y solo vieron la luz sobre folletos de papel satinado. Sin que fuera anulado oficialmente, el traslado de



Hernando Vergara, sin título, acrílicos sobre lienzo (Cortesía del autor)

las instituciones políticas desapareció del programa. Ante la prensa, los funcionarios adujeron que Putin (quien volvió a la presidencia en 2012) quería darle prioridad a la financiación de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) que tendría lugar en Vladivostok en 2012 y a los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014.

“La vida dinámica y activa de Rusia, en su enorme territorio, no puede concentrarse en unas pocas megalópolis”.

Al no recibir a las instituciones federales, la Nueva Moscú se convirtió en un paraíso para las constructoras, tal como su homólogo francés luego del proyecto del Grand Paris Express (8). El ballet ininterrumpido de topadoras da cuenta de ello. Las ocho estaciones de subte que se construyeron para unir la ciudad nueva con la red existente cumplen el papel de descomunales generadoras de plusvalía del suelo. Y otras diecisiete estaciones deberían inaugurarse de acá a 2035. Según el ayuntamiento, ya se dio inicio a la obra de más de 14 millones de metros cuadrados de viviendas y más de 4,3 millones de metros cuadrados de superficies comerciales. La población de la Nueva Moscú pasó de 232.000 personas en 2012 a 404.000 en 2020, lo que supone un aumento del 74%. Para este mismo período, los datos oficiales pronostican la apertura de 170.000 espacios de trabajo. Sin embargo, ya se están observando los primeros casos de congestión de la red. La prensa local señala embotellamientos y saturación de las líneas de subte puntualmente en estas zonas, ya que los habitantes van a trabajar al centro gracias a las nuevas estaciones, a las que suelen acceder por minibús.

Tras tomar nota del estancamiento del proyecto para trasladar las instituciones, el alcalde de Moscú cambió de estrategia.

Mientras que los ingresos fiscales de la ciudad se disparaban (+11,3% entre 2015 y 2016) y que el ministro federal de Finanzas estudiaba la posibilidad de reducir el presupuesto moscovita en beneficio de las demás regiones (9), la capital necesitaba un plan alternativo. Así, en 2017, se formalizó un ambicioso programa de renovación urbana, cifrado en 100.000 millones de rublos (1.500 millones de euros). Su objetivo: demoler cinco mil edificios vetustos. Este parque de viviendas, constituido principalmente por *krushchovkas* –edificios prefabricados construidos en serie entre 1957 y 1968, cuando Nikita Jrushchov dirigía la URSS–, comprende 350.000 departamentos en los que viven más de un millón de personas, es decir, aproximadamente uno de cada diez moscovitas. Según el decreto municipal del 1° de agosto de 2017, su destrucción tiene por objeto “dar una imagen moderna de la capital de la Federación de Rusia” y, al mismo tiempo, acompañar “la formación de una estructura policéntrica”. En una entrevista concedida al portal de noticias de economía RBK, el ministro federal de la Construcción, Mikhail Men, anunció la relocalización de los habitantes: “En el mismo barrio o cerca, pero se los prometo: ¡no en la Nueva Moscú!” (10); una manera de admitir disimuladamente el fracaso de esta última. Además, los departamentos tendrán una superficie equivalente a la de los antiguos, pero en edificios mucho más altos (¡de hasta setenta pisos!) (11) y mixtos, es decir, integrados por viviendas, oficinas y comercios. La idea es introducir en barrios, hasta ahora principalmente residenciales, nuevas funciones para “reducir [la necesidad de movilidad de la población y] la ocupación en las infraestructuras de transporte” (12). De este modo, cada barrio debe convertirse en un islote de vida relativamente autónomo –un polo– en el que los habitantes residan, puedan encontrar trabajo y mandar a sus hijos al colegio.

Este programa, que fue anunciado un año antes de las elecciones municipales y presidenciales de 2018, suscitó una breve pero enérgica oposición. La municipalidad respondió rápidamente y lanzó, del 15 de mayo al 15 de junio de 2017, una gran consulta popular en la aplicación móvil “Ciudadano Activo”. Haciendo unos

clicks en sus smartphones, los habitantes –muchos de los cuales, desde 1992, recibieron gratuitamente un título de propiedad privada de la vivienda en la que residían durante la época soviética– pudieron expresarse sobre el destino de su inmueble. Si más de un tercio de los copropietarios se oponía a la demolición, ésta era anulada. El resultado de la votación representó un éxito para la municipalidad: solo el 11 por ciento de los edificios registrados se retiraron de la lista de las demoliciones.

Así continúa la densificación urbana que comenzó bajo el mandato de Luzhkov. Esta vez, se apoya en las nuevas tecnologías, que permiten mitigar los posibles conflictos sociales y a la vez recabar datos personales (véase “Espejismos de la democracia digital”). A fines de los años 2000, la municipalidad apenas se preocupaba por la “democracia participativa”. Así, por ejemplo, las autoridades falsificaron en masa las firmas de los propietarios de los departamentos para asignar a sindicatos amigos la gestión de los edificios de viviendas de la capital... Los métodos actuales, inspirados en el marketing urbano, no por ello dejan de constituir un incumplimiento.

Todos estos proyectos alteran la vida de los moscovitas. Muchos expertos temen que la anexión de territorios y la “renovación” del viejo Moscú, lejos de reequilibrar el esqueleto de la capital, provoquen nuevos problemas. Moscú por sí sola captó el 45 por ciento de los 8 millones de nuevos habitantes urbanos con los que cuentan las quince ciudades millonarias rusas desde 1989, y la tendencia no está cerca de revertirse. “La vida dinámica y activa de Rusia, en su enorme territorio, no puede concentrarse en unas pocas megalópolis”, indicaba Putin en 2018 en su discurso presidencial ante el Parlamento, con motivo de su investidura. ¿Autocrítica? No precisamente. “Las grandes ciudades deben difundir su energía, servir de apoyo para un desarrollo espacial armonioso y equilibrado de toda Rusia”, agregaba (13). Conque “difundir su energía”... En un contexto de hipercentralización política y presupuestaria (véase “Ocho por ciento de la población”), el mito del derrame parece tener aun un futuro prometedor. ■

1. Richard Florida, *The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*, Basic Books, Nueva York, 2002.
2. David Bensoussan, “Quand les Russes recrutent d'anciens députés français”, *Challenges*, París, 5-1-19.
3. “Global Real Estate Markets – Annual Review and Outlook”, Knight Frank, Londres, 2009.
4. Pascal Marchand, Moscú, Autrement, col. “Atlas Mégapoles”, París, 2010.
5. Alla Makhrova y Roman Babkine, “Metodología para delimitar los límites de la aglomeración moscovita basada en datos de operadores celulares” (en ruso), *Estudios Regionales*, Moscú, N° 2, 2019, www.smolgu.ru
6. Hélène Richard, “La recuperación del transporte público”, *Le Monde diplomatique*, edición Colombia, agosto de 2015.
7. Entrevista en la radio Ekho Moskvy, 17/06/11.
8. Hacène Belmessous, “Le Grand Paris ou le pactole pour les bétonneurs”, *Le Monde diplomatique*, París, octubre de 2018.
9. *Forbes*, edición rusa, Moscú, 27-4-19.
10. RBK, 27-2-17, www.rbc.ru
11. *Kommersant*, Moscú, 29-12-19.
12. Decreto N-497, 2017. Ley del Gobierno de Moscú N 497-PP del 1-8-17, “Sobre el programa de renovación del parque de viviendas en la ciudad de Moscú”.
13. Citado en Jean Radvanyi, “La nouvelle ‘Stratégie de développement territorial’ russe. Entre volontarisme et utopie?”, *Regards de l'observatoire franco-russe*, París, 2020.

*Doctorando en Geografía en el Instituto Francés de Geopolítica (Universidad de París VIII). Traducción: Andrea Romero

¿Vacaciones?

Ediciones

desde abajo

libros

para

viajar

a donde quieras:

El motor

que abre la puerta
por donde se libera
tu mente



Nadie sabe con precisión cuántos buques posee la flota pesquera china. Pero no existe duda alguna de que esta armada, que rastrilla el conjunto del planeta, supera a todas las demás, tanto en su envergadura como en su radio de acción. Desempeña a los ojos de Pekín un papel crucial, tanto para alimentar a su población como para colocar a sus peones en el tablero geopolítico.

“Realmente no están bromeando”

Misterios y poderío de la flota pesquera china

por Ian Urbina*, enviado especial

Para cualquiera que navegue en altamar, el poderío y la temeridad de la flota pesquera china se imponen como una evidencia. Embarcados en 2019 durante una semana en una unidad de la policía marítima de Gambia que patrulla a más de 150 kilómetros de las costas, vimos cómo se inspeccionaba a quince buques extranjeros acusados de violaciones al derecho laboral y de pesca ilegal. Todos, excepto uno, eran chinos. Poco tiempo antes, ese mismo año, durante un mes en un palangrero que había dejado el puerto chileno de Punta Arenas para ir a pescar merluza austral en el Océano Antártico, no nos cruzamos prácticamente con nadie en nuestra ruta, salvo cerqueros (1) chinos, aproximadamente una docena, en un estado de avanzado deterioro.

En agosto de 2020, más de 340 buques pesqueros chinos fueron detectados en las inmediaciones de la reserva marina de las Islas Galápagos, frente a las costas de Ecuador, cuya fauna excepcional figura en el patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) (2). La mayoría de ellos habían sido alquilados por armadores vinculados a actividades de pesca ilegal, tal como lo reveló el Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) (3). Ya en el verano boreal de 2017, se había visto merodear en torno a ese santuario marino a una flotilla china de dimensiones casi semejantes. Un barco había sido capturado con alrededor de 300 toneladas de pesca ilegal a bordo, entre ellas especies amenazadas, como el tiburón martillo.

Desencuentro nocturno en el mar de Japón

El descubrimiento reciente de ochocientas traineras chinas presentes ilegalmente en aguas norcoreanas podría explicar la desaparición de más del 70 por ciento de los calamares que antes vivían allí en grandes cantidades (4). Enviando a esas aguas prohibidas una armada de buques industriales, China no sólo empobreció los recursos pesqueros; expulsó también sin miramientos a los pequeños barcos norcoreanos que navegaban allí. Esta presencia naval, otrora invisible, pudo ser detectada por el sitio Global Fishing Watch,

gracias a una nueva tecnología satelital. Consultado sobre esta revelación por la cadena NBC, el ministro de Relaciones Exteriores chino no lo confirmó ni lo desmintió. Se limitó a responder que su país hacía “respetar estrictamente” las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíben la pesca extranjera en aguas norcoreanas, y castigaba “sin descanso” las prácticas ilegales.

Animados por su superioridad numérica y por los agentes de seguridad armados que viajan a veces con ellos, los buques chinos se muestran a menudo agresivos con sus competidores o cualquier embarcación considerada una amenaza. Lo sufrimos en mayo de 2019. Deseando constatar con nuestros propios ojos su presencia ilegal en el Mar del Japón, nos embarcamos, a cambio de una retribución, en un barco surcoreano de pesca de calamar. El capitán era un hombre bajito, enjuto, de aproximadamente 70 años, de ojos muy hundidos y piel apergaminada. La mañana de la partida, todos los miembros de la tripulación contratados para la ocasión desertaron. Explicaron que no querían involucrarse en un informe periodístico sobre Corea del Norte ni acercarse demasiado a pescadores chinos. El capitán dijo estar dispuesto a continuar la expedición con la asistencia de su segundo, en la medida en que aceptáramos condiciones de viaje un poco más caóticas y menos confortables que lo habitual, y que estuviéramos dispuestos a ayudarlo cuando nos lo solicitara.

Sobre las condiciones de viaje, no nos había mentido. Nuestra embarcación –un barco de madera de unos veinte metros de eslora– no había podido ser limpiada desde su última salida al mar. Un fuerte olor a carnada podrida flotaba en el puente, al que los desechos de la pesca anterior tornaban tan resbaladizo como una pista de patinaje, y los sectores reservados a la tripulación estaban cubiertos de basura. Para colmo, el motor se detuvo cuando nos encontrábamos a varios cientos de kilómetros de la costa, y no fue sino al cabo de un angustiante suspenso de dos horas que pudimos reanudar el viaje.

La primera noche, apenas comenzó a oscurecer, nuestro radar nos señaló la proximidad de un barco. Acelerando la

velocidad, logramos alcanzar lo que resultó ser no uno, sino una veintena de buques, que avanzaban en fila india en dirección a las aguas territoriales norcoreanas ignorando las resoluciones de la ONU. En todos ellos flameaba la bandera china, y ninguno había encendido su transpondedor, tal como lo exige sin embargo la reglamentación surcoreana.

Tras aproximadamente cuarenta y cinco minutos de observación, a lo largo de los cuales grabamos videos y registramos los números de identificación de los barcos, decidimos enviar un dron por encima de ellos para verlos más de cerca. La reacción china no se hizo esperar. Uno de los capitanes hizo sonar su sirena de niebla y parpadear sus luces de navegación, antes de desviar súbitamente su trayectoria para dirigirse hacia nosotros. Mientras manteníamos nuestro rumbo, siguió acercándose. Finalmente, cuando estuvo a menos de diez metros, nuestro capitán cambió de rumbo rápidamente para evitar la colisión.

Lo que fue suficiente para el viejo capitán. Considerando demasiado peligroso permanecer mucho más tiempo, dio media vuelta en dirección al puerto. Durante las ocho horas que duró el trayecto, parecía agitado y se mantuvo asombrosamente silencioso, salvo para murmurar de vez en cuando: “Realmente no bromean...”. Durante ese tiempo, los pescadores chinos, sin alterarse, continuaron su ruta hacia las aguas norcoreanas.

Subsidiando masivamente su pesca, China dio origen a una flota monumental y poderosa, capaz de sacar provecho de la debilidad de las reglamentaciones para desarrollarse al margen de todo control. Pero también infundió a sus marinos una ambición, una voluntad y una audacia que muy pocos Estados –y mucho menos sus capitanes de pesca– osan o pueden cuestionarles.

¿Para qué un despliegue semejante? Para China, se trata primero de colocar a sus peones en el tablero mundial y garantizar su seguridad alimentaria. Frente a las costas de África Occidental y de la Península Arábiga, pudo ocupar el lugar dejado vacante por la marina de guerra estadounidense e intensificar su actividad pesquera. Paralelamente, en el Mar de la China Meridional y a lo largo del Paso del Noreste,

reivindica la soberanía sobre corredores de navegación muy preciados, así como sobre yacimientos submarinos de petróleo y gas. “Con una flota tan gigantesca y tan agresiva, China claramente maneja las riendas”, comenta Greg Poling, director de Asia Maritime Transparency Initiative en el seno del Center for Strategic and International Studies, en Washington. E intimidada: son pocos los países que se atreven a responder cuando sus barcos incursionan en sus aguas territoriales.

China debe también alimentar a sus 1.400 millones de habitantes. Como la mayoría de los stocks de pescado que bordean sus costas se redujeron por efecto de la sobrepesca y la industrialización, sus buques se ven obligados a aventurarse cada vez más lejos para llenar sus redes. Según un reciente informe del Stimson Center, un think tank estadounidense que trabaja en cuestiones de seguridad, los aproximadamente 2.600 buques de pesca de altura informados por China (5) representan el triple del conjunto de las flotas de los cuatro países que se ubican detrás de ella, a saber, Taiwán, Japón, Corea del Sur y España. Y se trata de una estimación baja: en un informe de junio de 2020, el Overseas Development Institute británico estima la flota en alta mar china en 16.966 buques (contra 13 a mediados de los años 1980). Una potencia que, según Poling, debe todo a los subsidios: “Sin este maná, no sólo la flota sería infinitamente más modesta, sino que no podría estar presente en el Mar de la China Meridional”.

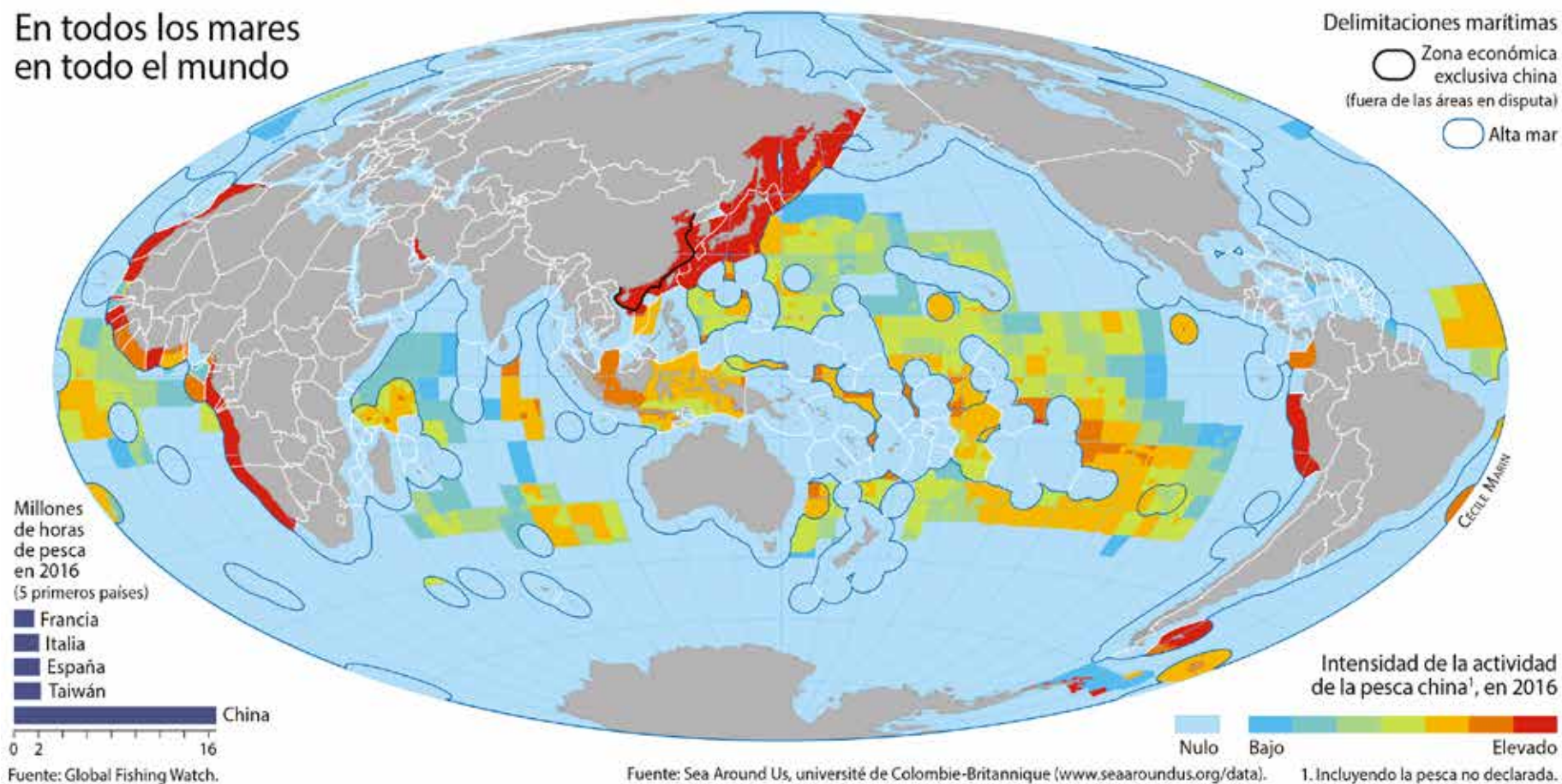
En un correo electrónico, Tabitha Grace Mallory, profesora de la Universidad de Washington y especialista en políticas pesqueras chinas, nos detalla los sistemas de ayuda implementados estos últimos veinte años por Pekín. En 2018, sus subsidios representaron 7.200 millones de dólares, sobre un monto total estimado en 35.400 millones a nivel mundial. Según Mallory, estos fondos tienen un efecto globalmente “nocivo”, en la medida en que sirven para extender la flota en lugar de reducirla, especialmente a través de subsidios para la compra de combustible y la puesta en servicio de barcos adicionales. Inversamente, sólo una muy pequeña fracción financia el desmantelamiento de los barcos al final de su vida útil.

Especies en peligro de extinción

Los subsidios contribuyen también a la renovación de los motores y la adquisición de cascos de acero más duraderos para las traineras. Cubren además una parte de los costos que ocasiona el estacionamiento, en los mismos lugares de pesca, de agentes de seguridad armados y de buques hospitales con el fin de que los capitanes puedan permanecer en el mar mucho más tiempo. Finalmente, los marinos chinos gozan de la información suministrada por el gobierno para localizar las zonas más abundantes en peces.

Para el investigador Daniel Pauly, director del proyecto Sea Around Us del Institute for the Oceans and Fisheries de la Universidad de Columbia Británica, el apoyo estatal “desempeña un papel importante en el agotamiento de los recursos pesqueros, ya que permite mantener en operación buques que deberían ser desguazados”. Un punto de vista compartido por numerosos expertos: mientras la sobrepesca se vuelva posible con ayudas financieras, el objetivo de una pesca sustentable seguirá siendo inalcanzable. Entre los stocks de pescado comercializados

En todos los mares en todo el mundo



que controla la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 90 por ciento se ven ya afectados por la sobrepesca, e incluso se agotaron –es decir que ya no tienen la capacidad de regenerarse–. Es el caso particularmente de las diez especies más consumidas en el mundo.

China está lejos de ser el único país que subsidia a su flota a fuerza de millones. Más del 50 por ciento de las actividades de pesca mundiales no serían rentables en su escala actual sin el apoyo estatal del que gozan (6). En el campo de la pesca en altamar –esas zonas oceánicas que no están bajo la jurisdicción de ningún Estado–, Japón es el más generoso, con 841 millones de dólares de subsidios, es decir, aproximadamente el 20 por ciento del total mundial. España, por su parte, representa el 14 por ciento de los subsidios a la pesca en altamar distribuidos en el mundo, seguida de China (10%), Corea del Sur y Estados Unidos.

Pero en lo que respecta al número de buques en actividad, China supera en gran medida a todos los demás países. En 2014, podía jactarse de realizar más del 35 por ciento de la pesca mundial declarada en altamar. En comparación, Taiwán, con 593 buques, representaba aproximadamente el 12 por ciento de esa pesca, y Japón menos del 5 por ciento, con 478 buques.

Además de vaciar progresivamente los océanos de peces, todos estos subsidios conducen simplemente a poner demasiados barcos en el mar. Lo que genera una sobrecapacidad de pesca y una competencia malsana entre las flotas nacionales, causando conflictos territoriales. La pesca ilegal se ve así exacerbada, ya que los capitanes buscan desesperadamente nuevos lugares de pesca menos frecuentados. Peter Thomson, enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Océanos, utiliza una imagen impactante para describir la situación: “Es algo así como pagarles a ladrones para que vayan a desvalijar la casa de su vecino”.

Según el índice establecido en 2019 por Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, una consultora británica especializa-

da en pesca y acuicultura, China muestra los peores resultados mundiales en materia de pesca ilegal, no declarada y no regulada. Sin embargo, comienza a dar algunos tímidos pasos en la dirección correcta –aun cuando los ecologistas y los expertos sigan siendo escépticos–.

Desde hace algunos años, frente a la presión de los defensores de los océanos o de gobiernos extranjeros, Pekín decidió particularmente controlar de manera más estricta a su flota. Así, en 2016, se promulgó un plan quinquenal tendiente a limitar a tres mil el número de buques de pesca de altura de aquí a 2021; sin embargo, es difícil apreciar la concreción de este objetivo en ausencia de datos gubernamentales confiables sobre el número de barcos en actividad. Por otra parte, en junio de 2020, las autoridades chinas anunciaron haber prohibido a sus buques la captura de calamares en algunas aguas territoriales de América del Sur entre julio y noviembre, con el fin de que las poblaciones puedan regenerarse. Es la primera vez que China anula una temporada de pesca por iniciativa propia. “Pienso que el gobierno chino tiene realmente la intención de reducir su flota de pesca de altura –declara Pauly–. En cuanto a saber si tiene el poder de hacer cumplir sus decisiones, es otra historia. Dudo que tenga más autoridad sobre sus barcos que navegan en altamar que la que tienen los países occidentales sobre los suyos.”

Otro campo de acción: el pescado de criadero. Con una clase media china en rápida expansión, la demanda de frutos del mar explota. Para reducir su dependencia de la captura de peces salvajes, China otorgó más de 250 millones de dólares de subsidios al sector de la acuicultura entre 2015 y 2019. Pero esta medida plantea un problema: para engordar a sus stocks, la mayoría de los criaderos utilizan harina de pescado, una mezcla rica en proteínas fabricada esencialmente a base de pescado salvaje capturado en el exterior o en aguas internacionales. Y éstos la consumen en enormes cantidades: antes de llegar a los puestos de venta, un atún de criadero habrá engullido tal vez más de quince veces su peso en forma de

harina. Las asociaciones de protección de los océanos dieron la voz de alarma. Esta avidez por la harina de pescado, que acelera el agotamiento de los recursos pesqueros, sólo puede fomentar la pesca ilegal y desestabilizar las redes tróficas marinas, privando a los habitantes de los países pobres de una fuente de proteínas indispensable para su subsistencia. “Capturar todos esos peces salvajes para satisfacer la creciente demanda de pescado de criadero es absurdo –sostiene el ex profesor Enric Sala, devenido explorador de la National Geographic Society–. Esta pesca podría servir para alimentar directamente a las poblaciones, con un impacto mucho menos devastador en la fauna submarina.”

La suerte del krill, un alimento básico para las ballenas, también preocupa a los ecologistas. En 2015, las autoridades chinas anunciaron su intención de aumentar su pesca de krill en el Océano Antártico de 32.000 toneladas a 2 millones, con el fin de satisfacer sus necesidades de harina y aceite de pescado. Sin embargo, se comprometieron a no tocar las zonas “ecológicamente frágiles”.

La sobrepoblación naval no hace más que degradar el medio ambiente a través de la sobrepesca y el agotamiento de los stocks; se ve además acompañada por una intensificación de las rivalidades en torno a los lugares de pesca, conduciendo a tensiones diplomáticas, e incluso a violentas confrontaciones. En 2016, la Guardia Costera de Corea del Sur abrió fuego sobre dos barcos chinos que amenazaban con chocar a sus patrulleros en el Mar Amarillo –en el mismo lugar donde, un mes antes, una lancha surcoreana se había hundido tras un ataque similar–. Ese año, Argentina hundió también un buque chino al que acusaba de pescar ilegalmente en sus aguas territoriales. Otros países, como Indonesia, Sudáfrica o incluso Filipinas, vivieron conflictos similares, la mayoría de las veces con barcos que pescaban calamares –especie que representa más de la mitad de la pesca de la flota china en altamar–.

Entre los innumerables buques chinos que recorren los océanos, hay algunos que no sólo pescan, tal como lo explica

Poling, sino que integran “milicias civiles” enviadas por el gobierno a zonas de conflicto marítimo con fines de vigilancia, pero también, llegado el caso, para intimidar y destruir barcos pesqueros o de policía extranjeros. Para ello, Pekín dispone de un programa específico de incentivos financieros tendiente a alentar a los pescadores a que naveguen en el Mar de la China Meridional con el fin de reforzar allí sus posiciones. Además de las ventajas de las que gozan sus colegas pescando en altamar, estos últimos cobran un adicional en efectivo para compensar el hecho de que la zona sea relativamente poco lucrativa.

Una milicia de más de doscientos barcos permanece así en torno a las Islas Spratly, una región rica en pescado, pero también, potencialmente, en petróleo y gas natural, que se disputan cuatro países: China, Filipinas, Vietnam y Taiwán. A juzgar por las imágenes satelitales, la flota china pasa allí la mayor parte de su tiempo fondeada, en formación cerrada.

“Si no les pagaran para hacerlo, a los pequeños pescadores [chinos] nunca se les ocurriría ir allí”, afirma Poling. Su presencia en todo caso aceleró la disminución de las poblaciones de peces en torno al archipiélago y provocó numerosas escaramuzas con barcos extranjeros, ofreciéndole a China una excusa fácil para militarizar la zona. ■

1. Se trata de barcos que pescan con cerco, una red que se arrastra en los fondos arenosos.
2. “Some 340 Chinese vessels fishing off Galapagos Islands protected waters”, MercoPress, 10-8-20.
3. “Strings attached: Exploring the onshore networks behind illegal, unreported and unregulated fishing”, C4ADS, Washington, DC, 2019.
4. “The deadly secret of China’s invisible armada”, NBC News, 22-7-20.
5. Buques pesqueros en alta mar, más allá de las 200 millas marinas que delimitan las zonas económicas exclusivas.
6. Enric Sala et al., “The economics of fishing the high seas”, Science Advances, Vol. 4, N° 6, Washington, DC, junio de 2018.

*Periodista. Dirige The Outlaw Ocean Project, una plataforma de investigación sobre cuestiones ambientales y derechos humanos en el mar. Autor de *La Jungle des océans : crimes impunis, esclavage, ultraviolence, pêche illégale*, Payot, París, 2019.

Para sus seguidores, el Club de Fútbol Liverpool, campeón coronado de Inglaterra en junio de 2020, es el emblema de una ciudad orgullosa de su singularidad, a la vez que popular, abierta al mundo y desafiante para el resto del país. Los propietarios americanos del club, que se hicieron cargo de él hace diez años, han cultivado cuidadosamente esta imagen, que ahora atrae más allá de los límites de la ciudad portuaria.

“El éxito del club se basa en el socialismo”

En Liverpool, el fútbol como crisol de la identidad

por Quentin Guillon*, enviado especial



Hernando Vergara, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

Es un momento de comunión famoso en todo el mundo. Antes de cada partido como local del Liverpool Football Club (LFC), los hinchas, entre ellos los del “kop”, tribuna donde se reúnen los más fervientes, entonan el canto *You’ll Never Walk Alone* (“Nunca caminarás solo”), símbolo de una devoción total a un equipo que figura entre los gigantes del Reino Unido y de Europa. En la era del rey-dinero y de la globa-

lización de la pelota, el LFC, en manos del conglomerado estadounidense Fenway Sports Group (FSG), pretende encarnar la singularidad de una ciudad respecto del resto de Inglaterra. También reivindica la síntesis entre objetivos financieros y pasión de los fans, gracias a la adhesión a principios “socialistas”.

Campeón de Europa en 2019 y vencedor en junio de 2020, por primera vez en treinta años, del campeonato de Inglate-

rra, el club no deja de hacer referencia a Bill Shankly, su ilustre ex entrenador (entre 1959 y 1974), homenajeado con su estatua en la entrada del estadio de Anfield, el antro del LFC (1). Conocido por su famosa declaración: “Algunos creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho más importante que eso”, Shankly había expuesto su visión a sus jugadores: “Que cada uno trabaje para alcanzar el mismo objetivo y que cada uno

comparta el éxito si es alcanzado: ese es el socialismo en el que creo. Así veo al fútbol y a la vida”. Unos cincuenta años después, el CEO del club, Peter Moore, ofrecía el mismo mensaje en las páginas del diario español *El País*: “El éxito de Liverpool se basa en el socialismo” (2). ¿Realidad u oportunismo por parte del representante de FSG, tercera empresa del negocio deportivo del mundo según Forbes, conglomerado que tiene un volumen de negocios de seis mil seiscientos millones de euros (dos mil doscientos millones de los cuales provienen del LFC)? La misma pregunta podría hacerse respecto a su entrenador, Jürgen Klopp, cuyo salario anual alcanza los once millones trescientos mil euros y que afirma su adhesión a los valores “de izquierda”, y jura que no votará “jamás a la derecha”.

Para comprender la particularidad del LFC hay que sondear “el corazón ‘scouse’ que late en las noches de partidos de la Liga de Campeones”, como nos lo explica Joe Blott, a la cabeza del Spirit of Shankly, el más importante grupo de hinchas. Liverpool tiene una historia tumultuosa. La ciudad se enriqueció durante dos siglos gracias a la esclavitud (“Es una desgracia, pero lo reconocemos”, dice Blott); el poder de su puerto construyó su prosperidad. El scouse, un guiso vigorizante (papas, carne de res y zanahorias cocidas a fuego lento) derivado del lapskaus noruego, fue introducido por marineros escandinavos a fines del siglo XVIII. Sus homólogos locales se harán llamar luego scousers, plantando la base de la identidad local. Para Peter Millward, sociólogo que vive en la ciudad donde nacieron los Beatles, “Liverpool se ubica a mitad de camino entre la cultura insular británica y las múltiples influencias de sus movimientos de población. La ciudad se ha vuelto cosmopolita”. Él evoca la inmigración irlandesa –que hizo de la ciudad un bastión católico en un país en gran medida protestante–, pero también galesa, escandinava, etc. El acento scouse, que retuerce los oídos del neófito, nació de esas múltiples influencias.

Liverpool fue violentamente golpeada por la crisis económica de los años 1970 y 1980. “Un informe de 1981 y hecho público veintiocho años más tarde afirmaba que el objetivo del gobierno de [la primera ministra] Margaret Thatcher era dejar morir la ciudad”, recuerda el sociólogo (3). La desindustrialización masiva provocó un aumento de la desocupación y la pobreza. Pero quedaban los “Reds” (el LFC), uno de los dos clubes de la ciudad con los “Blues” del Everton Football Club (EFC). “Éramos los mejores de Europa. El fútbol era el único campo donde el gobierno de Thatcher no podía hacernos sufrir”, recuerda el emblemático defensor James “Jamie” Carragher. El club vivió en ese entonces el período más glorioso de su historia, en el que logró once títulos de campeón de Inglaterra y cuatro Copas de Europa bajo la férula de John Smith, su presidente entre 1973 y 1990.

En 1989, el drama de Hillsborough

“El LFC nos salvó de la depresión”, afirma el historiador Frank Carlyle en una obra del investigador y especialista en fútbol Daniel Fieldsend consagrada al club y a la ciudad (4). El libro cita también al productor y escritor Dave Kirby, que decía en 1977: “El club representa quiénes somos, cuáles son nuestras esperanzas, nuestros sueños, y permite que la mayoría de nosotros pase el fin de semana, se olvide de la

desocupación, de la fábrica, de la mierda cotidiana. Nosotros existimos para él y él existe para nosotros". Veinte años más tarde, la hazaña de un jugador también quedará en las memorias. En 1997, cuando los estibadores estaban en huelga y luchaban para sobrevivir, Robbie Fowler celebraba su gol número ciento trece, a los 21 años, mostrando bajo su camiseta una remera con esta inscripción: "Apoyen a los quinientos estibadores de Liverpool despedidos en septiembre de 1995". Su acción permitió mediatizar el conflicto; Fowler sigue siendo elogiado por ese gesto.

Más allá de la crisis económica, una tragedia aún une a los habitantes de la ciudad. El 15 de abril de 1989, durante la semifinal de la Copa de Inglaterra, Liverpool desafiaba al Nottingham Forest en el estadio de Hillsborough, en Sheffield. Con el partido ya empezado, miles de espectadores atrasados se precipitaron al estadio. Noventa y seis de ellos, entre los cuales niños, murieron aplastados contra las rejas o pisoteados. Cuatro años antes, ya, el LFC había sido cuestionado por el comportamiento violento de sus hinchas en la estampida mortífera del Heysel, en Bélgica, el 29 de mayo de 1985, durante la final de la Copa de Europa de los clubes campeones, que disputaba con la Juventus de Turín: 39 muertos y 450 heridos. Una vez más, se hallaba en el banco de los acusados. Algunos días más tarde, el diario *The Sun* titulaba: "The Truth" ("La verdad") y, retomando la versión de la policía, acusaba a los hinchas de ser los únicos responsables de lo sucedido. El diario también expresaba tres acusaciones que resultarán mentirosas: "Hinchas [de Liverpool] orinaron sobre valientes policías [que intentaban reanimar a los heridos] [...] vaciaron los bolsillos de las víctimas [...] impidieron que los socorristas le hicieran respiración boca a boca a las víctimas".

En 2009, durante la conmemoración del drama de Hillsborough en Anfield, el diputado Andrew Burnham, secretario de Estado de Cultura, Medios y Deportes, dio un discurso en nombre del gobierno laborista de Gordon Brown. Espontáneamente, los cerca de 28.000 espectadores se levantaron y gritaron: "Justice for the ninety-six!" ("¡Justicia para los noventa y seis!"). Iniciada a continuación, una investigación independiente disculpó al LFC en 2012 y puso de manifiesto la aplastante responsabilidad de la policía, culpable sobre todo por haber bloqueado las rejas, así como las mentiras difundidas por *The Sun*, por otros medios de comunicación y por el personal político.

El drama de Hillsborough contribuyó a reforzar la especificidad de una ciudad que los torios no dirigen desde 1972. Estos últimos años, las tribunas también se llenaron de cánticos de apoyo al ex dirigente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. "Ningún grupo de hinchas los promovió. Eran espontáneos", asegura Blott. "La injusticia nos hizo así. Algunos habitantes de Liverpool ven incluso a su ciudad como un enclave independiente en el seno del Reino Unido. Hay que recordar que la gran huelga de los estibadores, en 1911, ya nos había unido", recuerda por su parte Ian Byrne, hinchas inveterado del club y diputado de la circunscripción vecina de West-Derby desde 2019. Así, "Nosotros no somos ingleses; somos scousers", claman a intervalos regulares banderas y tifos (5) en las tribunas del estadio. "Liverpool es nuestra propia pequeña República", escribe también Fieldsend.



Hernando Vergara, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

El LFC, por lo tanto, es el campeón de un país cuyos hinchas aborrecen a los dirigentes, a quienes acusan de haber maniobrado por la decadencia de la ciudad. En agosto de 2019, las tribunas de los "Reds" incluso silbaron el himno God Save the Queen. "Un gran número de hinchas quieren que pierda el equipo nacional", confirma el universitario (e hinchas) Joel Rookwood.

En 2007, dos inversores estadounidense repletos de deudas, George Gillett y Tom Hicks, compraron el club al hombre de negocios y filántropo Peter Moores, que lo poseía desde 1991. Como reacción, algunos hinchas formaron el club Spirit of Shankly. La movilización desembocó en la partida de los propietarios sospechosos y en la venta del club a FSG. A imagen de otros equipos, como el rival de siempre, Manchester United, o el trío londinense Chelsea, Arsenal y Tottenham, el LFC se ocupó de hacer venir al estadio muchos más turistas extranjeros atraídos por su aura. Los precios de las entradas aumentaron; las hileras del estadio se aburguesaron (6). El 6 de febrero de 2016, Liverpool gana dos a cero frente a Sunderland. En el minuto setenta y siete, alrededor de diez mil fans abandonan el estadio de común acuerdo. ¿La razón? El club llevó el precio de las entradas a 77 libras esterlinas (85 euros). El aumento es menos marcado que en los estadios de sus rivales, pero los hinchas están indignados. Muchos de ellos trabajan a tiempo parcial o se encuentran en una total precariedad: semejante aumento es inaceptable para ellos.

Impulsada por el Spirit of Shankly, la movilización prosigue y se extiende a otros clubes británicos, y logra que el precio de las entradas para los partidos de visitante sea fijado en 30 libras esterlinas mientras que, en Liverpool, centenares de entradas por partido en su sede sean vendidas a 10 libras esterlinas a los fans de la región.

No obstante, los hinchas admiten que el dinero es indispensable para la victoria. "Los fans quieren los mejores jugadores. Desgraciadamente, la economía del fútbol es tal que hay que pagarlos caro. En 2010 estábamos cerca del descenso. Desde la llegada del FSG, todos ganamos", admite Byrne. Por su parte, los dirigentes del LFC hacen algunas concesiones, porque comprendieron su interés en preservar el corazón scouse, ya que los fans locales están en el origen del excepcional ambiente de las veladas de los grandes partidos. Es una muy buena publicidad para vender entradas en el exterior, pero también diversas prestaciones: estadías en un gran hotel, visita guiada de la ciudad, etc. En asociación con el club, sociedades como Virgin proponen por 95 libras esterlinas (alrededor de 105 euros) un conjunto de prestaciones que comprenden una visita completa de Anfield, una comida en un palco del estadio, una sesión de preguntas y respuestas y fotos con antiguas glorias del club, etcétera.

Otra confrontación: en 2019, los propietarios del club buscan comercializar la marca "Liverpool" y apropiarse de los derechos de algunos cánticos populares. La Oficina de la propiedad intelectual, pro-

bablemente influida por la movilización hostil a esta iniciativa, pone su veto. Para Blott, el matrimonio forzado entre el capitalismo y el "espíritu socialista" del club y de su público está llamado a durar: "Los propietarios del FSG siempre serán capitalistas que harán ganancias. Y los hinchas siempre tratarán de impedirlo, o de asegurarse de que lo hagan de la mejor manera posible. Los fans son los guardianes del templo".

Cuando Mohamed Salah derriba el racismo...

A pesar de su singularidad, Liverpool no escapa a las tensiones que crispan al Reino Unido. En 2016, la ciudad votó en un 58 por ciento por mantenerse en la Unión Europea, pero el barrio de Anfield, que figura entre los diez más pobres de Inglaterra, optó en un 52 por ciento por el Brexit. Por otra parte, los actos de racismo antimusulmán están en alza desde hace algunos años en Liverpool –donde viven alrededor de 25.000 musulmanes (sobre unos 500.000 habitantes)– como en el resto del país. Sin embargo, desde la llegada en 2017 del prolífico goleador egipcio Mohamed Salah, esos delitos disminuyeron un 18,9% en la ciudad y en la región de Merseyside, como lo mostró un estudio publicado en 2019 (7). Los investigadores también pasaron por el tamiz 15 millones de tuits y señalaron que los fans de Liverpool hostiles a los musulmanes habían disminuido a la mitad respecto de aquellos de otros clubes ingleses. Una canción del "kop" está incluso dedicada al jugador: If he scores another few, than I'll be Muslim too ("Si hace otros goles más, yo también me hago musulmán"). En 2015, Byrne ya había firmado una asociación entre los Fans Supporting Foodbanks –que organizan vastas colectas de alimentos para los menesterosos antes de los partidos– y varias mezquitas de la ciudad. En 2018, en ocasión de la Copa del Mundo, el partido entre Rusia y el Egipto de Mohamed Salah fue retransmitido en la mezquita Abdullah Quilliam. "Muchos venían por primera vez –se acuerda el representante–. La acogida fue muy calurosa. El fútbol es para nosotros un medio de integración. Era nuestra mejor acción, y una manera de hacer pedazos las falsas ideas difundidas por los medios de extrema derecha." ■

1. Para conocer mejor la historia del club y su actualidad reciente, véase el número especial "In red with Liverpool", *France Football*, Boulogne-Billancourt, 5-11-19.
2. Diego Torres, "Peter Moore: 'El éxito del Liverpool se basa en el socialismo'", *El País*, Madrid, 9-10-19.
3. "Regional Policy. Inner city Policy: creation of urban development corporations to assist in regeneration of Liverpool and London Docklands", 30-7-1979-7-8-1981, <https://discovery.nationalarchives.gov.uk>. Véase también Simon Parker y Rowland Atkinson, "Disorderly cities and the policy-making field: the 1981 English riots and the management of urban decline", *British Politics*, Vol. 15, N° 2, Londres, junio de 2020.
4. Daniel Fieldsend, Local: *A Club and Its City: Liverpool's Social History*, 2019.
5. Animaciones visuales realizadas por los hinchas de un equipo.
6. Véase Olivier Pironet, "Les pauvres chassés des stades", en "Royaume-Uni, de l'Empire au Brexit", *Manière de voir*, N° 153, Paris, junio-julio de 2017.
7. Ala' Alrababa'h, William Marble, Salma Mousa y Alexandra Siegel, "Can exposure to celebrities reduce prejudice? The effect of Mohamed Salah on Islamophobic behaviors and attitudes", *Immigration Policy Lab*, Stanford-Zurich, julio de 2020.

*Periodista.

Traducción: Víctor Goldstein

Detrás de su fachada moderna, Corea del Sur sigue siendo una sociedad muy patriarcal, en la que las mujeres sufren múltiples e insidiosas discriminaciones. Harta de esta situación, una nueva generación de feministas marca la hora de la revuelta, y avanza.

Una nueva generación de feministas

La rebelión de las surcoreanas

por Frédéric Ojardias*

El 11 de abril de 2019, los jueces de la Corte Constitucional de Corea del Sur emitieron un veredicto histórico: por siete votos a favor y dos en contra, dictaminaron que la penalización del aborto, en vigor desde hacía décadas, era ilegal. Las mujeres surcoreanas ya no necesitan esconderse; una gran victoria para las asociaciones feministas. “El resultado de años de lucha”, proclamaba una activista, con la voz alterada por la emoción, al anunciarse la sentencia.

En los últimos años se alcanzaron otros avances significativos. El movimiento #metoo, que llegó tarde al país, tuvo un impacto considerable. A principios de 2018 una fiscal, Seo Ji-hyun, acusó públicamente a su superior de manosearla y relató cómo su carrera quedó destruida después de que se atreviera a protestar. Otras siguieron su ejemplo, rompiendo a su vez la ley del silencio. Dirigentes políticos, cineastas, artistas, académicos: estallaron varios casos resonantes que hicieron saber a todos que las agresiones sexuales, otras veces calladas, ya no lo serían más.

A raíz de estas revelaciones, muchas mujeres que aún dudaban se unieron al movimiento, se mostraron en público y alzaron la voz. En el verano de 2018, Seúl fue el escenario de las más importantes manifestaciones feministas de la historia del país. Al grito de “Mi vida no es tu película porno”, decenas de miles de mujeres denunciaron la inacción de las autoridades ante la proliferación de cámaras ocultas, llamadas molka, colocadas en lugares públicos (baños, saunas) para filmarlas sin su conocimiento. Estos videos, así como otros sex tapes robadas, se difunden y venden en Internet, arruinando la vida de las víctimas. Se acusa a la policía y a la justicia de ser culpables de laxitud e indulgencia. Estas airadas manifestaciones condujeron, en agosto de 2019 y nuevamente en mayo de 2020, al endurecimiento de la ley que castiga los delitos sexuales en línea.

“Las protestas de 2018 fueron las primeras reuniones feministas a las que me atreví a asistir”, cuenta Seo Ji-eun, una periodista de 22 años. Porque, en Corea del Sur, incluso la palabra es tabú: llamarse “feminista” es provocar la ira de la familia, los colegas masculinos, los internautas... “En ese entonces me escondía, temiendo que me identificaran como una militante y me atacaran. Pero las cosas están cam-



Hernando Vergara, sin título (Cortesía del autor)

biando.” El éxito de *Kim Ji-young, nacida en 1982* (1), una novela de Cho Nam-joo que vendió más de un millón de ejemplares, lo atestigua. Su heroína, una joven re-

cién casada, se ve agobiada por las expectativas de una sociedad ultrapatriarcal, así como por las humillaciones diarias e insidiosas impuestas a las mujeres.

Así, poco a poco van saltando ciertos tabúes. “Cuando en 1991 creamos nuestra organización, ni siquiera podíamos pronunciar las palabras ‘violencia sexual’ –recuerda Park A-reum, representante del Centro de Ayuda contra la Violencia Sexual-. Ahora las víctimas encuentran el valor para hablar. Es un cambio importante”. En mayo de 2016, cerca de la estación de metro de Gangnam de Seúl, una pasante de 23 años fue asesinada por un desconocido de 34 años, quien confesó haber querido matar a una mujer al azar. Este hecho desencadenó una ola de activismo. La escritora feminista Lee Min-kyung explica: “Esa víctima podría haber sido yo. Después de ese crimen, explotó el movimiento feminista”.

Madres solteras, son “depravadas”

Cuatro años más tarde, en abril de 2020, el primer partido feminista surcoreano se presentó a las elecciones parlamentarias. No obtuvo ningún escaño, pero su mera existencia fue una pequeña revolución. La Asamblea Nacional tiene ahora un 19 por ciento de diputadas. Un récord... para Corea del Sur. La vecina democracia taiwanesa tiene un 41,6 por ciento.

Bajo su apariencia moderna y ultracnectada, la sociedad sigue estando muy imbuida de la ideología neoconfuciana que sirvió de columna vertebral a la dinastía Joseon (1392-1910) y que promueve valores ferozmente patriarcales y conservadores: la mujer debe estar sometida toda su vida a su padre, a su marido y luego a su hijo mayor. Ciertamente, Corea del Sur es una democracia vigorosa que en 2017 pudo destituir a su presidenta Park Geun-hye –la primera mujer elegida para el cargo– tras meses de manifestaciones masivas y pacíficas (2). Pero sigue estando sorprendentemente atrasada en la cuestión de la igualdad de género. Y las surcoreanas siguen chocando con un techo de cristal demasiado bajo.

Las presiones sociales y familiares para que renuncien al tener su primer hijo son abrumadoras. La figura tradicional sigue siendo la hyobu, la nuera modelo que cocina, dirige la casa y se dedica a sus hijos, al marido y a los suegros –un destino con el que ya no sueñan las jóvenes surcoreanas modernas, ultra-diplomadas y abiertas al mundo–.

Las madres solteras sufren de lleno el impacto de este persistente patriarcado. Los nacimientos fuera del matrimonio son raros (1,9% del total en 2018, contra un 59,1 por ciento en Francia (3)) y son violentamente condenados. Las mujeres solteras embarazadas sufren una enorme presión para abortar o abandonar a sus bebés al nacer. “Incluso mis padres me aconsejaron que abandonara a mi hijo –dice Kim Do-kyung, presidenta de la Asociación Coreana de Familias de Madres Solteras (Korean Unwed Mothers Families Association, Kumfa)–. Nos ven como depravadas. Muchas pierden sus trabajos: conservar al bebé significa volverse más precaria. En la escuela, los padres piden a sus hijos que no jueguen con el mío. Murmuran a mis espaldas. No me invitan a las reuniones de padres de alumnos. En el certificado de nacimiento de mi hijo, figura: ‘nacido fuera del matrimonio’. Fue etiquetado desde el primer día.”

Joven madre de una hija de 14 años y miembro de la asociación, Jeong Su-jin añade: “Cuando mi jefe se enteró de que estaba embarazada siendo soltera, me

despidió. Me dijo: 'No quiero a alguien como tú aquí'. Incluso mis colegas me señalaban con el dedo'. La Kumfa proporciona asistencia financiera y psicológica a esas madres, pero no recibe ningún subsidio. Muchas solteras están excluidas de facto de algunos programas municipales de natalidad. Rechazadas a menudo por sus propias familias, durante mucho tiempo fueron la presa de agencias de adopción internacionales sin escrúpulos, que las acogían antes de que dieran a luz y abusaban de su angustia para inducir las a abandonar a sus bebés. Este arraigado patriarcado explica por qué Corea del Sur, a pesar de ser rica e industrializada, sigue siendo la fuente de adopción de miles de niños en el exterior.

También influye mucho en el mundo del trabajo. Aunque las surcoreanas son las más instruidas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Oce), son las que tienen los trabajos más precarios y peor pagados. "La discriminación comienza en la entrevista de trabajo – explica Bae Jin-kyung, directora de la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Corea (Korean Women Workers Association)–. Es común que los reclutadores pregunten a una candidata si tiene un novio, si proyecta casarse o planea tener un hijo. Una vez en el cargo, se le confiarán tareas de poca responsabilidad." También será excluida de las *huesik*, esas cenas de empresa muy regadas (que a veces terminan en un burdel) utilizadas tanto para negociar contratos como para reforzar los lazos de un equipo o facilitar los ascensos. Para muchos empleadores, lo más sencillo es evitar contratar mujeres, porque podrían dejar la empresa tan pronto tuvieran su primer hijo. En 2018 tres de los mayores bancos de Corea del Sur, Hana Bank, Shinhan Bank y Kookmin Bank, fueron condenados por falsificar sus concursos de reclutamiento: bajaban la puntuación de las candidatas para reclutar más hombres.

Las empleadas de ciertas profesiones muy feminizadas, como las enfermeras, suelen ser presionadas por sus superiores para no quedar embarazadas al mismo tiempo. "En otros sectores, simplemente despiden a las que están embarazadas. Existen leyes sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo, pero se las ignora", denuncia Bae Jin-kyung. Según ella, la crisis financiera asiática de 1997, al provocar un mercado laboral muy precario –bajo la égida del Fondo Monetario Internacional (FMI), que acudió al "rescate"– hizo que el incumplimiento del Código del Trabajo sea tácitamente aceptable. En cuanto al salario promedio de las mujeres, es apenas el 68,5 por ciento del de los hombres (4), la mayor diferencia entre las economías llamadas "desarrolladas". Sólo el 52 por ciento de las mujeres en edad de trabajar tienen empleo, en comparación con el 72,3 por ciento de los hombres, y la crisis del covid-19 afectó más a las mujeres con empleo (5). De los 15.000 altos directivos de las 500 principales empresas del país, tan sólo el 3,6 por ciento son mujeres.

Sin embargo, las surcoreanas tienen un nivel de educación más alto que sus homólogos masculinos: mientras que hace dos generaciones sólo sus hermanos eran enviados a la universidad, hoy en día el 75,7 por ciento de las mujeres entre 25 y 34 años tienen un título universitario, en comparación con el 64,1 por ciento de los hombres (6). Obligadas a elegir entre la carrera y los hijos, rechazando las ar-



Hernando Vergara, sin título (Cortesía del autor)

caicas expectativas de una sociedad que evoluciona con demasiada lentitud, muchas prefieren mantener su independencia y renuncian al matrimonio. Sólo el 22 por ciento de las mujeres consideran que el matrimonio es indispensable; hace diez años, eran el 47 por ciento (7).

Frustrados por la nueva competencia de las mujeres en el mundo del trabajo, muchos se niegan a ver que las expectativas de las mujeres han cambiado.

Como las surcoreanas se casan cada vez menos y más tarde, los nacimientos disminuyen. Para 2019, la tasa de fecundidad ha caído a 0,92 hijo por mujer: un récord (8). Los programas de fomento de la natalidad, aplicados desde 2005 por gobiernos tanto de derecha como de izquierda, costaron una fortuna –123.000 millones de euros en total– y demostraron ser espectacularmente ineficaces. ¿Estarían apuntando a un blanco equivocado? "No es una casualidad que la región con la tasa de natalidad más alta sea Sejong", señala Bae Jin-kyung. En la nueva capital administrativa, situada al sur de Seúl, la

mayoría de los residentes son funcionarios públicos; allí hay una mayor igualdad de género en el trabajo y una mayor seguridad laboral.

Misoginia de hombres jóvenes

Por su parte, Lee Min-kyung lamenta que el gobierno "persista en considerar la caída de la tasa de natalidad sólo desde una perspectiva económica, cuando se debe a una guerra de géneros". En efecto, las recientes victorias de las mujeres han provocado una radicalización del discurso misógino, en especial entre las generaciones más jóvenes. "Muchos hombres odian a las feministas. Nos insultan", cuenta Seo Ji-eun. El grupo de los 20 a 30 años es aun más virulento que el de los de 30 a 40 años; el 76 por ciento de estos jóvenes muestran abiertamente su oposición al feminismo (9).

En septiembre de 2019, la adaptación cinematográfica de *Kim Ji-young, nacida en 1982*, desató un torrente de odio e insultos en línea, exponiendo la nueva línea divisoria que recorre la sociedad. Los hombres que afirman ser víctimas de discriminación se agrupan en asociaciones masculinas y enarbolan su largo servicio militar obligatorio para justificar sus privilegios tradicionales. La controversia tiene consecuencias políticas: el presidente de centro-izquierda Moon Jae-in, cuyas ideas se perciben cercanas a las feministas, ha visto cómo el apoyo de los jóvenes varones votantes caía en picada.

El conflicto se agravó por el aumento del desempleo juvenil y el estancamiento de la economía. Muchos jóvenes varo-

nes no pueden ajustarse a normas sociales muy rígidas: para casarse, deben ganar lo suficiente para comprar una vivienda y pagar la escolarización de sus futuros hijos. Se sienten expoliados. Frustrados por la nueva competencia de las mujeres en el mundo del trabajo, muchos se niegan a ver que las expectativas de las mujeres han cambiado. "La joven generación de varones no es para nada diferente. Crecieron viendo a sus padres", reflexiona una estudiante de Seúl. Para las surcoreanas, la lucha puede ser todavía larga. ■

1. Cho Nam-joo, *Kim Ji-young, née en 1982*, NiL Éditions, París, 2020 (1ª ed.: 2016).
2. Véase Sung Il-kwon, "Révolution des bougies à Séoul", *Le Monde diplomatique*, París, enero de 2017.
3. "Population trend investigations", Kosistat (en coreano), mayo de 2020, y, para Francia, "Naissances hors mariage", Institut National d'Études Démographiques, París, marzo de 2020.
4. Ministerio de Empleo y Trabajo, Seúl, 2019, www.wage.go.kr.
5. Ock Hyun-ju, "At workplaces and home, female workers hit harder by Covid-19 outbreak", *The Korea Herald*, Seúl, 18-5-20.
6. "Diplômés de l'enseignement supérieur", Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Oce), www.oecd-ilibrary.org
7. "Till death do I stay single: South Korea's #NoMarriage women", AFP, 6-12-19.
8. "S. Korea's total fertility rate hits new low in 2019", *Yonhap News Agency*, Seúl, 26-2-20.
9. Jake Kwon, "South Korea's Young men are fighting against feminism", *CNN*, 24-9-2019.

*Periodista (Seúl). Autor del ensayo *Les Sud-Coréens*, Ateliers Henry Dougier, col. "Lignes de vie d'un peuple", 2017. Traducción: Teresa Garufi

Comunidad

**La Madres Comunitarias de Bogotá, Colombia:**

La maternidad entre la igualdad y la diferencia 1988-2000

Lola G. Luna, Andrea González Rojas
Ediciones desdeabajo, Bogotá
Mayo 2020, 236 páginas

El texto *La Madres Comunitarias de Bogotá, Colombia: la maternidad entre la igualdad y la diferencia 1988-2000* reviste gran relevancia por constituirse en una reflexión desde la reconstrucción histórica discursiva e interdisciplinaria, enfoque que permite el análisis de múltiples variables, sin desestimar que las estructuras económicas y sociales se entrelazan con la cultura política, incorporando símbolos, valores, análisis del discurso, prácticas culturales, entre otros componentes, del contexto histórico reconstruido.

Con mirada reposada y profunda, resultado de un largo trasegar de experiencias prácticas y teóricas, académicas e investigativas, las autoras Lola G. Luna y Andrea González Rojas, transfieren esta experiencia en la reconstrucción de los escenarios históricos de intervención de las Madres Comunitarias Colombianas (Mmcc) tomando como epicentro Bogotá.

Los antecedentes parten de los años 70 y 80, habida cuenta de las necesidades sociales por los modelos económicos instaurados en América Latina, entre ellos el neoliberalismo, que motivaron la industrialización y la reducción del Estado de Bienestar, los cuales exigen la vinculación de las mujeres al mercado laboral o informal. En una concordancia histórica, españolas y colombianas de los sectores populares se preguntan en palabras de las autoras: ¿quién cuida de nuestras criaturas solas? Pregunta que desencadena una serie de acciones comunitarias estratégicas, preámbulo de una larga historia de reivindicaciones sociales, económicas y políticas, muchas de las cuales todavía no se encuentran satisfechas.

En forma minuciosa, las autoras reconocen el gran trabajo y esfuerzo de las madres comunitarias en su larga lucha por más de 30 años, reflejado en la Ley 89 de 1988 –que nació en el contexto de la Constitución de 1886, y luego reformada por la Constitución de 1991– durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, quien reconoce la existencia de las madres comunitarias bajo la intermediación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por otra parte, los gobiernos sucesivos de los presidentes Gaviria, Samper y Uribe, a través de los cuales se han dado variaciones, unas más avanzadas que otras, no lograron el objetivo de lucha de las Mmcc de constituirse en asalariadas del Estado, en cuanto al reconocimiento de sus derechos.

Esta última situación, de forma realista, arroja claridad sobre la idiosincrasia de las Mmcc, en el transcurrir de estas décadas, como parte de los movimientos sociales, quienes sin proclamarse como feministas, han mantenido, de una u otra forma, su autonomía. Lola y Andrea reconocen, sin embargo, la incidencia del feminismo en los contenidos discursivos y prácticas de las Mmcc, que además se extienden a las luchas de las mujeres del mundo por sus derechos, reflejado en los movimientos feministas contemporáneos, como conocimiento situado, en donde la intersección incluye el análisis de género como categoría de análisis y como metodología.

De igual manera, las autoras examinan la importancia y la fuerza de estas luchas por el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) que ha incidido en que las mujeres alrededor del mundo conozcan las experiencias de opresión del patriarcado y su impacto en la pobreza y en la vida de las mujeres. Ello también ha permitido el posicionamiento de las Políticas Públicas para América Latina y, en el caso de Colombia, su identificación e inclusión en las últimas décadas en los Planes de Desarrollo y en los Consejos de Políticas Económica y Social (Conpes).

El libro señala nodos polémicos muy interesantes que se entrelazan y traen a la superficie las contradicciones entre el desarrollo de leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres y la persistente negación del reconocimiento, en este caso del trabajo de las Mmcc, al considerar que las madres comunitarias y su trabajo del cuidado constituye una extensión del rol reproductivo y doméstico. Esto que se ha convertido en una “política” estatal permanente que no reconoce su trabajo ni el rol de cuidadoras de generaciones de niños y niñas, así tampoco como el de “madres sustitutas” y educadoras.

Por otro lado, Lola G. Luna y Andrea González Rojas exponen cómo el feminismo, en su diversidad, aporta conceptos en el debate de la maternidad y la ética del cuidado, que se traducen en la identificación de discursos, como es el caso de las sufragistas conservadoras colombianas, y de políticos de los años 50, que defendieron el sufragio para las mujeres, soportes de la moral de la patria, fomentado por la Iglesia y el Estado. Y en este discurrir, las transformaciones históricas del concepto de maternidad y ciudadanía crecieron y se complejizaron en lo relacionado con el contexto.

La identificación del cuidado desde la ética, abre otras perspectivas de análisis, asocianando su importancia al valor desde la economía del trabajo de las madres comunitarias, para demostrar su valor como una de las bases de la subsistencia del Estado, ya que su fuerza de trabajo suplente las responsabilidades de este en la atención, cuidado, educación y nutrición de niños y niñas en edad preescolar, tanto en comunidades vulnerables como en zonas verdaderas en Colombia.

De igual sentido, se asocian las luchas de la Mmcc con la protesta sostenida por las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, quienes también han utilizado su rol materno para protestar por la desaparición de sus hijas e hijos por el régimen militar. Aquí relacionan el carácter político de la

maternidad social con la intervención del feminismo cívico,

Sus habilidades y luchas, unas veces exitosas y otras frustradas en alianzas estratégicas, con partidos políticos, asociaciones de “padres” de familia, acciones comunales, sindicatos, en medio de denuncias como la *Pizarra*, permitió llegar a Redes de Apoyo de Mujeres y cambiar su discursividad reivindicativa, lo que demuestra el rol transgresor de la Mmcc, la construcción de competencias en la agencia de mujeres, decantado en su accionar por formas de negociación y comprensión de sus luchas, en una perspectiva diferente, lo cual ha permitido su ingreso a “plataformas de negociación con el Estado”, en palabras de las autoras.

La intención del libro, fundamentado en visibilizar y posicionar las luchas de las Mmcc, se cumple con creces, entregándonos un texto histórico con gran contenido político que dialoga sincrónicamente con nuestro contexto y hechos sociales, mostrándonos las resistencias a modelos económicos y políticos patriarcales, que se resisten al cambio.

Finalmente, el libro se convierte en testimonio de la persistencia de luchas inacabadas, que convierten el enfoque feminista en una alternativa humanista con mirada diversa, sensata, no finalizada por fortuna; de lo contrario, no tendríamos la oportunidad de leer esta profunda reconstrucción de la lucha de las mujeres populares, con ausencia de pasiones, pero sí mostrando la presencia del distanciamiento como investigadoras de mediaciones ideológicas de un movimiento de mujeres que lucha a conciencia y que enfrenta una realidad social dura y constante, que persiste todavía en nuestros tiempos.

Rafaela Vos Obeso*

*Académica Investigadora. Candidata al Premio Nobel de paz: “Mil Mujeres y 1 Nobel de paz. 2005”. Ex Rectora de la Universidad del Atlántico - Barranquilla - Colombia. Barranquilla, octubre 13 de 2020.

LE MONDE
diplomatique
Edición Colombia
Una voz clara en medio del ruido

Un periódico indispensable para quien desee comprender a cabalidad la coyuntura mundial.

Suscripciones, consignar en:
Cooperativa Financiera Confiar, cuenta de ahorros N° 30-000492-6,
a nombre de Difundir Ltda.
Bancolombia, cuenta corriente N° 59230652041
a nombre de Tebeo Comunicaciones S.A.

Suscripción anual:
\$ 100.000



Comunidad de saberes para los últimos sobrevivientes del genocidio del caucho

Los hijos del jaguar y de la danta, los sáparas

El mito Sápara de origen, cuenta que un mono Aritiacu (1) aprendió con sus manos a usar una calabaza y se hizo hombre, y que sus hijos se casaron con las hijas de la danta, el jaguar, los pájaros y los peces. Más allá de la asombrosa semejanza con la *Ley de la evolución de las especies*, el mito revela una cosmovisión sabia, que había aprendido a relacionarse con un entorno natural extraordinariamente rico, pero al mismo tiempo extremadamente frágil, como el de la amazonia.

Abundantes datos históricos, en especial informes y diarios de misioneros jesuitas de la Provincia de Maynas, estudios posteriores como el de Paul Rivet, revelan que los Sáparas eran una etnia de origen Tupi Guaraní (2), con marcadas influencias de culturas andinas, que reunía alrededor de 100.000 personas en un amplio territorio que iba desde el río Napo al Pastaza y desde las estribaciones de los Andes al río Marañón. Su economía basada en la recolección, la caza, la pesca, había desarrollado una admirable agricultura itinerante, en un suelo que cuenta con una delgadísima capa vegetal alimentada por su propia biomasa y que, además, es muy ácida. Así, en armonía con la Pachamama (3), con la *madre naturaleza*, su cultura se desarrolló durante miles de años, hasta que llegaron los europeos.

La conquista, el inicio de la pesadilla

La conquista de América, el peor genocidio de la historia humana, cambió miles de años de relación armónica de los Sáparas y del resto de pueblos originarios con la naturaleza y marcó el inicio de la larga pesadilla de despojo y explotación que aún viven. Desde entonces, la economía colonial en toda América hispana se basó en el despojo de la tierra a sus legítimos propietarios, así como en el trabajo esclavo y semi-esclavo de los *primeros pueblos* y de los esclavos africanos: a través de la Doctrina, la Mita, la Encomienda y el Obraje. Conquista que además ligó al Continente a la economía mundial mediante el extractivismo del oro y la plata.

Después de la independencia del imperio español, la economía de lo que hoy es Ecuador, siguió fundamentada en la misma relación de explotación, mediante el concertaje (4), el huasipungaje (5), el yanaperismo (6) y el aparcerismo (7) para el trabajo agrícola; la explotación de los trabajadores en el área de las industrias y los agro servicios; y la continuación de la economía extractivista que buscaba para los países colonialistas tagua, palo de balsa, caucho, minerales y petróleo. A ello se han sumado en los últimos decenios las empresas transgénicas y las de monocultivo, que se asientan también sobre todo en territorios de los *primeros pueblos*.

Paralelamente, como en el resto de América, el proceso de mestizaje, que tuvo y tiene como raíz el desprecio racista a nuestras culturas originarias, ha sido mantenido férreamente como un útil mecanismo de dominación social y de despojo de sus territorios.

En este contexto, Ecuador ha pasado por diversas fases de acumulación: una colonial, otra primaria exportadora, un intento de la industrialización por sustitución de importaciones y en el siglo XXI una reprimarización modernizada. Estas fases han estado siempre vinculadas a alianzas de los grupos hegemónicos, gestándose dentro de estas diferentes interrelaciones regionales y diferentes formas de articulación con el mercado mundial (8).

El genocidio del caucho a nombre de la libre empresa y el progreso

A fines del siglo XIX, la naciente industria automotriz de Europa y Estados Unidos necesitaba caucho barato para fabricar llantas y para "optimizar sus



<https://hablemosdeculturas.com/zapara/>

ganancias" recurrieron al esclavismo, primero en la amazonia y luego en África y Asia. La historia de horror que vivieron los pueblos del bosque amazónico está ampliamente documentada en periódicos como *La Felpa* y *La Sanción* de Benjamín Saldaña en Iquitos, testimonios como *El Libro azul británico* de Roger Casement o novelas como *La vorágine* de Eustaquio Rivera. Los caucheros entraban a las aldeas del bosque con fusiles y encadenaban a hombres, mujeres y niños para venderlos en los mercados de esclavos de Colombia, Perú, Brasil y Bolivia.

No hay un dato global de los amazónicos sacrificados por el trabajo forzado, los castigos, las amputaciones y ejecuciones; solo en Colombia se estima que asesinaron a 40.000 personas sobre todo Huitotos (9), pero la cifra total puede multiplicarse pues decenas de pueblos desaparecieron y en el caso de los Sáparas, por ejemplo, de las al menos 70.000 personas que eran quedaron reducidas, cuando se fueron los caucheros, a 3.000. Hoy en Ecuador sobreviven apenas 283, de ellos 200 son niños y niñas.

Los sobrevivientes sáparas y el tesoro que conservaron

La Unesco declaró en el año 2001 a los Sáparas como parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, debido a la riqueza de su milenaria cultura y al hecho de haber preservado en su territorio uno de los *hot points* en biodiversidad más importantes del planeta. Pero su riqueza para la ciencia y la cultura, nada le importó al Estado ecuatoriano, ni a las empresas extractivistas.

Petroleras, mineras y madereras han intentado ingresar a su territorio, recurriendo para ello a métodos como la elección entre ellos de falsas directivas o el secuestro del padre de la presidenta de los Sáparas, para obligarla a renunciar. El Estado, a su vez, cada año intenta concesionar el bloque de crudo localizado en ese increíble *hot point* de biodiversidad, sin poder concretar su ambición solo gracias a la resistencia Sápara y a la presión ambientalista nacional e internacional.

El genocidio del petróleo en Ecuador

En la década del 70, llegó la petrolera norteamericana Texaco al nororiente ecuatoriano, recibida con la promesa del Estado de que ello permitiría eliminar la pobreza de la amazonia y del país entero; treinta años después los pueblos del bosque (10) viven más empobrecidos que nunca, con sus territorios envenenados producto del afán de la multinacional por multiplicar sus ganancias, arrojando a los ríos y a la tierra 18.000 millones de galones de productos tóxicos, las 917 piscinas

de lodo venenoso dejadas sin tratamiento alguno, y de provocar una epidemia de cáncer que afecta a 1 de cada 20 habitantes de la región. Pero Texaco niega los hechos, se niega a cualquier indemnización y, contrariamente, pretende que el Estado ecuatoriano le indemnice por haber denunciado el genocidio. Este ejemplo, entre muchos otros, explica sobradamente el pánico que provoca entre los *primeros pueblos* la presencia de las empresas extractivistas.

El covid-19, de la pesadilla al infierno

La historia no ha cambiado: en el siglo XXI seguimos actuando un país que depende de las exportaciones de productos primarios, hoy es el petróleo; el proceso de acumulación sigue basándose en la explotación de la población indígena y mestiza pobre, la Sierra continúa produciendo los alimentos para consumo interno y la Costa productos para la agroexportación. La deuda externa cada vez es mayor, incrementada con la pandemia, llegando al 61,4 por ciento del Pib (42.000 millones, aproximadamente, según datos del Ministerio de Finanzas). Los sectores de gran poder económico no quieren impuestos que puedan afectar sus extraordinarias rentabilidades, y quienes son los propietarios de los territorios donde reposan esos recursos son los más empobrecidos, y no reciben las regalías que les correspondería por ello, es el caso de los pueblos amazónicos.

El gobierno de Lenin Moreno, que difícilmente podrá explicar a la Historia hechos tan serviles como la entrega de Julian Assange, el pago de leoninos intereses de la deuda externa en lugar de salvar a las víctimas de la pandemia, y que además se aprovechó del covid-19 para impulsar la privatización de los bienes más rentables del Estado en favor de empresarios y banqueros, mientras prohibía y prohíbe la justa protesta social; tiene como principales oponentes a los trabajadores y sobre todo al movimiento indígena, acusado de ser subversivo por el Ministro de Defensa por su resistencia en octubre de 2019 (11).

Preocupa, entonces, la declaración gubernamental de emprender macro proyectos extractivistas petroleros y mineros para rehabilitar la economía afectada por el covid-19, pues los Sáparas, con una población tan reducida (¡80 adultos y 200 niños subversivos!) y un territorio rico en recursos minerales, pero sobretodo en biodiversidad, es el eslabón más débil de la resistencia. Pero el peligro es para todos los *pueblos originarios*, convertidos en la clase social más pobre, con sus tierras contaminadas e invadidas por empresas extractivistas y de monocultivo; sus culturas despreciadas y sus organizaciones perseguidas.

Una comunidad de saberes de la selva y de los andes

Como respuesta a todo este antiguo fenómeno, la Universidad Central del Ecuador, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y de los Círculos de Cultura, se encuentra como no había sucedido antes, empeñada, junto a profesores e intelectuales Sáparas, Kichwas amazónicos de la comunidad de Sarayacu y Andinos del grupo cultural Tinkunakuy, en diseñar una *comunidad de saberes*, un proyecto académico diferente, que en términos occidentales se llamaría Universidad.

No se trata simplemente de importar conocimientos a la selva y a los Andes, si no sobre todo de reconocer que los antiguos saberes de los *pueblos originarios* son Ciencia y es necesario conservarlos y continuar desarrollándolos. Se trata de una institución que busca prepararlos para una relación más justa e igualitaria con el mundo occidental; una academia que trate de mitigar los efectos del cambio climático en una región vital, considerada el pulmón del mundo, que apoye emprendimientos que eviten la dependencia de combustibles fósiles, sustancias contaminantes como el plástico y que fortalezcan su cosmovisión y su organización. Y, finalmente, que junto a instituciones académicas internacionales, preserve e investigue para la humanidad el riquísimo *hot point* de biodiversidad que ellos conservaron. ■

1. Una de las varias especies de primates aulladores que viven en los bosques amazónicos. No tan activos como otros monos, tienden a sentarse en un árbol favorito y deleitarse con las hojas que los rodean por largos períodos de tiempo.
2. Las lenguas tupí-guaraní constituyen una subfamilia de 53 lenguas de la familia macro-tupí que se hablan o se hablaban en la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Paraguay, Perú, y Venezuela. Comprende once subgrupos y una lengua no clasificada. Once lenguas se hallan extintas y al menos otras ocho están en peligro de extinción. La subfamilia más importante es la tupí, la de mayor extensión geográfica en el territorio de América del Sur. Además, las lenguas tupí-guaraní son probablemente el grupo de lenguas mejor estudiadas de la Amazonia, habiendo sido convenientemente reconstruido el proto-tupí-guaraní (proto-TG).
3. Palabra kichwa formado por los vocablos "Pacha", que significa universo, mundo, tiempo, lugar, y "Mama", traducido como madre, tierra, la fertilidad, lo femenino.
4. Contrato mediante el cual un indígena estaba obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibéndolo en cuantía simbólica.
5. Sistema colonial que consiste en un desigual acuerdo entre un hacendado y un peón, en donde el hacendado proporciona a un peón un pedazo de tierra para que siembre sus propios alimentos a cambio de su fuerza de trabajo.
6. Sistema en el cual los pueblos originarios prestaban su ayuda sin salario, a cambio de utilizar 'gratuitamente' los pastos, el agua y los caminos de la hacienda.
7. Personas que sembraban y trabajaban gratuitamente en las tierras del patrón, a cambio de tener una pequeña parte de los productos para ellos.
8. La etnia Huitoto, habita en la Amazonía colombiana en los resguardos de Monochoa, Leticia, Tarapacá, Nonuya, Puerto Zábalo, Los Monos, el Predio Putumayo, en el departamento del Amazonas; se encuentran además en el resguardo de Jirijiri, Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo y en los resguardos de El Quince, Amenanae, Coropoya, y Witora en el departamento del Caquetá. En algunos de estos resguardos comparten el territorio con otras etnias. Su población puede totalizar unos 1.000 habitantes.
9. UTN. (Octubre de 2018). *Economía y Finanzas utn*. Obtenido de Economía y Finanzas utn: <https://sites.google.com/site/economiafinanzasutn/historia-economica-del-ecuador>
10. Comunidades Cofanes, Siona, Siecocya, Siecopai, Kichwas Amazónicos y colonos del Nororiente.
11. Levantamiento popular de Octubre 2019, protagonizado por indígenas, estudiantes, trabajadores y transportistas; en rechazo a las medidas económicas del Gobierno.

Alejandro Santillán Magaldi
Nancy Medina Carranco

La máquina infernal

por Serge Halimi*



Hernando Vergaras, sin título, acrílico sobre lienzo (Cortesía del autor)

Enfrentada ya a preocupaciones sanitarias, ecológicas, económicas y sociales, la sociedad francesa soporta también una andanada de golpes bajo la forma de atentados terroristas. Se pretende entonces movilizarla para la “guerra”. Otra más. Pero al ser el enemigo a menudo indetectable, su destrucción reclama siempre un arsenal más poderoso que el anterior. No –o no todavía– con cañones y tanques, sino con más ataques a las libertades públicas. En efecto, ¿quién se atreve a defenderlas tras un atentado o durante una epidemia? Se imponen y aceptan pues restricciones sin discusión. Sólo se trata de un paréntesis, nos dicen; lo cerraremos una vez que se derrote al virus, o al terrorista, y vuelvan los días felices. Los días felices no vuelven. Pero, sometida a este régimen, una sociedad puede resquebrajarse.

Perpetrado en un contexto semejante, el crimen de un islamista fanático que, basándose en un falso testimonio difundido por las redes sociales, decapitó a un profesor al que no conocía, ha abrumado y conmocionado a todo un pueblo. Un checheno sin vínculos estrechos con una organización terrorista; pocos cómplices; apoyos casi inexistentes en el país: en otros tiempos, el asesinato de Samuel Paty se habría asemejado a la tragedia que puede causar un demente. Pero se produce en una historia jalonada por actos de terrorismo islámico que una o dos palabras asocian entre sí: Salman Rushdie, 11 de Septiembre, Bali, Madrid, Mohamed Merah, *Charlie*, Bataclan, Niza... Sangrientos atentados o amenazas de muerte contra escritores, judíos, caricaturistas, cristianos. Y que también mataron a musulmanes.

Queda clara pues la irresponsabilidad de aquellos que, no bien se dio a conocer la decapitación de Con-

flans-Sainte-Honorine, superaron rápidamente su conmoción para pregonar, sin razón, que en materia de vigilancia y represión “nada se hizo en los últimos treinta años”. Con el fin de exigir luego que el Estado tome medidas excepcionales contra los inmigrantes y musulmanes. La derecha habla pues de reformar la Constitución; el ministro del Interior está preocupado por las “góndolas dedicadas a la cocina comunitaria” en los supermercados; periodistas reclaman que se calle al Consejo de Estado, al Consejo Constitucional, al Tribunal Europeo de Justicia, para que ya nada pueda obstaculizar las resoluciones administrativas arbitrarias y las detenciones motivadas por un simple antecedente policial. Los mismos agregan que hay que prohibir los “discursos de odio” en las redes sociales sin darse cuenta de que divulgan otros igualmente venenosos, pero en canales de noticias en continuado.

El horror de un crimen habría podido favorecer el apoyo finalmente unánime de la población a docentes a los que los sucesivos gobiernos han reducido al papel de variable de ajuste presupuestario y entregado a las presiones de los padres de alumnos. En lugar de ello, se percibe nuevamente un tufillo a “guerra de civilizaciones”. No podrá sino dividir más a sectores del pueblo francés a los que sistemáticamente remiten –y no sólo a los integristas musulmanes o la extrema derecha– a su “comunidad”, a su familia, a su Dios**. Y es contra esta máquina infernal que “nada se hizo en los últimos treinta años”. ■

** Véase Serge Halimi, “Ahmadinejad, mon héros”, *Le Monde diplomatique*, París, agosto de 2016.

*Director de *Le Monde diplomatique*.
Traducción: Gustavo Recalde

Índice

¿Nueva? normalidad: “Cambiar para que nada cambie” <i>por Carlos Gutiérrez Márquez</i>	2
¿Cómo reconstruir a Colombia en la pospandemia? <i>por Darío I. Restrepo</i>	3
El orden internacional que viene <i>por Olivier Zajec</i>	4
Informe especial: La tarea de la pospandemia revocar la normalidad	
Otro sistema de salud es necesario y posible <i>por Mario Hernández Álvarez</i>	8
Replantear la educación superior <i>por Jorge Iván Bula E. y Andrés Santiago León P.</i>	10
Un nuevo contrato para la reproducción social y de la vida <i>por Yenny Ramírez, Luisa Tovar, César Giraldo</i>	12
Hacia un sistema tributario progresivo y eficiente para el desarrollo <i>por Jairo Orlando Villabona R.</i>	14
Mejorar la protección social para la vejez pasa por marchitar el sistema de ahorro individual <i>por Decsi Arévalo H. y Oscar Rodríguez S.</i>	16
Los retos para el cambio climático después de la crisis <i>por Diego Guevara C., Santiago Castaño S. y Leonardo Rojas R.</i>	18
Colombia, de la exclusión a la inclusión <i>por Darío I. Restrepo B. y Camilo A. Peña G.</i>	20
Chile: El día después <i>por José Bengoa</i>	22
El “gran confinamiento” del Tercer Mundo <i>por Gilbert Achcar</i>	24
Una pandemia, dos futuros <i>por Robert Boyer</i>	26
Alto Karabaj: Del conflicto interétnico a la geopolítica global <i>por Sergei Markedonov</i>	28
Moscú quiere ser una “ciudad global” <i>por Vladimir Pawlotsky</i>	30
Misterios y podería de la flota pesquera china <i>por Ian Urbina</i>	34
En Liverpool, el fútbol como crisol de la identidad <i>por Quentin Guillon</i>	36
La rebelión de las surcoreanas <i>por Frédéric Ojardias</i>	38
Libros y reseña del mes	40
La máquina infernal <i>por Serge Halimi</i>	42